

CASO GÜRTEL LAS NOTICIAS SOBRE CCAA VARIAS

LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA EN CASTILLA Y LEÓN

LAS SIGLAS "TOTI NO SON SUFICIENTES PARA IMPUTAR A NADIE"

El presidente de las Cortes de Castilla y León cree que la relación entre "T.O." y el apodo con el que es conocido no basta para relacionarlo con la 'Gürtel'

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, ha negado hoy estar vinculado a la trama Gürtel porque "jamás" ha recibido una comisión. Según Fernández Santos, la relación entre las siglas "T.O.", aparecidas en la caja B de la trama corrupta, y el apodo con el que es conocido, *Totí*, "no son suficientes para imputar a nadie".

Fernández Santiago, que ha comparecido solo a petición propia en la sede autonómica del PP, se ha referido a la información publicada hoy en EL PAÍS, según la cual el actual presidente del Parlamento regional recibió de la red corrupta comisiones por obras para una constructora afín al cerebro de la trama, Francisco Correa. "Es falso que yo haya recibido cantidad alguna. Yo soy una persona normal, en estos 25 años de mi andadura jamás he cobrado una cantidad por ningún tipo de adjudicación de expediente administrativo", ha remarcado Fernández Santiago, quien ha precisado que el Parlamento cuenta con sus declaraciones de bienes y sus declaraciones de renta.

La policía lleva varios meses investigando las siglas que el contable de la red dirigida por Correa, José Luis Izquierdo, puso en los apuntes de la caja B en relación con las supuestas comisiones por la adjudicación de una obra en Castilla y León. Los analistas de la policía se fijaron en las siglas "T.O." y llegaron a la conclusión de que se trataba del ex consejero de Fomento castellanoleonés José Manuel Fernández Santiago, conocido como *Totí*.

Apoyo del presidente de Castilla y León

Fernández Santiago ha asegurado que cuenta con el apoyo expreso del presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con quien ha hablado durante la mañana de hoy, y con otros miembros de la Ejecutiva Nacional del PP, de quienes no ha revelado su identidad. La relación con Herrera es "muy fluida" y le ha ofrecido su "total apoyo", ha expresado Fernández Santiago. El presidente del parlamento autonómico ha confesado que no ha puesto su cargo a disposición de su partido, aunque ha reiterado en varias ocasiones que lo hará si entiende que esta circunstancia perjudica al PP.

El presidente de las Cortes se ha quejado de la "total indefensión" que sufre por no tener acceso a la información que obra en manos del Tribunal Supremo y ha recordado que no está imputado en el procedimiento judicial que investiga la el *caso Gürtel*", del que ha dicho desconocer al que al parecer es el principal dirigente, Francisco Correa.

www.elpais.es 19.10.09

EL SUPREMO RECIBE LAS PRUEBAS QUE IMPLICAN AL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN EN LA RED GÜRTEL

Un informe policial de 22 folios y tres anexos documentales que manejan ya los magistrados del Tribunal Supremo implica al Gobierno de Castilla y León en la trama que dirigía Francisco Correa. En concreto, al ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago.

El citado informe fue remitido hace 15 días al Supremo porque recoge supuestos pagos de la trama Gürtel al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino como comisión por una obra pública, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, adjudicada por el Gobierno de Castilla y León. Barcenas y Merino, dada su condición de aforados nacionales, están siendo investigados por el alto tribunal.

El informe policial arranca de una documentación hallada en las oficinas de la trama corrupta sobre la adjudicación de una carretera por 2,7 millones a la constructora leonesa Teconsa -en un fax remitido a la trama corrupta desde la Consejería de Fomento de Castilla y León- y del reparto de comisiones por el 3% de ese dinero entre altos cargos del PP y el propio Correa. Teconsa, afín a Correa, fue la adjudicataria de la sonorización de la visita del Papa a Valencia en 2006, de lo que la trama también sacó tajada.

La policía señala: "Todos los indicios permiten inferir que se produjo una adjudicación amañada de la obra en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa así como de cargos públicos y responsables políticos con capacidad de influir en la decisión de la Consejería de Fomento de Castilla y León de adjudicar el concurso a Teconsa". Tras meses de pesquisas policiales para conocer quién se escondía tras las siglas "T. O." o "TOTI", la policía concluye que se trata de Fernández Santiago. "Todo parece indicar", indica el informe, "que el entonces consejero de Fomento de la Junta y actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (TOTI), podría haber tenido participación en los hechos".

En el reparto de las comisiones, según un cuadro elaborado por la policía, destacan los 39.000 euros cobrados supuestamente por Fernández Santiago y otros 18.600 que se atribuyen a Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP. "La persona que más dinero recibe de la operación corresponde a quien tiene una capacidad directiva sobre la adjudicación del concurso, es decir, al consejero de Fomento, cuyo departamento convoca el mismo", señala el informe.

(www.elpais.com, 19/10/09)

LA INVESTIGACIÓN SEÑALA SIN NINGUNA DUDA A "TOTI" COMO EL EX CONSEJERO DE FOMENTO

La policía lleva varios meses investigando las siglas que el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, puso en los apuntes de la caja B en relación con las supuestas comisiones por la adjudicación de una obra en Castilla y León. Los analistas de la policía se fijaron en las siglas "T. O." y llegaron a la conclusión de que se trataba del ex consejero de Fomento castellanoleonés José Manuel Fernández Santiago, conocido como Toti.

El informe policial acumula indicios para llegar a esa conclusión: "Resulta significativo", señalan los investigadores, "que para referirse a la persona que recibe las mismas cantidades se mencione en una ocasión a TOTI, en otra se utilice TO, por lo que se infiere por parte de la investigación llevada a cabo hasta este momento que las palabras TOTI y TO se corresponden con la misma persona". "Toti", añade la policía, "es el apodo bajo al que se conoce a José Manuel Fernández Santiago en Arenas de San Pedro (Ávila)", su lugar de nacimiento.

La policía descubrió, además del reparto de comisiones por la adjudicación de la obra de la variante de Olleros de Alba, otro documento que guardaba la trama corrupta con una nueva comisión ilegal supuestamente pagada por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, a Fernández Santiago. Lo explica así: "Entre la documentación hallada en el interior de la carpeta azul intervenida en la casa de José Luis Izquierdo figura un folio en el que constan impresas diversas anotaciones con fecha 23 de abril de 2002 y una distribución de la cantidad de 49.000 euros, recibidos de Pablo Crespo [número dos de Correa]".

En ese folio "había una tira impresa grapada con diversas cantidades que suman el importe de 49.000 euros repartida de la siguiente manera: "1 sobre TT (Toti) 18.000; 1 sobre SL (Santiago) 12.000 y Cartera PC 19.000". "Los 19.000 euros destinados a Cartera PC tienen su reflejo dentro de los archivos de contabilidad B que se hallan en el interior de memoria (pen drive) ocupado a José Luis Izquierdo".

"Asimismo", prosigue la policía, "la otra persona que se menciona en el reparto como "SL (Santiago)", al que se le hacen entrega de 12.000 euros, se trataría de Santiago Lago Bornstein, que fue consejero y secretario de Special Events y Pasadena Viajes entre 2001 y 2002, pertenecientes ambas a la estructura societaria de Francisco Correa".

"En este momento de la investigación", agrega, "no es posible atribuir a ningún hecho concreto el origen de la recepción de una cantidad por parte de Francisco Correa, y por qué en el posterior reparto del mismo, una parte es entregada a la persona bajo el nombre de TT (Toti)". La investigación recuerda que "la fecha en la que se habría producido el pago de esa cantidad de dinero es sólo unos meses antes de

que se haya efectuado el pago de otras cantidades vinculadas a la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, y cuando éste [Fernández Santiago] ya ocupaba el cargo de consejero de Fomento".

El informe policial destaca las relaciones entre la empresa Teconsa, la constructora adjudicataria de la citada obra, y Correa. Hay grabaciones telefónicas entre Correa y José Luis Martínez Parra, vicepresidente y consejero de Teconsa.

Fernández Santiago, en conversación con EL PAÍS en julio, sostuvo que no tiene ninguna relación con la trama Gürtel, que no conoce a Correa de nada, y que el expediente sobre esa carretera "es impecable". De hecho, insistía, fue objeto de una sesión parlamentaria en las Cortes autonómicas. Sólo admitió que conocía desde hace muchos años a Gerardo Galeote, uno de los implicados, y que, efectivamente, mucha gente le conoce como Toti. Entonces Fernández Santiago se quejaba de que alguien pudiera incriminarle sólo porque las iniciales "TO" coincidieran con las de su apodo. Sin embargo, en los nuevos documentos de la policía su apodo aparece completo: Toti.

(www.elpais.com, 19/10/09)

LA INVESTIGACIÓN IMPLICA AL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN EN LA TRAMA GÜRTEL

Después de tocar Madrid, Valencia y Galicia, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa alcanza al Gobierno de Castilla y León, también del PP. Un nuevo informe policial remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica a José Manuel Fernández Santiago, actual presidente del parlamento de Castilla y León y ex consejero de Fomento, en una adjudicación amañada con reparto de comisiones ilegales.

La constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontándole el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.

Otro de los beneficiados es T. O., unas siglas que la policía investiga desde febrero y que podrían corresponder a Toti, el sobrenombre por el que se conoce a Fernández Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la polémica adjudicación de la variante a Teconsa.

La investigación policial de este caso arrancó en febrero, cuando se halló una carpeta de color azul registrada como "R-16 Documento 02" en poder de José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta. En el interior de la carpeta había "cuatro papeles cogidos con un clip, dos de ellos grapados", que contenían un fax remitido desde la consejería de Fomento de Castilla y León con los datos de la adjudicación definitiva de la obra: "Adjudicataria Tecnología de la Construcción SA (TECONSA), 12 meses de ejecución y un presupuesto de 2.847.959 euros". En ese fax aparecía, manuscrita, la cantidad de 2.455.137 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicación descontándole el IVA. Y debajo, otras dos cifras: "73.650=12.255". La investigación interpreta que la primera, cifra, 73.650, se refiere a euros y es el 3% del presupuesto de adjudicación sin IVA. La segunda cifra, 12.255, se refiere a su traducción en pesetas (12.255.000 pesetas).

Entre los cuatro folios en poder del contable de Correa también figura el reparto de la supuesta comisión ilegal, que la policía interpreta así:

- "Sobre con 24.000 euros (4 millones de pesetas) T. O. (aún sin identificar) que entrega PC (Paco Correa) el 17 de enero de 2003".
- 16.400 euros para "G" (aún sin identificar).
- 18.600 euros para "J" (aún sin identificar)
- 17.500 euros para PC (identificado como Paco Correa)
- 18.600 euros para L, quien se identifica también con las siglas LB, que se corresponden con Luis Bárcenas, actualmente senador electo por Cantabria.

La policía concluyó que se había producido una supuesta "adjudicación amañada en la variante de Olleros de Alba, en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que puede influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de Castilla y León".

Entre las grabaciones de las conversaciones de Correa que autorizó el juez Garzón figuran algunas que mantuvo el jefe de la trama corrupta con José Luis Martínez Parra, directivo de Teconsa. El actual presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, declaró en su día que no conocía de nada a Correa y que el expediente de adjudicación de la obra era "impecable".

(www.elpais.com, 06/10/09)

LA CONSTRUCTORA QUE PAGÓ LAS COMISIONES SACÓ SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500

Teconsa, la constructora de origen leonés que pagó supuestamente una comisión de 72.000 euros por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, manejó de manera sospechosa entre 2004 y 2007 casi siete millones de euros en billetes de 500 euros, según un informe elaborado por la Agencia Tributaria relacionado con la investigación del caso Gürtel.

En casi todas las operaciones analizadas, según la Agencia Tributaria, Teconsa aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En un solo mes de 2004, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de Teconsa, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de Teconsa), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", señala la Agencia Tributaria en su informe.

La anómala actuación de Teconsa es posterior al pago de las comisiones que analiza el caso Gürtel, porque en los años en que se produjo la Agencia Tributaria no analizaba el uso de billetes de 500 euros.

La variante de Olleros de Alba fue adjudicada a Teconsa porque, aunque empató a puntos en el concurso con FCC, ofreció un precio más barato. Aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente al precio inicial de adjudicación 2,84 millones de euros.

(www.elpais.com, 06/10/09)

"¿T.O. ES 'TOTI'?"

Aunque en público apenas tratan del asunto, los dirigentes más relevantes del PP no paran de hablar entre ellos y de buscar todo tipo de informaciones sobre las novedades del caso Gürtel. Ellos tienen buenas fuentes tanto en el mundo de la Justicia como en el de la policía. No en vano algunos, como el propio Mariano Rajoy, fueron ministros del Interior o responsables policiales. La información que llegaba de esas fuentes tenía en las últimas semanas muy preocupados a los dirigentes del PP por la posibilidad de que el caso se extendiera definitivamente a Castilla y León, una comunidad clave para el partido, que siempre ha estado en manos del PP y fue cuna del aznarismo.

En los mentideros del partido se daba por hecho que José Manuel Fernández Santiago acabaría de alguna manera salpicado por este asunto. Todo el mundo con algo de información en el partido sabe que el apodo con el que se le conoce es Toti. Él mismo reconoció en conversación telefónica que ése es su apodo. Después de conocer el documento en el que se atribuían supuestos pagos de la red de Correa a un T.O. muchos dirigentes asumieron en privado que podía referirse al ex consejero de Fomento Fernández Santiago, que tiene buenas relaciones con otro implicado en el escándalo, el ex eurodiputado Gerardo Galeote. Fernández Santiago aseguró a finales de julio que "en un Estado de derecho nadie puede acusar a nadie de algo tan grave sólo porque coincida una inicial", pero la policía parece haber encontrado más elementos para implicarle.

(www.elpais.com, 06/10/09)

CAE OTRA DE LAS CONSTRUCTORAS VINCULADAS A LA GÜRTEL, ACOSADA POR LAS DEUDAS

Teconsa, empresa de la que es consejero el imputado Ramón Blanco Balín, y de la que el juez Garzón sospechaba que podía haber pagado comisiones a la trama Correa por lograr que la Junta de Comunidades de Castilla y León le adjudicara la construcción de la autovía de Olleros ha solicitado al Juzgado Mercantil de Madrid el concurso voluntario. El pasado mes de julio sus acreedores ya habían presentado tres solicitudes de concurso necesario que están pendientes de resolución.

La empresa, constituida en 1981 por el empresario ponferradino, José Martínez Núñez, cuenta con delegaciones en Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias, Andalucía y Levante. Según las cuentas presentadas por la compañía en el Registro Mercantil, ganó en 2007 casi diez millones de euros. Ese año, su mayor facturación la hizo en Castilla y León, con 61,1 millones de euros facturados en obra pública y otros 68,8 millones en obra privada.

Aunque Martínez Núñez no es uno de los imputados por el caso Gürtel, su empresa, Teconsa sí se ha visto salpicada por el caso al haber recibido de la Junta de Castilla y León la concesión de la variante de Olleros de Alba por 2,45 millones de euros en noviembre de 2002. Según el auto que remitió el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Teconsa pagó a Francisco Correa a cambio de influir en la Consejería de Fomento, "y éste a su vez distribuyó entre todas las personas que, al parecer, hicieron posible la adjudicación". Añade que "algún político" pudo influir en la concesión, junto a Correa pero no da nombres. Sí aclara que las iniciales de tres personas que cobraron son "T. O., G y J."

En un fax intervenido a Correa procedente de la Consejería de Fomento de Castilla y León en el que se le informaba de la adjudicación a Teconsa de la construcción de la autovía de Olleros, figuraba una anotación manual con una cantidad: 73.650 euros. Lo que equivaldrá al 3% de la concesión, la comisión habitual que se cobra en los casos de corrupción.

Teconsa también ha sido una de las grandes beneficiarias de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla, comandada por dos de los imputados en la trama Gürtel, Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor.

Además, el hijo de José Martínez Núñez, José Luis Martínez Parra, participa en una de las sociedades del imputado Jacobo Gordon (a su vez amigo íntimo de Alejandro Agag y testigo de su boda). En concreto, es uno de los inversores de Real State Equity Portfolio, un fondo inmobiliario promovido por Francisco Correa, el cabecilla de la trama. En todo este entramado de nombres y coincidencias, aparece de nuevo Ramón Blanco Balín, que ha sido también consejero de Real State Equity Portfolio. Esta sociedad operaba fundamentalmente en la zona noroeste de Madrid: Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, principalmente. Casualmente todas ellas son territorio Gürtel.

La otra gran constructora de origen castellano-leonés, el Grupo Begar, se encuentra en una situación similar. Enfrentados en los negocios pero acosados ahora por las deudas. José Luis Ulibarri, propietario de la empresa, no levanta cabeza desde que fue imputado en el caso Gürtel.

(www.elplural.com, 03/09/09)

UNA CONSTRUCTORA QUE PAGÓ COMISIONES A CORREA SACÓ SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500

El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas.

En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicación de Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el diputado Jesús Merino, se detalla cómo la investigación de los tentáculos de la red de Francisco Correa en Castilla y León ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se están investigando.

La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.

Garzón detallaba, basándose en los informes de los investigadores, que la red de Correa había anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicación, y 12.255 la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación, un dinero que éste repartió después entre algunas personas aún sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el más habitual para comisiones de adjudicaciones. Más tarde, los investigadores encontraron otra documentación que apunta en el mismo sentido [ver gráfico]: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León" sobre otro reparto similar de 96.100 euros.

Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realizó un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leonés. Según se puede leer en ese documento [ver gráfico reproducción de la izquierda], "la información recibida en relación con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007".

En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de TECONSA, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de TECONSA), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe.

Este mismo organismo ya había destapado en ese mismo informe que Constructora Hispánica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que también habrían ido a parar en parte a Bárcenas, según la fiscalía- había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento.

La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un precio más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA.

A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.

De hecho, los populares están preocupados porque se ha trasladado en el partido que Bárcenas, cuando fue interrogado el pasado miércoles en el Tribunal Supremo por su posible implicación en la concesión de la variante de Olleros, contestó al juez y a los fiscales que debían investigar a los responsables de esa adjudicación para identificar esas iniciales. Bárcenas no llegó al extremo de señalar nombres de

compañeros suyos de partido, pero dejó caer dónde había que mirar, según las mismas fuentes. Sí fue tajante con Luis Delso, presidente de Isolux, al asociarle al apunte de "Luis, el cabrón".

El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó a algunas preguntas de EL PAÍS. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste.

Fernández Santiago asegura que él no tiene ningún tipo de relación con la trama de Gürtel. Admite que conoce de hace muchos años a Gerardo Galeote, uno de los principales implicados, pero nada más. "No conozco de nada a Correa, no le he visto en mi vida. No tengo la menor idea de a qué se refieren esas iniciales, pero en cualquier caso la presunción de inocencia en un Estado de derecho debe llevar a que a nadie le acusen de algo tan grave sólo porque su inicial pueda coincidir con la que hay en un papel que ha aparecido", sentencia.

(www.elpais.com, 27/07/09)

MERINO ALEGA AL JUEZ QUE EL APUNTE "JESÚS MERINO" PARECE MANIPULADO

El diputado popular Jesús Merino negó ante el juez Francisco Monterde todas las acusaciones en las que aparece implicado como receptor de fondos de la trama de corrupción que afecta al Partido Popular y que presuntamente dirigía Francisco Correa.

El diputado rechazó que él fuera J.M. tal y como figura en la contabilidad en negro intervenida en un lápiz de memoria al supuesto contable de la red. Incluso llegó a negar que él fuera el "Jesús Merino" que consta en otra de las anotaciones contables. El diputado, que compareció a petición propia y en calidad de imputado provisional, puesto que no se ha tramitado todavía un suplicatorio para proceder contra él, llegó a explicar que la palabra Merino, que figura en la anotación, parece diferente de las restantes tipografías que aparecen en el documento, por lo que aventuró que posiblemente se habría añadido con posterioridad. Merino no llegó a decir quién habría sido la persona que pudo añadir su apellido en el documento, pero sí aseguró que el tal Merino no era él. Previsiblemente esta estrategia de defensa dará lugar a la solicitud de una prueba pericial caligráfica para determinar si la palabra Merino fue escrita por la misma mano que el resto de las anotaciones o si pudo ser agregada con posterioridad.

A diferencia de Bárcenas, que estuvo ampuloso, altanero y muy nervioso y tenso, Merino fue suave y tranquilo en sus manifestaciones ante el juez. Negó una a una todas las imputaciones que figuran en la exposición razonada del juez Antonio Pedreira.

Ante el Supremo, Merino sólo está siendo investigado por cohecho -y no por delito fiscal, como Bárcenas- por un supuesto soborno de 50.000 euros. En la contabilidad figuran otros supuestos pagos, pero el Supremo no los analiza porque estarían prescritos. Por un lado, el 14 de junio de 2002 una persona no identificada entregó al grupo de Correa 175.973 euros. "Esta cantidad se distribuiría entre diferentes personas, resultando curioso que tres de ellas, reciben exactamente la misma cantidad: Jesús Merino, L.B. [presumiblemente Luis Bárcenas] y G.G. [supuestamente Gerardo Galeote], quienes reciben 24.040 euros cada una", según la exposición del juez Pedreira.

"Aparte de esta cantidad, una persona con las siglas J.M. habría recibido otras sumas de dinero en otras fechas" y menciona: 2 millones de pesetas (12.000 euros) en febrero de 2002 y 60.000 y 6.000 euros en dos fechas diferentes de mayo de 2003.

Por otra parte, en el archivo denominado "caja B actual" consta un apunte de diciembre de 2007 de 50.000 euros precedido del concepto "ent. a Jesús Merino". El escrito del juez interpreta que en dicha fecha "salieron 50.000 euros de la tesorería oculta del grupo Correa para su entrega a Jesús Merino".

Merino alegó que conocía a Francisco Correa y Pablo Crespo porque coincidía con ellos en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, donde él tiene su despacho y ellos sus oficinas, pero negó haber recibido ningún dinero de ellos.

Mientras, fuentes del PP señalaron que durante su declaración el pasado miércoles, el juez Monterde metió a Luis Bárcenas en un aprieto cuando le preguntó por el cuadro que presuntamente quería adquirir

y para el que había pedido un crédito de 330.000 euros, que devolvió en billetes de 500 sólo un mes y medio después, cuando supuestamente se frustró la operación. Bárcenas, que trató de ser convincente, llegó a decir que el cuadro era de un pintor del siglo XVII y llegó a mencionar al autor del mismo.

Tras las declaraciones preliminares de los dos aforados, parece evidente que a lo largo de la próxima semana el juez instructor Francisco Monterde deberá pronunciarse sobre si archiva las actuaciones o si solicita el suplicatorio para proceder contra Bárcenas y Merino al Parlamento. Fuentes jurídicas precisaron que en este momento el juez se encuentra imposibilitado para avanzar en la investigación, ya que ni siquiera podría tratar de contrastar la veracidad de los documentos aportados por Bárcenas en su descargo, ya que se trataría de una investigación patrimonial que está vedada por el artículo 71.2 de la Constitución. Si el juez Monterde cree que hay cosas por aclarar, incluso sin prejuzgar sobre la verosimilitud de las acusaciones, deberá tramitar el suplicatorio cuanto antes.

(www.elpais.com, 24/07/09)

JESÚS MERINO, EL DESCONOCIDO DE LA 'GÜRTEL'

Su nombre ha pasado más inadvertido. Jesús Merino, diputado por Segovia, se vio involucrado hace unos meses en el caso Gürtel. Según la investigación, pudo percibir de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa más de 200.000 euros. Los focos de atención pública recon desde el principio en el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y en el europarlamentario Gerardo Galeote. Merino no era ni una figura tan simbólica como el primero, ni una persona tan conocida como el segundo. Pero tampoco se trata de un simple parlamentario.

Aunque su labor es desconocida para la opinión pública, pertenece al Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular. Este equipo, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, está formado por diez personas. Merino es el coordinador de Comisiones, un cargo más técnico que político.

Precisamente por ello y porque finalmente la causa se ha elevado al Supremo, para alguno de sus compañeros de filas el dirigente conservador está también en el ojo del huracán. "Le pueden llamar a declarar por posible cohecho y delito fiscal y está en primera línea política. Sale en todas las fotos en la bancada popular junto a Rajoy", resaltan desde el Congreso.

En el partido hay quien juzga que si es imputado formalmente tendría que abandonar de inmediato su cargo interno. "Debería dar un paso atrás y quedarse como diputado de a pie para no dañar la imagen del PP", cuentan. Son los mismos que están exigiendo que se imponga un "criterio único" para evaluar todos los casos y que se encuentran "despistados" ante las distintas fórmulas que se manejan. Los que no ven necesario que deje de ser coordinador defienden que Merino tiene un puesto "menos relevante" que el del tesorero en la vida del partido.

Los que le conocen bien aseguran que si se diera el caso nadie le va a tener que exigir una renuncia. "Es muy sensato y antes de que le dijeran nada él se ocuparía", afirma una amiga suya. Otro amigo insiste: "No tiene interés por aferrarse a ningún cargo, pero sería injusto después de una vida dedicado a la gestión pública".

Nadie entra a valorar si en ese supuesto tendría que ser también suspendido cautelarmente de militancia o renunciar a su acta parlamentaria. No todos piensan que le convenga mantenerla para seguir siendo aforado. "Al menos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid podía recurrir ante otra instancia", destacan.

Su círculo más estrecho asegura que Merino ha hablado con Rajoy y que se encuentra "tranquilo y bien, dentro de lo que significa verse en la diana".

Todos coinciden en señalar que es una persona "seria" y "muy trabajadora". Recuerdan su perfil centrista como jefe de gabinete de Rafael Calvo Ortega, ministro de Trabajo durante el Gobierno de UCD con Adolfo Suárez. Y varios dirigentes conservadores aseguran que "escucha a los demás" y es bastante "campechano". A sus 55 años disfruta con irse a su casa del pueblo en Hontalbilla a descansar. "Cero apariencia de opulencia", remarcan. Por eso mismo, para todos fue "una tremenda sorpresa" que apareciera implicado en la supuesta trama de corrupción. Los que llevan años trabajando junto a él se

resisten a creer todo cuanto se ha publicado. Están convencidos de que es "inocente" y destacan que no le ven ningún sentido a esta historia porque él ya no ejercía "ningún cargo de poder e influencia".

Tampoco quieren relacionarlo con el despacho de abogados que mantiene en activo y que figura en su declaración de actividades. El vínculo con Correa no saben determinarlo con certeza. Por las fechas piensan que podrían haber coincidido durante la etapa en la que Merino abandonó Castilla y León y se fue para la sede nacional.

Pero al igual que cuenta con apoyos, a Merino tampoco le faltan los enemigos. Estos le tachan de "comisionista" e "impresentable". Y aseguran que siempre ha "serpenteado" entre la política y los negocios. Palabras muy duras que los suyos tratan de borrar pidiendo que no se le enjuicie anticipadamente y reconociendo que ellos confían plenamente en su palabra. Dicen que cuando se conozcan los datos, dará "explicaciones".

En Castilla y León existe cierta "preocupación y nerviosismo". Pero aún así, el secretario general del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado para él en público la presunción de inocencia. Se da la circunstancia de que Mañueco es además el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, el órgano del partido que vela por la ética de sus cargos y se ocupa de valorar si los suspende o no de militancia.

En su tierra le siguen muy de cerca porque ocupó varios cargos de responsabilidad. Entre 1991 y 1999 fue vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta. También fue secretario de la formación regional. Su carrera está muy vinculada al ex presidente del Senado Juan José Lucas. Sólo en Segovia dicen que no despierta "muchas simpatías" porque ha tenido sus más y sus menos en el partido. Merino fue senador durante un año y aterrizó en Génova, donde desde 2002 se encargó del área de Política Autonómica con Aznar en el Gobierno y Javier Arenas a las riendas del PP.

Fue él quien le dio el testigo a Sáenz de Santamaría. Se cuenta que durante la pasada legislatura ambos sintonizaron en plena tramitación de las reformas estatutarias. Pero no por eso llegó a la dirección del grupo. "Fue como cuota castellanoleonese, por petición expresa de Juan Vicente Herrera", matizan en el PP. A algunos les hace gracia que Merino haya regresado con los años a las dependencias que un día pisó como subdirector general del Banco de Crédito Industrial. Ahora ese inmueble es la ampliación del Congreso y allí es donde Merino tiene su despacho.

LA ACUSACIÓN

Las iniciales J. M. // En los documentos requisados a la trama corrupta figura un pago de 50.000 euros a "Jesús Merino" y otras entregas que suman 170.000 euros a "J. M.", iniciales que, según la Policía, le corresponden. A esta información de El País respondió Merino con un comunicado.

"Filtraciones interesadas" // Merino dijo que "nunca" había recibido dinero de Correa y que tampoco había mantenido "relación comercial o profesional" con sus empresas. Y lo denunció como "filtraciones interesadas".

EL DIPUTADO MERINO NIEGA QUE COBRARA DE LA TRAMA

El diputado del PP por Segovia Jesús Merino Delgado aseguró , a través de una nota, que "nunca" ha recibido "cantidad de dinero alguna del señor [Francisco] Correa" ni ha mantenido "relación comercial o profesional de ningún tipo con sus empresas". La declaración de Merino responde a la información publicada por EL PAÍS de que en la contabilidad B (dinero negro) de las empresas de Correa figura un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero por 170.000 euros a "J. M.", iniciales que la investigación policial identifica como correspondientes a dicho parlamentario.

Merino explica que, desde 1999, no tiene ningún cargo en la Junta de Castilla y León y que, como secretario de Política Autonómica del PP desde 2002, ha desempeñado funciones "estrictamente políticas". Añade que todas sus actividades están declaradas y autorizadas por el Congreso. Merino cree que lo que llama "filtraciones interesadas de un presunto informe policial" rompe la presunción de inocencia.

(www.elpais.com, 20/05/09)

CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS

La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.

En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.

Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP.

En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.

De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.

A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.

Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales.

En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.

"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.

Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.

Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos.

De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.

(www.elpais.com, 19/05/09)

ASTROLAGO "NUNCA TUVO ACTIVIDAD ALGUNA" POR LO QUE ES DIFÍCIL QUE SIRVIERA DE "TAPADERA" DE NADA

La mujer del que fuera consejero de Fomento y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino Delgado, en la actualidad diputado *popular* por Segovia, ha enviado una nota de prensa a la redacción de El Plural en la que aclara la información publicada por este periódico en la que se aseguraba que había montado una sociedad *fantasma* junto al tesorero del PP, Luis Bárcenas, señalado por Garzón en el caso *Gürtel* y en la que también participaba otro de los imputados en la trama corrupta, el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Ana Isabel Gutiérrez reconoce haber ayudado, como abogada, a ambos a crear la sociedad y haber actuado como Administradora Única de la misma pero insiste en que jamás tuvo actividad por lo que recomendó a sus clientes que la disolvieran. "A este respecto, subrayar que el propio juez Baltasar Garzón en uno de sus autos deja claramente explicitado que dicha sociedad 'nunca tuvo actividad alguna' por lo cual resulta muy difícil que sirviera de 'tapadera' para nada, ni mucho menos emitir facturas falsas o realizar pagos de tipo alguno", asegura en su escrito de rectificación, el cual publicamos literalmente tal y como nos solicita.

NOTA DE PRENSA DE LA ABOGADA ANA ISABEL GUTIERREZ EN RELACION CON ASTROLAGO DE INVERSIONES, S.L.

En Madrid, a 7 de abril de 2009

En relación con la información por usted publicada en su medio EL PLURAL.COM, con fecha del 7 de abril de 2009 y acogíendome a la legislación precisa en defensa de mi honorabilidad profesional y personal que regula la ley de Rectificación, y sin perjuicio de acudir a las instancias precisas que considere necesario, entre ellas la judicial en busca de amparo, le ruego publique literalmente la siguiente rectificación a la "información" por su usted difundida.-

1º.-El día 27 de abril del año 2006 se constituye ante Notario la sociedad ASTROLAGO DE INVERSIONES, SL.

2º.- D. Jesús Sepúlveda encarga profesionalmente a doña Ana Isabel Gutierrez, que viene ejerciendo como abogada de su familia desde hace años en asuntos tales como testamentarias, formalización y ejecución de contratos varios, etc..., la adquisición de participaciones sociales a los socios iniciales de ASTROLAGO, S.L. para él y para D. Luis Bárcenas. Al mismo tiempo la solicitan que actúe como Administradora Única de la Sociedad hasta que esta tuviera actividad ordinaria.

ASTROLAGO, S.L. jamás tuvo por tanto, actividad alguna, y en cualquier caso, el despacho profesional de la Sra. Gutiérrez liquidó en tiempo y forma todas sus obligaciones fiscales y administrativas contempladas en las leyes.

3º.-Al inicio del año 2008, dada la inexistencia total de actividad, desde el despacho profesional se aconsejó a los señores Sepúlveda y Bárcenas, la liquidación y disolución total de ASTROLAGO, S.L. opinión que fue aceptada por los referidos socios.

Inicialmente se procedió a la compraventa de sus acciones (4-4-2008) y posteriormente a la disolución (25-2-2009).

Por tanto los señores Sepúlveda y Bárcenas dejaron de ser socios de la empresa exactamente el día 4 de abril del 2008, como consta en la correspondiente documentación notarial.

4º.-Resulta totalmente falsa e injuriosa la afirmación de que se trata de una "sociedad fantasma", además de perseguible de oficio. Dicha empresa se constituyó de acuerdo a ley, liquidó y pagó sus impuestos con regularidad y se disuelve con arreglo al ordenamiento jurídico más estricto y ante Notario.

A este respecto, subrayar que el propio juez Baltasar Garzón en uno de sus autos deja claramente explicitado que dicha sociedad "nunca tuvo actividad alguna", por lo cual resulta muy difícil que sirviera de "tapadera" para nada, ni mucho menos emitir facturas falsas o realizar pagos de tipo alguno, como se ha dicho en alguno de los medios de comunicación. Es más, nunca emitió NINGUNA factura como se desprende con toda lógica de una empresa que no tiene activad.

Todo lo aquí afirmado se puede acreditar fehacientemente con la documentación existente en el despacho profesional de la señora Gutiérrez ante cualquier instancia, ya sea judicial o administrativa.

5º.-Finalmente, subrayar que las actividades de doña Ana Isabel Gutierrez nada tienen que ver y están totalmente al margen de la vida política de su marido y aunque no es de incumbencia de nadie, informar también que desde el momento mismo de su matrimonio tienen establecido un régimen legal de separación absoluta de bienes.

www.elplural.com 07.04.09

EL EX VICEPRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN Y DIPUTADO POPULAR POR SEGOVIA, BAJO SOSPECHA POR EL CASO GÜRTEL

Ana Gutiérrez, la mujer del que fuera consejero de Fomento y vicepresidente de la Junta de Castilla y León desde 1991 hasta 1999, Jesús Merino Delgado, creó en abril de 2006 una sociedad fantasma junto a Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular al que el juez Baltasar Garzón acusa de haber recibido por parte de Francisco Correa 1.353.000 euros.

La sociedad en cuestión es Astrologo de Inversiones S.L., sociedad inmobiliaria sin actividad ni trabajadores que fue dada de baja el pasado 30 de marzo, fecha en la que Ana Isabel Gutiérrez Benito figuraba como administradora única de esta empresa que podría haber servido como tapadera para crear facturas falsas para justificar diferentes pagos.

En Astrologo de Inversiones S.L. también participaba Jesús Sepúlveda, ex alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo, ex marido de la número tres de Mariano Rajoy, Ana Mato, e imputado en el caso Gürtel.

Aunque el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León (y diputado por Segovia a día de hoy), ha asegurado a la Cadena Ser que su mujer y él tienen "separación de bienes", nadie pasa por alto que las últimas investigaciones policiales sobre la trama sitúan a Bárcenas como intermediario en un contrato de la consejería de Fomento de Castilla y León a favor de Teconsa, empresa de la que el también imputado Blanco Balín era consejero.

Incluso, en las últimas investigaciones de la trama se apunta a que la trama de Correa habría utilizado a algún político con capacidad de influir en esa consejería para amañar el contrato a favor de Teconsa. Muchos piensan que ese político no es otro que Jesús Merino Delgado.

www.elplural.com 07.04.09

VALLADOLID DIO OBRAS A DEDO A ULIBARRI CON INFORMES NEGATIVOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL

Los informes de los técnicos municipales desfavorables no parecen un obstáculo para que el empresario José Luis Ulibarri, uno de los implicados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, consiga jugosos contratos del Ayuntamiento de Valladolid, gobernado con mayoría absoluta del PP desde 1995. El Plural ya informaba de algunas de estas adjudicaciones. Hoy ha salido a la luz otro escandaloso caso: el consistorio de Francisco Javier León de la Riva otorgó un concurso a Begar, la empresa del magnate castellano-leonés para ampliar el museo de Colón en la ciudad. Tres semanas después ampliaba este contrato adjudicando a la sociedad nuevas obras de remodelación del centro sin sacar éstas a concurso y pese a que la Secretaría del Consistorio emitió un informe en el que dudaba de la legalidad de la ampliación del contrato.

Son muchas las ciudades y municipios de Castilla y León que han beneficiado al magnate José Luis Ulibarri, ahora imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel que salpica al PP, con jugosos contratos y adjudicaciones. Valladolid, gobernada desde 1995 con mayoría absoluta por el popular Francisco Javier León de la Riva es uno de los feudos de este empresario, del que ha recibido desde 2003 cerca de 22 millones y medio de euros en adjudicaciones. El diario Público recoge hoy uno de los contratos más polémicos entre el Ayuntamiento y el empresario.

Se trata de la adjudicación que se hizo a Begar, el conglomerado de empresas de Ulibarri, para ampliar el museo Casa Colón con motivo de la celebración de quinto centenario de la muerte del descubridor. Las obras de ampliación salieron a concurso con un precio de licitación de 1,73 millones de euros, y optaron a su ejecución dos empresas además de Begar, todas con ofertas inferiores a dicho precio. La adjudicataria fue la sociedad de Ulibarri, que proponía un coste de 1,5 millones, una rebaja de un 13 por ciento sobre el precio propuesto por el consistorio.

Sin embargo, sólo tres semanas después los honorarios de Begar se vieron incrementados con creces: a la empresa se le adjudicaron también otras obras de remodelación de la casa museo que no estaban previstas en un principio, y por las que se pagaron 930.000 euros más. En este caso, las obras no salieron a concurso, pese a la oposición de la Secretaría del Ayuntamiento, que emitió un informe en el que subrayaba la importancia de que la nueva adjudicación saliera de nuevo a concurso público.

La Secretaría apuntaba en su informe sus dudas sobre la legalidad de ampliar el contrato sin publicitar y sin convocar un nuevo concurso. Según señalaban, ambos contratos deberían haberse licitado conjuntamente, ya que de otro modo se ponía en duda el cumplimiento de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, la Junta de Gobierno, integrada exclusivamente por miembros del PP, dio carpetazo al asunto alegando que no era necesario sacar estas obras a concurso, sino que era mejor que las asumiera directamente Begar, a la que ya se habían dado las primeras obras, para terminar antes los trabajos. De hecho, el consistorio aprobó la nueva adjudicación a Ulibarri y en las actas ni siquiera mencionó el informe desfavorable de la Secretaría.

(www.elplural.com, 14/04/09)

VALLADOLID FAVORECIÓ A UN IMPUTADO DEL 'CASO GÜRTEL' EL PP VETA LA INVESTIGACIÓN DE LAS EMPRE

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, donde sólo está representada el Partido Popular, se ha negado reiteradamente a responder a las preguntas que la oposición le planteó por escrito sobre los contratos que el consistorio había adjudicado a empresas relacionadas con la trama de corrupción Gürtel, que investiga por el juez Baltasar Garzón.

Primero preguntó Izquierda Unida (IU). Su concejal, Alfonso Sánchez de Castro, registró el 20 de febrero una pregunta dirigida a la comisión de Hacienda y Función Pública en la que se interesaba por eventuales contratos suscritos durante la última década con alguna de las 23 empresas fantasma dirigidas directamente por Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama, o sus colaboradores y que se detallan en el primer auto del juez.

El Ayuntamiento no ha contestado por escrito, aunque se ha dirigido al concejal invitándole a repasar una por una todas las facturas. La oposición estima que hay al menos 45.000 facturas cada año.

El Grupo Socialista acotó luego la pregunta y la dirigió directamente al alcalde, Francisco Javier León de la Riva. El pasado 20 de marzo, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Izquierdo, registró la pregunta, más sibilina, solicitando "copia en soporte digital de los libros de facturas del Ayuntamiento de Valladolid de los años 2005, 2006, 2007 y 2008".

El 27 de marzo, Javier Izquierdo dirigió una nueva comunicación al alcalde: "Habiendo transcurrido el plazo sin que se haya adoptado resolución alguna por tu parte, entiendo concedida la petición por silencio positivo, por lo que te comunico que nos dirigiremos a la Intervención Municipal para que se nos facilite la documentación solicitada".

Pese a ello, el alcalde de Valladolid ha negado también al PSOE la herramienta informática que permitiría salir de dudas al instante. La respuesta ha sido la misma que se dio a Izquierda Unida: silencio oficial. Sólo informalmente, y de manera verbal, se les ha comunicado que pueden revisar las facturas cuando lo deseen. Eso sí, una a una y sin ningún tipo de ayuda informática.

Aunque cuenta con adjudicaciones del Gobierno central y entidades en manos de PSOE, los contratos más polémicos de Begar se han dado siempre con administraciones controladas con mayoría absoluta por el PP:

PONFERRADA.

En 2002 obtuvo de forma irregular (según dos sentencias firmes) parcelas para construir 2.000 pisos, por los que desembolsó sólo 12,1 millones de euros, una cantidad equivalente al 20% de lo que fijaba el mercado. En total, el Ayuntamiento acumula cuatro sentencias judiciales por favorecer a Begar, pero ninguna ha sido ejecutada.

BOADILLA DEL MONTE.

En 2006, el grupo Begar fue el elegido para levantar el proyecto Boadilla Park en el epicentro del 'caso Gürtel'. El proyecto incluía la construcción de 139 viviendas de alto standing. El juez Garzón investiga si Ulibarri pagó tres millones de euros de comisión.

MADRID.

Ulibarri se asoció para construir un hospital con la esposa del ex edil Sigfrido Herráez, que dimitió por una adjudicación sospechosa a Special Events, la empresa emblemática de la 'trama Gürtel'.

(www.publico.es, 13/04/09)

EL AYUNTAMIENTO SE APOYÓ DE FORMA REITERADA EN CRITERIOS SUBJETIVOS PARA CONCEDER OBRAS A LA EMPRESA DE ULIBARRI

El Ayuntamiento de Valladolid, que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta desde 1995, ha favorecido en varias adjudicaciones al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel, la trama delictiva dirigida por Francisco Correa que operaba básicamente en feudos del PP como Madrid, Valencia y Castilla y León.

El Grupo Begar, que preside Ulibarri, es la constructora más beneficiada por las adjudicaciones del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se jacta de ser amigo del empresario. Desde 2003, Begar ha recibido concesiones del consistorio vallisoletano por valor de 22,4 millones de euros.

Algunas de estas adjudicaciones reúnen aspectos anómalos. El Ayuntamiento de Valladolid no ha contestado a las preguntas de Público, que le fueron formuladas el viernes 3 de abril.

La contratación más importante obtenida por Begar, con un precio de licitación de 11,15 millones de euros, es la gran obra para canalizar las aguas residuales en la margen izquierda del río Pisuerga. La obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno, donde sólo está presente el PP, el 18 de mayo de 2007 apenas 10 días antes de las últimas elecciones municipales y en contra del informe elaborado por los técnicos del propio consistorio.

El documento de los técnicos apostaba por la oferta presentada por la empresa Teconsa y colocaba a Begar en segundo lugar.

El informe, al que ha tenido acceso Público, fue entregado el 25 de enero de 2007 y lleva la firma de tres profesionales cuyo campo está relacionado directamente con la obra: un arquitecto Pablo Gigosos, un ingeniero de obras públicas (Eduardo Encabo) y otro ingeniero de caminos, canales y puertos (Francisco Pérez).

Sin embargo, según consta en un acta del 21 de marzo de 2007, el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca hoy fuera del consistorio e imputado en una causa por falsedad en documento público y manipulación del plan general de ordenación urbana, encargó otro informe, que asumió una única persona: el arquitecto Luis Álvarez Aller, de la más estricta confianza del alcalde, Francisco Javier León de la Riva.

El nuevo informe, en cuya redacción ya no participa ningún ingeniero, se entregó el 2 de mayo de 2007, justo antes de las elecciones municipales, y altera el orden de las empresas. En el nuevo documento, Begar, que se presenta al concurso asociado a Corsán-Corviram, se sitúa en cabeza al primarse el criterio del precio ofertado para construir la obra: "Salvo el criterio del precio, las otras tres ofertas restantes [Sacyr, FCC Construcción y Teconsa] acreditan de forma suficiente su capacidad técnica y viabilidad de sus propuestas", concluye Luis Álvarez Aller para enmendar la propuesta de los tres técnicos del consistorio.

El 18 de mayo, ya en plena campaña electoral, la Junta de Gobierno materializa la adjudicación, en un orden que lleva la firma del concejal de Urbanismo y que ignora el informe inicial de los técnicos.

Las cuatro ofertas aludidas en el contrainforme se situaban por debajo del precio de licitación, en una horquilla que va de 7,2 a 7,9 millones de euros. Begar logró el contrato en contra del criterio inicial de los técnicos por ser su propuesta la más barata, pero al final facturará una cifra muy superior a lo acordado.

La obra aún no ha concluido, pese a que debía finalizar el pasado noviembre. Y el alcalde ya ha advertido públicamente que debido a "imprevistos" la construcción se encarecerá al menos el 25% con respecto a la oferta de Begar.

El criterio de primar la oferta más económica no ha sido precisamente una constante en el Ayuntamiento de Valladolid. Más bien al contrario: el Grupo Begar se ha beneficiado de varios contratos en los que su oferta era de las más caras.

Un ejemplo es la adjudicación, en 2006, de las instalaciones generales del servicio de limpieza del consistorio, que asumió a Begar por 5,42 millones de euros. Los otros tres candidatos presentaron proyectos más económicos: el de Acciona era de 5,12 millones, el mismo precio que el de la Unión Temporal de Empresas ACR-Viveros Gimeno, mientras que el presentado por Indeza rebajaba el presupuesto a 4,65 millones. En el informe municipal, Begar escaló posiciones al valorarse elementos más subjetivos, como la calidad del proyecto.

Algo parecido sucede en otras adjudicaciones recientes, en las que la oferta de Begar es más cara que la de sus competidores y, sin embargo, logra la concesión en base a la supuesta calidad de su proyecto, que no se acredita documentalmente.

El proyecto y obra del polideportivo Parquesol, adjudicado a Begar el 14 de enero de 2009 siete meses después de la licitación es emblemático en este sentido. Al concurso se presentaron 22 empresas y la oferta de Begar es de las más caras: con 2,85 millones de euros, ocupa el lugar 15º del listado. Y es la más costosa del selecto grupo que tiene posibilidades reales de obtener el contrato: de los seis proyectos que superaron los 80 puntos en el informe de evaluación, el de Ulibarri era el más caro.

Pese a ello, Begar obtiene el contrato al lograr extraordinarias puntuaciones en aspectos de nuevo subjetivos como "criterios de diseño" y "criterios constructivos".

En este último apartado Begar obtiene la máxima puntuación (20 sobre 20) a pesar de que en el proyecto que entrega incluso deja en blanco, sin detallar, muchos aspectos que en cambio sí concretan sus competidores: no hay propuesta por escrito de Begar en "Calefacción pista" ni en "Calefacción vestuarios" ni en "Equipamiento". Y, sin embargo, de nuevo logra la máxima puntuación, lo que le permite superar a sus rivales en el cómputo final pese a que su precio es el más caro.

El fenómeno se repite en otras obras, como la de la construcción de la piscina cubierta en el antiguo mercado central, en 2003, o la de remodelación de la cubierta del polideportivo Huerta del Rey, adjudicada el 21 de julio de 2008. Para esta última hay cinco candidatos y la propuesta de Begar 780.100 euros es la más cara. Los "materiales de construcción" y los "criterios estéticos" son los que le sirven una vez más a la empresa de Ulibarri para dar la vuelta a la clasificación.

Años provechosos

El Grupo Begar ha tenido un crecimiento vertiginoso desde 2003, cuando facturaba 197 millones de euros. En 2006, el volumen de negocio ascendía a 614 millones de euros.

Diversificación

El 65% de la facturación total del grupo procede de la construcción, pero ha ido entrando en nuevos negocios. Sobre todo, limpieza y mantenimiento y seguridad.

Dueño de los medios

El grupo ha mimado sus inversiones en medios de comunicación: controla la Televisión de Castilla y León, participa en Punto Radio y gestionará la futura televisión autonómica de Castilla y León. También es el propietario del 'Diario de León', 'Diario de Soria' y 'El Correo de Burgos' y del 'Semanal Digital'. Cuenta además con televisiones locales y de TDT en Valencia.

(www.publico.es, 13/04/09)

EL ALCALDE ÍNTIMO DE AZNAR Y ULIBARRI. LEÓN DE LA RIVA GOBIERNA VALLADOLID SIN APENAS OPOSICIÓN DESDE 1995

Francisco Javier León de la Riva (Valladolid, 1945) es un político campechano a quien le gusta alardear de amistades importantes. Y entre ellas destacan las de José María Aznar y José Luis Ulibarri, empresario todopoderoso en la ciudad que desde 1995 gobierna con mayoría absoluta.

El regidor forma parte del círculo íntimo de Aznar desde hace más de 25 años y le acompañó en el Gobierno de la Junta de Castilla y León como consejero de Cultura y Bienestar Social. Al final de esa legislatura, cuando Aznar estaba ya en Madrid como líder del PP, León de la Riva aterrizó en Valladolid como candidato del PP. No ganó a la primera, pero en los siguientes comicios (1995) arrasó y desde entonces ha ganado siempre por mayoría absoluta y dirigido el Ayuntamiento a su antojo, sin apenas presencia de la oposición.

La relación con el ex jefe de Gobierno del PP va más allá de la política: este prestigioso médico ha sido el ginecólogo de cabecera de la familia Aznar-Botella.

También con Ulibarri ha llevado la relación al terreno de la amistad en la medida en que el empresario ha ido atesorando poder mediático y político entre bastidores en la Comunidad de Castilla y León. Antes de que estallara el caso Gürtel, el regidor explicaba sin problemas que ha navegado en el yate privado del empresario, afirmación que luego ha tratado de minimizar precisando que apenas estuvo una hora en el yate.

León de la Riva fue de los primeros en el PP que puso el grito en el cielo por la investigación de Garzón: "Desgraciadamente, igual que la bomba de ETA es algo habitual [cuando se acercan unas elecciones], las actuaciones del juez Garzón también", llegó a afirmar. Poco después, en un acto del PP exhibió la portada de un periódico en la que aparecía el juez junto a un mono: "Os habéis fijado en la cara de horror que tiene el pobre mono, dirá quién es este tío y que va a hacer conmigo".

(www.elpublico.es, 13/04/09)

LA TRAMA CORRUPTA DE GÜRTEL TAMBIÉN OPERÓ EN CASTILLA Y LEÓN

El brazo de la corrupción es largo: al parecer, la red empresarial dirigida por Francisco Correa también habría hecho de las suyas en Castilla y León, donde la policía intenta esclarecer la identidad de tres personas que habrían cobrado 40.000 euros en comisiones ilícitas. "T.O.", "G." y "J." son las iniciales que aparecen en los apuntes de contabilidad B de la organización corrupta y que estarían relacionados con la adjudicación de un concurso autonómico a la constructora Teconsa. "En este caso se habría producido una adjudicación amañada (...) en la que hubo una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que pudo influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento", señala el auto del juez Baltasar Garzón.

Los apuntes contables requisados al contable José Luis López Izquierdo recogen un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejería de Fomento castellano-leonesa, controlada entonces por el *popular* José Manuel Fernández Santiago. El escrito informaba de la adjudicación de la reforma de la carretera C-626 a la empresa Tecnología de la Construcción S.A. (Teconsa).

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 9 de marzo una copia del expediente del concurso para la obra, un documento que ya ha sido remitida a Madrid. La concesión investigada es el concurso para construir cuatro kilómetros en la citada carretera a su paso por la localidad leonesa de Olleros de Alba. El presupuesto del concurso ascendía a 3,5 millones de euros.

Juan Vicente Herrera, presidente del PP y del Ejecutivo castellano-leonés, ha rechazado cualquier irregularidad en el proceso, negando también que Garzón haya requerido documentación a su Gobierno, señala la revista antes citada. Según explica José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de Presidencia de la Junta, se eligió a Teconsa de entre 29 empresas porque su oferta mejoraba por 100.000 euros la de su mejor competidora.

Además del citado fax, la policía habría encontrado en la sede de Izquierdo anotaciones hechas a mano. La primera del presupuesto presentado por Teconsa sin IVA. Además, aparecería la inscripción "73.650=12.255", una fórmula que corresponde al 3% de comisión, que sería lo que cobró Correa para interceder en la operación. "Los 73.650 euros eran una parte del dinero que la empresa adjudicataria de la obra abonó a Paco Correa y éste a su vez distribuyó entre todas las personas que, a su vez, hicieron posible la adjudicación" dice un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEP).

La documentación requisada recoge también un pago de 24.000 euros a "T.O.", todavía sin identificar, y una cuartilla que registra entradas de 60.100 euros a favor de Correa. "Además hay que añadir lo 'recibido en sobre 17-1-2003 –Junta de Castilla León-Detalle en sobre', que son 48.000 euros, cantidad que es la que se deduce del papel que se encuentra grapado al fax", explica UDEP. Según estos agentes, en total los registros apuntan a 5 personas que se reparten 96.100 euros: Correa recibiría 17.5000 euros en tanto otros 18.600 serían para "L", una inicial que relacionan con Luis Bárcenas, tesorero del PP acusado por Garzón de recibir 1,35 millones de euros en comisiones. Las otras tres personas no se han identificado todavía.

www.elplural.com 07.04.09

EL PRINCIPAL EMPRESARIO IMPUTADO POR EL JUEZ GARZÓN CONSTRUYE 2.000 VIVIENDAS FUERA DE LA LEY

El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el *caso Gürtel*, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado. La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.

Dos sentencias firmes anulan todo el proceso, pero no se ejecutan

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de *Público*. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por

acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.

La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.

La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.

Falta de publicidad

El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.

Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.

En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parcelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.

En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.

Empresas ajenas al sector recibieron licencias y las cedieron a Ulibarri

Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del *caso Gürtel*, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.

La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.

Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur *limpiara* las concesiones iniciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.

La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.

La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.

Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.

En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.

www.publico.es 01.03.09

ADJUDICACIONES ILÍCITAS Y CONCESIONES VINCULAN AL ALCALDE POPULAR DE PONFERRADA CON EL IMPUTADO ULIBARRI

Los negocios del empresario José Luis Ulibarri con posibles irregularidades no se limitan a los investigados tras su imputación en la trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón y que salpica a empresarios y altos cargos del PP de Madrid y Valencia. En el municipio de Ponferrada (León), al menos tres sentencias han declarado ilícitas actividades de su grupo de empresas, Begar, y el trato de favor recibido por parte del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista presentará la próxima semana ante la Fiscalía Anticorrupción numerosa documentación sobre estas y otras actuaciones irregulares vinculadas con el consistorio que dirige Carlos López Riesco, alcalde del municipio y diputado nacional del PP.

Hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Castilla y León implican al Ayuntamiento popular de Ponferrada (León) a través de su empresa gestora del suelo público (Pongesur) en actuaciones irregulares. Muchas de ellas están vinculadas además al Grupo Begar, el conglomerado de empresas de José Luis Ulibarri, que está imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. La oposición socialista del Ayuntamiento presentará la próxima semana documentación sobre todas estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público estudie si debe abrir una investigación contra la gestora del suelo público municipal.

Según el Grupo Socialista, estas resoluciones judiciales "evidencian la ilegalidad de las más importantes actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante los últimos años por el alcalde y diputado popular Carlos López Riesco en Ponferrada". Además, señalan que algunas de estas actuaciones "han ido de la mano" de Ulibarri, cuyas conexiones con el consistorio incluyen "adjudicaciones de parcelas declaradas ilícitas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León", "cuantiosas y jugosísimas concesiones de servicios públicos", "concursos declarados igualmente ilícitos e innumerables adjudicaciones de obras públicas".

En concreto, de las ocho sentencias que se llevarán ante Anticorrupción y que señalan actividades irregulares de Pongesur, tres apuntan directamente contra el empresario imputado por Garzón. La primera de ellas, dictada por el Tribunal Superior de Justicia primero (febrero de 2007) y, en sentencia firme por el Supremo después (abril de 2008), anulaba el concurso por el cual se adjudicó al Grupo Begar la construcción de un Auditorio Municipal.

En junio de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León también anuló una autorización de la Junta de Gobierno municipal que permitía a la empresa Gaveras del Bierzo, incluida en Begar, la instalación en suelo rústico de una planta de hormigón.

En tercer lugar, el Tribunal Superior castellano-leonés también anuló la adjudicación y venta de parcelas del terreno conocido como La Rosaleda, donde los principales beneficiarios fueron las constructoras de Ulibarri UFC y Leocasa. En el caso de este concurso, se intuye también un posible delito fiscal dado que, aunque hubo parcelas adjudicadas a tres empresas no vinculadas con el empresario, estos terrenos nunca se registraron a su nombre, sino que se inscribieron como propiedad de UFC. Esta operación incumplía el pliego de condiciones del concurso, que no permitía transacciones comerciales de las parcelas hasta después de constituidas las escrituras públicas. De este modo, la constructora de Ulibarri se habría ahorrado pagar impuestos de transmisiones al comprárselas a sus propietarios originales.

Al margen de las operaciones irregulares urbanísticas, el consistorio de López Riesco ha hecho numerosas concesiones y adjudicaciones a las empresas del imputado Ulibarri. De hecho, el magnate controla, casi en régimen de monopolio, la gestión del transporte urbano de Ponferrada, el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad y la limpieza de los edificios municipales (este servicio ha modificado el contrato al menos en seis ocasiones desde que le fue concedido en 2004).

Además, al empresario se le han adjudicado en los últimos años al menos siete obras públicas, por las que sus sociedades han ingresado unos honorarios de unos quince millones y medio de euros.

(www.elplural.com, 20/02/09)

CASTILLA Y LEÓN Y VALENCIA, FEUDOS AMIGOS

José Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades autónomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayoría tienen su sede en Castilla y León, donde está al frente de un holding (Grupo Begar) que también ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública.

Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios públicos y mejorar algunas carreteras de la región. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relación, participa en numerosas obras, la mayoría relacionadas con los servicios de limpieza.

Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Llíria por 25 millones.

(www.elpais.com, 13/02/09)

IU DE PONFERRADA PIDE INVESTIGAR LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES A LA EMPRESA DE ULIBARRI

Izquierda Unida ha propuesto que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Ponferrada, dirigido por el popular Carlos López Riesco, para esclarecer las condiciones en las que se produjo la adjudicación del servicio de Transporte Urbano (TUP) a la empresa Begar, propiedad del empresario y constructor José Luis Ulibarri.

IU solicitó este lunes al equipo de gobierno de Ponferrada, del PP, y a los grupos de la oposición, PSOE y MASS, que pongan en marcha una comisión de investigación que permita aclarar las condiciones en las que se adjudicó el servicio de transportes urbanos a la empresa Begar. Para el partido, que no tiene representación política en el municipio leonés, la actual concesionaria del TUP (una fusión entre la empresa de Ulibarri y la anterior gestora, Aupsa) ha supuesto un "saqueo" a las arcas de la localidad.

De hecho, como viene denunciando la oposición, antes de la llegada de Begar, que paradójicamente entró en el Ayuntamiento como "músculo financiero" para el servicio, la anterior concesionaria se autogestionaba cubriendo sus gastos, mientras que en la actualidad la deuda del TUP asciende a más de medio millón de euros sólo en 2007. Ello sin contar los intereses que el consistorio debe pagar por la renovación de la flota, pese a no tener garantizada su compra en el futuro.

Por ello, la coalición de izquierdas ha pedido al equipo de gobierno local que cree una empresa municipal de transporte para que el servicio sea gestionado por la administración pública y no por empresas privadas, evitando así situaciones como la actual, en la que el Ayuntamiento está teniendo que cargar con la deuda de la concesionaria. “Si los ciudadanos tenemos que pagar por tener un servicio público, lo lógico es que sean las instituciones públicas las que gestionen estos servicios”, apuntó Germán Valcarce, miembro de la ejecutiva local de IU.

Además, propusieron que si la compañía de Ulibarri llegase a tener ganancias con este negocio, estas reviertan también en el municipio. En este sentido, Valcarce apuntó que “si el Ayuntamiento tiene que cubrir las pérdidas, lo lógico sería que cuando hubiera ganancias también revirtieran en las arcas municipales”. “Para ello, lo mejor sería crear una empresa municipal”, insistió.

En este sentido, IU criticó el afán privatizador del PP y destacó que “el TUP es el paradigma de lo que supone privatizar, que al final no es más que un saqueo de lo público”. A su juicio, un servicio fundamental como el del transporte público se está convirtiendo “en un despilfarro absoluto debido a la política de privatización del Ayuntamiento”.

(www.elplural.com, 29/10/08)

EL POPULAR AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA SILENCIA LOS DATOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE ULIBARRI

El presidente de la Comisión de Transportes de Ponferrada, el popular Severino Alonso, no dio ninguna respuesta a los grupos de la oposición –PSOE y MASS- sobre las irregularidades de la empresa concesionaria de los servicios de transporte público, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, que vienen denunciando estos grupos. Alonso se limitó a remitirles a un expediente municipal que les será entregado en los próximos días. Para la oposición, esta actitud es “un ejemplo más de la política de falta de transparencia y oscurantismo absoluto en al gestión municipal”.

En una rueda de prensa, el portavoz socialista de Educación y Transporte de Ponferrada, Javier Campos, criticó el “monopolio concesional” del Ayuntamiento de Ponferrada (León) al constructor y magnate de la comunicación José Luis Ulibarri, y la gestión que el equipo de Carlos López Riesco está haciendo en torno a la empresa que gestiona el transporte municipal en la localidad, que es propiedad del empresario.

Como ya informó El Plural, Begar, empresa propiedad de Ulibarri a la que se cedió la gestión del transporte público municipal para darle un impulso financiero, ha dejado de pagar a sus trabajadores pese a que el nuevo servicio de autobuses, el TUP, ha incrementado en un 20 por ciento el número de usuarios en el último año.

Durante la Comisión Informativa sobre Transportes, el portavoz del PP en este campo, Severino Alonso, se limitó a remitir a los grupos de la oposición a la consulta de un expediente que ha solicitado ante el Ayuntamiento y al que, previsiblemente, tendrán acceso durante esta semana. Para Campos, es inconcebible que Alonso desconozca “cuestiones de capital importancia” como si el consistorio “debe pagar 500.000 euros anuales en concepto de amortizaciones de inversiones a TUP, cuando antes la empresa AUPSA [la anterior concesionaria del servicio] se valía de sus propios recursos”.

Los socialistas y el MASS también se quedaron sin saber “si la empresa TUP ha presentado cuentas y datos económicos y cuáles son los importes”, ni “a cuánto asciende el déficit de explotación del servicio”. Campos denunció además que Alonso guardase silencio al ser preguntado por los pagos de amortizaciones de inversiones del servicio y por las previsiones de facturación de la empresa ahora que se ha duplicado el número de líneas y se ha reducido el precio de los billetes.

“Nosotros seguimos instando a las partes a que corrijan la situación para mantener tanto el servicio como las condiciones laborales de los empleados, y entendemos que el señor alcalde se encuentra nuevamente en la obligación de arrojar luz y dar explicaciones sobre la que se presume nefasta gestión del servicio TUP”, apuntó Campos durante la rueda de prensa posterior a la Comisión.

(www.elplural.com, 22/10/08)

LOS SOCIALISTAS DE PONFERRADA SE PREGUNTAN POR QUÉ LA EMPRESA DE ULIBARRI “QUE AUMENTA SU CLIENTELA ANUAL, NO PUEDE PAGAR A SUS EMPLEADOS”

Cada vez más próximo el día en que los trabajadores del transporte público de Ponferrada celebrarán una importante huelga por la suspensión del pago de las nóminas, los grupos en la oposición del consistorio presidido por el *popular* Carlos López Riesco tratan de explicarse por qué se ha llegado a esta situación de impago. Los socialistas se muestran claros: “Nos causa una sorpresa mayúscula el hecho de que se haya conocido que la empresa concesionaria tenga intención de suspender el pago a los trabajadores de un servicio municipal que en el último año ha experimentado un incremento medio de usuarios del 25%”. Las razones siguen ocultas.

En este sentido, y según relata Infobierzo.com, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada recuerda ahora la “publicidad constante y machacante en los medios de comunicación por parte de los responsables del Ayuntamiento en la materia” sobre el incremento del 20% en el número de viajeros del nuevo servicio de autobuses, TUP. Por ello, el Grupo Municipal Socialista se pregunta “cómo una empresa que aumenta su clientela anual, no puede pagar a sus empleados”.

El edil del Grupo Municipal Socialista Javier Campos va más lejos en sus reivindicaciones: “Nuestra estupefacción crece si tenemos en cuenta que el antiguo concesionario mantenía a flote el negocio con sus recursos, mientras que ahora el Ayuntamiento de Ponferrada va a pagar hasta el 2011 la cantidad de 266.884 euros por año, además de las compensaciones por déficit del servicio que en su momento se estimen oportunas”. En este sentido, el testimonio de Campos coincide con el de fuentes próximas a El Plural, que afirman suponer que la concesión del servicio, “opaca”, se pudo realizar por otras razones. Para estas, la entrada al grupo concesionario de Begar, propiedad de José Luis Ulibarri, “tenía el objetivo de aportar el músculo financiero, para un servicio que llevaba 30 años prestándose correctamente, y lo primero que hace es no pagar a los empleados”.

Una concesión que los miembros del Partido del Bierzo (PB), también en la oposición en el consistorio califican de “medida electoralista para poner en marcha estas líneas y esta flota de autobuses”, que sólo un año y medio después de su entrada en funcionamiento comienza a dar problemas directamente a los trabajadores y usuarios, con la amenaza de huelga.

El PB hace hincapié en que “todos los ponferradinos, estamos pagando por mantener este servicio el triple de lo que valía con la anterior concesionaria. Sin embargo la empresa no ha pagado las últimas mensualidades y el Alcalde, ahí mismo ha asegurado que el Ayuntamiento acudirá en su rescate”.

Por su parte, los concejales del Movimiento Alternativo Social (MASS) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ángel Escuredo y Fátima López Placer, responsabilizan al regidor municipal de esta situación “ya que él es el último responsable de que los servicios municipales se presten de forma eficaz y satisfactoria”.

Los miembros del MASS recuperan una crítica ya formulada: “Ya dijimos en aquel momento no entender el afán de Riesco por privatizarlo todo para luego subvencionar a las empresas concesionarias que encima en este caso y curiosamente, es una empresa en la que Begar tiene un importante volumen de acciones y a la que sospechamos que en este ayuntamiento se le ha dado un trato de favor”.

El MASS exige transparencia en este tema “y que no se recurra una vez más al argumento de la crisis para justificar cualquier problema que se ocasione en el municipio”.

www.elplural.com 19.10.08

¿HA DEJADO JOSÉ LUIS ULIBARRI DE PAGAR A LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PONFERRADA?

Los trabajadores del transporte público de Ponferrada han visto suspendidas sus nóminas e iniciarán en 15 días una huelga indefinida en el caso de que las partes implicadas, Ayuntamiento y consorcio concesionario, no resuelvan el conflicto. En la parte correspondiente al consorcio se encuentra la empresa Begar, del polémico empresario José Luis Ulibarri. Una suspensión de pagos de nóminas que los trabajadores no comprenden, con un constante aumento del número de viajeros en la localidad. Según informa InfoBierzo.com, los trabajadores barajan la hipótesis de que podría tratarse de una

medida de presión de las empresas concesionarias hacia el Ayuntamiento para el posible reembolso de alguna cantidad adelantada por el consorcio empresarial.

Según informa InfoBierzo.com, el delegado de la Federación de Transportes de CC.OO en El Bierzo, Antonio López, ha explicado que el pasado 7 de octubre el consorcio de empresas concesionarias del servicio (antigua AUPSA y Grupo BEGAR) anunció a los delegados de los empleados la suspensión del pago de nóminas "porque no hay dinero". De este modo, la gerencia de la empresa abonaría el sueldo pendiente de septiembre pero no "el de los meses siguientes" pues "no pueden afrontar los pagos".

Para el delegado sindical, "las cuentas de resultados del pasado año de la empresa no se han hecho públicas. No sabemos si han tenido pérdidas o ganancias".

Por todo esto, los trabajadores del transporte público creen que en un plazo de 15 a 20 días se iniciará una huelga indefinida en el servicio de autobuses. Todavía resta por conocer el alcance para la resolución del conflicto que puede tener la mediación del Órgano de Solución de Conflictos Laborales, SERLA, aunque los sindicatos ya dejan claro que mientras no existan "garantías" de la vuelta al sistema de pago regular de las nóminas no se resolverá la convocatoria de huelga.

Según ha podido conocer Infobierzo.com, el equipo de Gobierno ha mantenido una reunión urgente para analizar la situación. Es más, el edil del área, Severino Alonso, ha dejado claro que "no sabemos exactamente qué ha ocurrido en esta situación de impago". Se espera una comparecencia del alcalde. Según recoge el mismo medio, los trabajadores han declarado desconocer si la suspensión del pago de las nóminas forma parte de una medida de presión de la compañía concesionaria hacia el Ayuntamiento para el posible reembolso de alguna cantidad adelantada por el consorcio empresarial, y que sirvió de base para poner en marcha el nuevo servicio de autobuses, ya que "no conocemos el pliego de condiciones de la concesión". Lo que no comprenden los trabajadores es "cómo dicen que no hay dinero, cuando según los datos se ha incrementado un 20% el número de viajeros, o eso dicen".

(www.elplural.com, 16/10/08)

EL PP DE SALAMANCA DICE QUE NO TIENE "NADA QUE VER" CON UNA FACTURA A CORREA Y SEÑALA A GÉNOVA 13

Entre las revelaciones del sumario parcialmente abierto de la *Gürtel* figura que una de las empresas de Correa, Special Events, organizó en 2005 actos para el PP enmarcados en la campaña del referéndum para la Constitución europea. Uno de aquellos eventos tuvo lugar en Salamanca y Correa facturó hasta 13.404 euros por él, aunque según advierten desde el PSOE municipal, no tuvo nada que ver con mítines o actos multitudinarios de campaña sino que se trató de un encuentro interno de partido provincial presidido por el entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, por lo que piden explicaciones. El PP provincial asegura que no tiene "nada que ver" con esa factura y apuntan a la dirección nacional del partido.

La factura de Special Events por un acto en Salamanca tiene fecha 16 de febrero y una doble facturación, según ha publicado *El Mundo*, pasando de 10.648,80 euros a 13.404,96, cuando la contabilidad interna reconoce un coste real ascendió de 2.674,09 euros. El diario apunta que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, era informado con anotaciones de estas modificaciones.

El PSOE salmantino ha advertido en un comunicado de que "el acto facturado por la empresa Special Events fue una reunión de la Junta Provincial del PP en la que intervino Ángel Acebes, por entonces secretario general del PP, y a la que asistieron, entre otros dirigentes y cargos públicos del PP, el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, el consejero de Justicia e Interior Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde Julián Lanzarote y el delegado de la Junta de Castilla y León Agustín Sánchez de Vega". Así, instaban al PP salmantino a dar explicaciones y publicidad de sus facturas con las empresas de la trama para evitar sospechas "de posibles casos de financiación irregular de las campañas electorales de este partido en la provincia".

Los *populares* han recogido el guante respondiendo con otro comunicado en el que no dudan en atribuir toda la responsabilidad de aquella factura a la dirección nacional. Así, aseguran que el PP de Salamanca "no ha trabajado ni ha tenido relación alguna" con Special Events y que "tal y como refleja la citada factura, el documento se remite a la dirección nacional del Partido Popular en la calle Génova y no a la dirección provincial, como debiera figurar en caso de que se hubiesen contratado sus servicios desde

Salamanca". Además justifican que "es habitual que todos los actos en los que intervienen dirigentes de primer nivel, en este caso, el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, vengan organizados desde la dirección nacional en Madrid" sin participación de la dirección provincial en la organización.

Desde el grupo municipal del PSOE en Salamanca, preguntados por *El Plural*, insisten en la "extrañeza" que les causa que el PP recurriera a una empresa de Correa no para un acto público sino para un acto interno de partido, así como que en sus explicaciones los *populares* salmantinos "echen balones fuera" señalando de forma directa a Génova 13. Por otra parte, Mariano Rajoy aseguró que la dirección nacional del PP se había desvinculado de las empresas de Correa en 2004, pero estas facturas y eventos ya corresponden a 2005. El presidente del partido y su actual secretaria general, Dolores de Cospedal, niegan que existiera una red de financiación irregular en el partido y aseguran que ha quedado acreditado en el sumario.

www.elplural.com 08.10.09

¿POR QUÉ PRESIONÓ ULIBARRI A LA VÍCTIMA DEL CASO NEVENKA OFRECIÉNDOLE UN EMPLEO?

Las relaciones del controvertido empresario José Luis Ulibarri con ayuntamientos del PP y la extensión de su red de negocios por distintas comunidades de hegemonía popular siguen revelando interesantes coincidencias. Su apego a la ciudad leonesa de Ponferrada, en la que sus suculentos negocios han llamado la atención de muchos observadores, lo convirtió, sin duda, en un testigo de excepción y una fuente privilegiada de información sobre el conocido como caso Nevenka.

El caso Nevenka fue un episodio de abuso sexual por parte del alcalde conservador de Ponferrada Ismael Álvarez a la entonces concejala de Hacienda y Comercio del municipio hasta 2001, Nevenka Fernández. El papel de Ulibarri, en lo sucedido antes y después de la revelación del escándalo, fue muy destacado: una vez que Nevenka Fernández denunció públicamente a su entonces jefe, el mencionado alcalde Álvarez, Ulibarri retiró a la concejala la oferta de trabajo que le había propuesto con el objetivo de que ésta "rehiciera su vida". ¿A qué se debió el interés del conocido empresario leonés por colocar a la entonces incómoda Nevenka Fernández? ¿Es una coincidencia que Ulibarri hubiera conseguido concesiones y contrataciones por parte del Consistorio?

Lo cuenta nada más y nada menos que el afamado escritor y columnista Juan José Millás en un libro publicado en 2004 sobre lo sucedido: "Hay algo que no es como me dicen. El caso de Nevenka Fernández contra la realidad". En esta crónica del caso, narrada desde el punto de vista de su víctima, el autor recrea el "infierno" que la ex concejala de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada tuvo que soportar en las fechas posteriores a la presentación de la denuncia por acoso contra el que fuera alcalde de la localidad, el popular Ismael Álvarez, con el que Nevenka había mantenido en fechas anteriores una relación íntima.

El caso se cerró en noviembre de 2002. El Tribunal Supremo dio en gran parte la razón a la víctima del acoso y condenó al regidor popular a una multa total de 2160 euros. No obstante, el Alto Tribunal consideró favorablemente una parte del recurso interpuesto por el acusado, rechazando el agravante de abuso de autoridad. Ello llevó a rebajar la pena dictada seis meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Pero a pesar de la aclaratoria sentencia, no muchos quisieron creer a Nevenka cuando esta dio el paso de denunciar en público el "infierno" que venía sufriendo desde que rompiera su relación sentimental con su entonces compañero de equipo de gobierno y jefe, Ismael Álvarez. Según narra Millás, Nevenka llevaba meses recluida "como una refugiada" en el piso "de la familia de su novio, Lucas Vázquez". Fue entonces cuando "lo que había quedado de Nevenka tras meses de terror" dio la noticia en una rueda de prensa en la que, además, anunció su dimisión como concejala de Hacienda y Comercio.

Las presiones y llamadas no cesaron desde ese momento. La primera de estas consistió en un "manifiesto de todos los concejales a favor del alcalde". Entre estos se encontraba una amiga íntima de Nevenka y, lo que es más relevante, el actual regidor de la localidad, Carlos López Riesco, entonces titular de la concejalía de Fomento y que curiosamente había accedido a tal cargo a través del padre de la denunciante. Es en este momento donde Millás explica la oportuna aparición del empresario José Luis Ulibarri: "El mazazo definitivo fue la llamada de un directivo de Begar, una empresa constructora que

había hecho a Nevenka una oferta de trabajo que ahora retiraba, atemorizada por la repercusión pública de su denuncia”.

Begar, como El Plural ha venido informando desde hace tiempo, es propiedad del empresario leonés Ulibarri, accionista a su vez de la empresa “Ferroser”, “a la que el Ayuntamiento de Ponferrada había otorgado la concesión del servicio de aguas de la ciudad”. Millás establece la conexión de manera clara: “No era preciso ser un paranoico para imaginar que las presiones habían comenzado a actuar apenas unas horas después de la denuncia”.

De esta forma, Ulibarri retiraba a la ex concejala lo que parecía haber sido una interesante oferta de reincorporación al mercado laboral: “Nevenka había contado con aquel trabajo en Begar para rehacer su vida y, de súbito, se encontraba literalmente en la calle”.

No quedaron ahí las presiones, por supuesto. Por ejemplo, Ana Botella cerró filas con el ya acusado alcalde, considerando “impecable” su dimisión del puesto. Además, el juicio vino preñado de irregularidades, principalmente por parte del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis García Ancos, que tuvo que ser relevado del caso tras el revuelo ocasionado por el insultante interrogatorio realizado a la víctima: “Usted no es una empleada de Hipercor, a la que tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos”.

No queda, por tanto, Ulibarri, precisamente al margen de este escándalo. Otros, como el de la concesión de suelo para la construcción de 626 viviendas en la misma localidad se encuentra archivado, pero tuvo durante un tiempo como imputado al alcalde de la localidad, precisamente un Carlos López Riesco que prometió seguir “el programa de Ismael Álvarez como el Catecismo”. Riesco que fue hasta 2002 concejal del Ayuntamiento regido por el condenado Ismael Álvarez. Las sentencias pesan, pero los contratos y negocios se mantienen. Suma y sigue.

(www.elplural.com, 02/10/08)

LOS NEGOCIOS DE ULIBARRI, MÁS ALLÁ DE LA CONSTRUCCIÓN: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTRATAS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD...

El controvertido y multimillonario empresario de la comunicación y de la construcción, José Luis Ulibarri, promete dar mucho que hablar. A lo publicado por El Plural se unen las revelaciones de otros medios locales y publicaciones por Internet que arrojan aún más luz a una trayectoria digna de analizar desde el plano periodístico y jurídico. Una página tan crítica con el Partido Popular como la de Los Genoveses ha realizado una recopilación de las andanzas más sobresalientes del magnate leonés: la novedad reside en que los negocios de Ulibarri se extienden, además, a servicios de limpieza y seguridad; un perfil digno de un estudio concienzudo.

Construcción, comunicación y contratas de diversos servicios ocupan la vida laboral del empresario leonés José Luis Ulibarri. Los oscuros casos de adjudicaciones de parcelas edificables a una empresa fantasma de su propiedad, UFC S.A., que, con solo tres trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social, habría conseguido la proeza de ser adjudicataria de suelo para construir cientos de viviendas, parecen ser solo la punta del iceberg. En la localidad de Boadilla, por su parte, se destapó el pastel: la empresa, adjudicataria en 2005 de terrenos para construir 139 viviendas y más de 300 plazas de garaje, no estaba dada de alta en la Seguridad Social en el momento de tal concesión. Lo mismo ocurrió en Ponferrada, donde Ulibarri mantiene muy buenas relaciones con su alcalde, el popular Carlos López Riesco. También allí su empresa fantasma UFC resultó adjudicataria de un concurso de la empresa municipal PONGESUR S.A. para construcción de viviendas.

No se le ha dado tampoco mal la Comunidad valenciana presidida por Camps. Ulibarri se vio beneficiado por la Administración popular al obtener la licencia para construir el hospital de Lliria. Precisamente de dicha comunidad ha conseguido el empresario hasta 13 licencias de Televisión Digital Terrestre, así como 7 emisoras de radio. Sus participaciones, además de un 20% en Punto Radio –emisora que le ha concedido recientemente un “Micrófono de Oro”- se encuentran también en el accionariado de El Semanal Digital, cuyo director, el ex presidente de Nuevas Generaciones del PP, Antonio Martín Beaumont, habría hecho de intermediario para facilitar sus relaciones con altos cargos de una comunidad tan prolífica en negocios para este como la valenciana. Casualmente, en la presentación del canal televisivo Tele 7, presidido por Ulibarri, estuvieron presentes el propio Beaumont, Luis del Olmo,

así como el presidente regional, Francisco Camps. El Semanal Digital firmó la crónica: “La televisión de El Semanal Digital en Valencia arranca con una gala”.

No se quedan ahí sus influencias y propiedades. Y es que Ulibarri ha aprendido este modelo de expansión de su antiguo jefe, José Luis Martínez Núñez. Los Genoveses explica muy claramente esta forma de proceder en los negocios: “Comprar medios de comunicación para ganarse apoyos políticos influyentes –sobre todo del PP- presionando en la opinión pública. Este portal anti-PP va aún más lejos en su recopilación sobre el empresario leonés: “Ulibarri ha creado una red de desprestigio a través de confidentiales que desde el anonimato atacan a empresarios y políticos que denuncian sus particulares actuaciones”.

Ulibarri, que es, además, íntimo amigo del cuñado del ex portavoz del CGPJ, ahora aspirante al Tribunal Constitucional, Enrique López, también tiene diarios en papel: entre estos destacan el Diario de Soria, el Correo de Burgos y Diario de León. Además, mantiene diversos acuerdos con El Mundo para la explotación de estas cabeceras y participó en la creación de ASODAL, Asociación Española de Televisiones Privadas Digitales Autonómicas y Locales, en la que el leonés se comprometió con el grupo Vocento y COPE en defender los intereses de la televisión local, para que las licencias no can en manos de “caciques que intentan mantener su poder mediático”...

Pero todavía queda un capítulo. Distintos medios locales denuncian que el empresario obtuvo dos adjudicaciones de Caja España (para la limpieza y seguridad), que habría conseguido gracias a sus influencias en la entidad, de cuyo Consejo de Administración había formado parte. La cuantía de los contratos ascendió a 6,8 millones de euros. Casi nada.

(www.elplural.com, 01/10/08)

UNA EMPRESA FANTASMA DEL EMPRESARIO JOSÉ LUÍS ULIBARRI OBTUVO NUMEROSAS CONCESIONES EN CASTILLA Y LEÓN

El pasado 19 de abril, el constructor y propietario de medios de comunicación, José Luís Ulibarri, resultó premiado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisiones de España, que preside el periodista radiofónico Luís del Olmo, con el “Micrófono de Oro” a la comunicación. El flamante galardonado es propietario del Diario de León, Diario de Soria, Televisión Ponferrada, Retecal, accionista de Punto Radio y gran amigo personal de popular periodista.

Dentro del Partido Popular, a José Luís Ulibarri se le considera íntimamente ligado al Clan de Valladolid. Pese a su poder mediático, su verdadero poderío radica en sus numerosas empresas de construcción, alguna de ellas fantasma, con la que resultó adjudicatario de numerosas obras públicas, parcelas, infraestructuras, servicios y contratos (algunas de limpieza pública), cuando se encontraba legalmente inhabilitado para ello y carecía de capacidad para contratar con las administraciones publicas.

El escándalo estalló tras una denuncia formulada por Alternativa por Boadilla (Partido de los Independientes de Boadilla), liderado por el conocido como “Concejal Fiscal de Madrid” Ángel Galindo. En este municipio madrileño, el Ayuntamiento adjudicó a UFC -su empresa fantasma- a finales de octubre de 2005, unas obras, tras comprometerse a ejecutarlas en 12 meses. Casi tres años después, aún no han sido concluidas.

Ulibarri fue primero aparejador de Teconsa, el principal grupo constructor de Castilla y León, donde trabajó durante muchos años a las órdenes del empresario José Luís Martínez Núñez, cuyas empresas últimamente también se han diversificado. Toda su estrategia empresarial la aprendió en esta etapa, siendo ésta actualmente objetivo de su máxima competencia.

Desde entonces, este empresario mediático y constructor, ha seguido escrupulosamente el modelo de Martínez Núñez: comprar medios de comunicación para ganarse apoyos políticos influyentes -sobre todo del Partido Popular-, presionando en la opinión pública.

Entre sus amigos está Sigfrido Herráez -antiguo Concejal del Vivienda del PP de Madrid- con cuya esposa tiene una sociedad constructora. Su grupo de empresas, Construcciones Begar S.A., está en Valladolid. Hace escasas fechas el Diario Palentino publicó que León de la Riva, Alcalde de Valladolid, visitaba en numerosas ocasiones y disfrutaba en el barco de recreo de José Luís Ulibarri.

Una de sus operaciones más turbias fue en Ponferrada. Precisamente, en La Rosaleda, donde operó a través de la empresa "fantasma" UFC S.A. en un "concurso simulado" donde obtuvo casi todas las parcelas. El pliego de condiciones de esta licitación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Fue precisamente en esta ciudad leonesa donde José Luís Ulibarri recibió hace diez días el "micrófono de oro" a la comunicación.

Tan flamante galardonado, vinculado en el PP al Clan de Valladolid, fue "cazado in fraganti" en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde apareció nuevamente con UFC S.A. Cuando el Ayuntamiento solicitó certificación oficial, resultó que no tenía trabajadores ni estaba inscrita en la Seguridad Social, como consta en el documento que hoy reproduce **extraconfidencial.com**. Era una empresa "fantasma". Tirando del hilo se supo que todas las concesiones de diferentes administraciones públicas recibidas anteriormente a través de esta empresa, eran nulas de pleno derecho. Miles de viviendas, contratos de construcción de obras, etc... adjudicadas a una sociedad sin trabajadores. Y siempre los gobernantes muy cerca del Partido Popular.

En Boadilla, una licitación inferior

Precisamente, en este municipio madrileño Ulibarri pagó cuatro millones de euros menos que los demás licitadores y pese a haber incumplido el plazo, el Ayuntamiento presidido por el edil del PP Arturo González Panero aún no ha resuelto este contrato, ni adjudicado al siguiente licitador. De este modo, Boadilla ha perdido esta importante cantidad porque el plazo ofertado por UFC para construir 340 plazas de aparcamiento y 139 viviendas en 7 bloques, fue de 12 meses. Imposible para unas obras de esta índole. Casi tres años después aún no han sido concluidas.

José Luís Ulibarri aseguró sobre su empresa que *"UFC S.A. es una sociedad participada 100% por Begar y ha actuado hasta ahora con una legalidad absoluta y no ha tenido nunca ningún problema. UFC no estuvo dada de alta en la Seguridad Social hace tiempo porque no tenía trabajadores. Pero ahora hemos cambiado nuestra actuación y como tenemos alguna compra de suelo en concursos de las administraciones públicas, hemos tenido que darla"*.

El empresario vallisoletano recalcó a nuestro periódico que *"todo esto viene de Boadilla del Monte donde hace tiempo hubo una denuncia, que yo sepa está archivada. Y no hemos tenido nunca ningún problema ni esperamos tenerlo. Todas las informaciones que me está trasladando son falsas"*. No obstante, el documento que reproduce contradice al constructor. Antes de Noviembre de 2006 en que UFC causó alta en la Seguridad Social, la empresa de José Luís Ulibarri obtuvo concesiones públicas para miles de viviendas en Castilla y León -Ponferrada- Operación La Rosaleda, Zamora, Valladolid, León, Boadilla del Monte, etc-. Además, actualmente UFC S.A. construye también en los Altos del Bernesga más de 700 viviendas y campo de golf. En todas estos municipios gobierna el Partido Popular.

<http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=823>

'CASO ULIBARRI': SEIS EDILES DEL PP DE PONFERRADA ACUSADOS POR UN POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN

El 'caso UFC' ha cogido cuerpo. Tanto que, para dotarle de la justa dimensión, ha sido rebautizado ya como 'caso Ulibarri', en referencia al constructor y editor de medios leonés propietario de la promotora en cuestión, implicada en un asunto de posibles adjudicaciones irregulares en la localidad berciana de Ponferrada, de donde es natural el empresario.

La semana pasada, el Juzgado número 2 de Ponferrada dictó auto de admisión a trámite de la querrela presentada por el abogado Ángel Galindo en representación de varias fuerzas políticas locales (Izquierda Unida, Partido de Bierzo, MAAS, Alternativa Comarcal Democrática y la Federación de Asociaciones de Vecinos de El Bierzo) contra seis ediles del Partido Popular por posible delito de prevaricación.

Entre los acusados se encuentran el actual alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro, por su actuación como máximos responsables de la sociedad municipal Pongesur (Ponferrada Gestión Urbanística) en un proceso de adjudicación de viviendas en el que participó el constructor José Luis Ulibarri (Grupo Begar).

Algo similar ya ocurrió en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde UFC resultó ganador de un concurso con una oferta más barata (35 millones), con un plazo de ejecución inasumible (doce meses

desde la adjudicación) y, como luego se denunció, por pujar bajo la cabecera de una sociedad instrumental (propiedad de Begar) que no estaba registrada en la Seguridad Social.

En aquella ocasión, Ulibarri se impuso a otro constructor y editor de medios, el también leonés José Martínez Núñez. Sin embargo, aquella derrota sirvió para que el diario La Crónica de León (propiedad del derrotado) se hiciera eco de las posibles irregularidades, un modelo extrapolable al resto de concursos donde su rival ha obtenido concesiones bajo la marca UFC.

Ese ha sido el caso de Ponferrada, donde además confluyen otras circunstancias. Se da el caso de que Ulibarri, a través de UFC, obtuvo 539 viviendas de un total de 5.000. Sin embargo, siete meses después, la promotora poseía terrenos para edificar 1.400, después de que otros de los adjudicatarios, algunos de ellos socios del editor en algunos de sus negocios, vendieran sus parcelas. ¿Falsa concurrencia?

La proximidad de las elecciones municipales ha hecho de este caso una de las principales punta de lanza contra el Partido Popular de El Bierzo, con el 'caso UFC' como banderín de enganche. Precisamente, en este contexto se enmarca la reciente compra del principal periódico de la provincia -El Diario de León- por parte del propio Ulibarri. Los medios, el ladrillo y la política juntos y bien revueltos.

www.elconfidencial 21.03.07

EL ALCALDE DE VALLADOLID PRESUME DE AMISTAD CON ULIBARRI, PRESIDENTE DE BEGAR, ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS DEL NUEVO SERVICIO DE LIMPIEZA A PESAR DE PRESENTAR LA OFERTA MÁS CARA

En el diario El Día Valladolid del pasado 5 de julio de 2006 el regidor vallisoletano presumía de su amistad con Jose Luis Uribarri Cormenzana, presidente del Grupo BEGAR. De la Riva pasa parte de sus vacaciones estivales en el yate de "mi amigo" José Luis Ulibarri.

El Ayuntamiento adjudica el proyecto y ejecución de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal a la empresa BEGAR (que dirige Uribarri) por 5,4 millones de euros, a pesar de ser la oferta más cara de las cuatro presentadas.

También le asignó la rehabilitación de la Casa Colón, considerándose como prioritaria en la adjudicación la fecha de entrega, que luego se incumplió por la empresa.

ULIBARRI: LAS ADJUDICACIONES AL GRUPO BEGAR QUE ESCANDALIZAN

De socio a adjudicatario. De socio referente en Caja España con Retecal a adjudicatario de servicios

Las influencias del empresario leonés José Luis Ulibarri, presidente del Grupo Begar, le han permitido obtener dos contratos millonarios en Caja España por un importe superior a los 6,8 millones al recaer en sus sociedades los contratos de seguridad y el servicio de limpieza.

Amparado históricamente por el tráfuga de la UPL y miembro del consejo de administración de Caja España, José María Rodríguez de Francisco, el presidente de Begar ha pasado de ser socio de referencia de la entidad financiera en la empresa Retecal a ser uno de los principales adjudicatarios de sus servicios externos.

La desastrosa gestión de Ulibarri al frente de Retecal, que llevó a sus socios Hidrocantábrico y Caja España a una situación económica insostenible al borde de la quiebra, ha sido recompensada con dos contratos que posiblemente en unos meses no se podrían haber rubricado al perder el tráfuga de la UPL su hegemonía en la entidad con la entrada del nuevo presidente.

El penúltimo capítulo de la caja vuelve a tener a José Luis Ulibarri como protagonista. Hace apenas tres meses, y ya con el nombre de Santos Llamas como candidato de consenso para presidir Caja España, el consejo de administración adjudicó a la empresa Athena Seguridad (2,7 millones) y Seralia (4,1 millones de euros), ambas de Ulibarri, los contratos de seguridad y servicio de limpieza.

Sin embargo, la adjudicación del contrato de seguridad vino precedida por un informe de una consultora que aconsejaba al Grupo Eulen, empresa que hasta este año venía realizando los servicios, como

primera opción para la renovación del mismo. Eulen presentó una oferta económica superior (100.000 euros), pero contaba a su favor que había desarrollado de forma positiva el trabajo en años anteriores y cumplía el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que Caja España tuviese sedes para depositar en sus cajas fuertes las llaves de las oficinas de la entidad financiera. Athena Seguridad carece de delegaciones en un buen número de provincias en las que desarrolla su actividad Caja España por lo que ha tenido que subcontratar el servicio.

Y en buena medida ha ocurrido igual con el servicio de limpieza que ha recaído mayoritariamente en la empresa Seralia, sociedad propiedad de José Luis Ulibarri.

También en Valladolid

Las estrechas y públicas relaciones de amistad entre el presidente de Begar y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, también han permitido a este leonés obtener frutos empresariales. El último: la adjudicación del proyecto y la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal por 5,4 millones, a pesar de ser la oferta más cara de las cuatro presentadas.

Pero anteriormente a esta adjudicación, el Grupo Begar tuvo que ejecutar las obras de rehabilitación de la Casa de Colón. La sociedad que preside Ulibarri fue una de las tres empresas que concurrió a la construcción del nuevo edificio. Para el fallo de la licitación, el Consistorio consideró en el pliego de condiciones como punto principal “la fecha de entrega”, aspecto éste que permitió al Grupo Begar obtener la obra, pero que posteriormente no cumplió, ya que no llegó en fecha. Pese a ello ingresó 1,5 millones de euros.

Sin embargo, los favores en la ejecución de la rehabilitación de la Casa de Colón no concluyeron con la no sanción por parte del equipo de Gobierno. Begar nuevamente resultó beneficiada al recibir el encargo de rehabilitar la antigua Casa de Colón (934.397 euros) gracias a la ampliación de las actividades previstas en el pliego de condiciones del concurso que había ganado. Fue una decisión del propio León de la Riva, al aprovechar la proximidad entre las dos obras para, con un solo concurso, conceder en la práctica la ejecución de ambas a la misma empresa; cómo no, Begar, la compañía de José Luis Ulibarri.

Madrid

Las alianzas de Ulibarri en Madrid se centran en la figura del ex concejal de Vivienda del PP del Ayuntamiento Sigfrido Herráez, que abandonó el Consistorio de la capital para fichar una semana más tarde como vicepresidente en la constructora Rayet. Sorprendentemente, Rayet está ejecutando los dos proyectos más emblemáticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal meses antes de su salida del equipo de Gobierno. Pero ahí no terminan las casualidades. La esposa del ex edil logró la adjudicación de las obras y la gestión del nuevo hospital de Vallecas y en el Consorcio que resultó agraciado en la licitación aparece, curiosamente, como principal socio de ésta Ulibarri, ocupando además uno de los puestos directivos más importantes del mismo.

Valencia

Por su parte, en Valencia su alianza con el empresario de la comunicación y ex de Nuevas Generaciones Antonio Martín Beaumont le ha permitido conseguir agrupar en la sociedad Mediamed Comunicación Digital a seis de las adjudicaciones de licencias de Televisión Digital Terrestre de la Comunidad Valenciana, convirtiéndose así indirectamente, y por la puerta de atrás, en uno de los empresarios mediáticos con mayor peso de esta región. Sin embargo, sus intereses también están en otras regiones del Levante y este diario pronto hablará también de Murcia.

Confidenciales y otros

Ulibarri ha creado una red de desprestigio a través de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y políticos que denuncian sus particulares actuaciones. Otro ejemplo de estos procedimientos es Joaquín Sánchez Torné, actual director de un rotativo en la ciudad de Burgos propiedad del empresario leonés José Luis Ulibarri.

De vacaciones estivales en el yate de “mi amigo” José Luis Ulibarri

El regidor vallisoletano [Javier León de la Riva] presume de amistad con José Luis Ulibarri. Tal es esa relación que el alcalde no duda en compartir con el constructor jornadas festivas a bordo del yate que el empresario posee. Esa estrecha vinculación también es constatable en las numerosas “consultas” que no duda en realizar a José Luis Ulibarri en cuestiones que afectan a muchas de sus decisiones públicas.

Así, entre sus grandes preocupaciones por mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos, León de la Riva no dudó en ser uno de los pocos alcaldes de Castilla y León en solicitar una licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) para su municipio.

Al desconocer el funcionamiento del medio, el alcalde no dudó en invitar a su amigo José Luis Ulibarri en uno de sus múltiples encuentros de mesa y mantel a que le elaborase un informe a ‘su medida’ para que el regidor supiese qué pasos debería acometer para gestionar o adjudicar una televisión local.

De esta manera, el primer edil podrá tener a su disposición dos cadenas de ‘Televisión De la Riva Total’ municipales (TDT), una la de su amigo José Luis Ulibarri y la otra la que gestionaría directamente el alcalde de Valladolid.

Los favores al Grupo Begar no se centran exclusivamente en las adjudicaciones de obra hechas casi a la medida, sino que también están presentes, día a día, en el canal de televisión de José Luis Ulibarri, pues bien sabe que en Valladolid es el político que manda.

Único beneficiario del desastre de su gestión en Retecal

La aventura de José Luis Ulibarri junto a Hidrocantábrico y Caja España en Retecal fue la plataforma desde la que este empresario dio su particular salto a los medios de comunicación. La necesidad de crear una empresa regional de telecomunicaciones y la obligatoriedad implícita de crear una televisión bajo su tutela fue el camino aprovechado por el presidente de Begar para erigir su imperio mediático a bajo costo.

Su desastrosa gestión al frente de Retecal llevó a sus socios a una situación económica insostenible que hizo imposible la continuidad en esta empresa del sector de las telecomunicaciones. Esta situación, sin embargo, no fue óbice para que Ulibarri continuara beneficiándose de sus alianzas y de ese modo seguir diseñando una televisión a su medida bajo el amparo de la gran matriz. Mientras Retecal continuaba su lenta agonía, José Luis Ulibarri aprovechó el apoyo institucional y el reparto de licencias de Frecuencias Modulada en el que resultó favorecido para continuar haciéndose un hueco en los medios de comunicación de Castilla y León.

Mientras sus socios buscaban una salida a la indefendible situación de Retecal, Ulibarri diseñaba, financiaba y estructuraba su empresa audiovisual a través de Retecal, cargando la parte alícuota de los gastos a sus compañeros de aventura. Los enfrentamientos con Caja España y con Hidrocantábricos terminaron por hacer inviable la explotación de la empresa de telecomunicaciones de Castilla y León que finalmente tuvo que ser absorbida por una compañía líder en el sector como ONO y de ese modo poder garantizar su viabilidad. Durante este proceso de venta, el presidente de Televisión Castilla y León aprovechó no para continuar con el negocio de las telecomunicaciones, sino para apropiarse a precio de saldo de la televisión que él mismo había gestado en el seno de la ahora transferida Retecal.

Fuente: El Día de Valladolid, 05-07-2006.

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE VALLADOLID EN SU REUNIÓN DEL 23 DE JUNIO DE 2006:

El Ayuntamiento adjudica a Begar la construcción de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpiezas en el Polígono de San Cristóbal, por un importe de 5,4 millones de euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida esta mañana en sesión ordinaria, ha abordado los asuntos que figuran a continuación dentro del orden del día.

Dentro de los asuntos del Área de Medio Ambiente, el órgano de gobierno ha acordado adjudicar a la empresa Begar, S.A. el contrato referente a la redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de la nueva sede del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, que se ubicará en el Polígono de San Cristóbal. La cuantía del contrato asciende a 5.427.322 euros.

Esta cifra se materializará a lo largo de los años 2006 y 2007, mientras dure la ejecución de las instalaciones, que ocuparán una parcela de 13.000 metros cuadrados situados en la calle Plomo, esquina con Topacio. Según las previsiones, el complejo tendrá una nave garaje de 6.000 metros cuadrados construidos con capacidad para 150 vehículos; un taller de 2.000 metros cuadrados, y un edificio de oficinas, de dos alturas con unos 1.500 metros cuadrados construidos.

El traslado de las dependencias desde su actual ubicación en la calle Mieses (Huerta del Rey) hasta el Polígono de San Cristóbal es un compromiso adquirido por el equipo de gobierno con los vecinos de la zona, quienes venían demandando la desaparición de las instalaciones, al hallarse completamente rodeadas de viviendas. En principio, el traslado estará culminado en el plazo de dos años. Entre la propuestas aportadas por el proyecto de Begar hay que citar la creación de un punto limpio en el espacio ahora ocupado por el Servicio de Limpieza, que dará servicio a los ciudadanos.

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid.

José Luis Ulibarri ya es, oficialmente, nuevo presidente del Diario de León

"El empresario leonés José Luis Ulibarri ha asumido la presidencia del Diario de León tras la celebración de la Junta General de Accionistas y el nombramiento del nuevo Consejo de Administración. En el transcurso de la reunión ordinaria de la Junta General, presidida por el hasta ese momento presidente del rotativo, Santiago Rey Fernández-Latorre, presentaron su dimisión los antiguos consejeros y a continuación se dio a conocer la composición del nuevo Consejo, integrado por las siguientes personas: Presidente, José Luis Ulibarri Cormenzana; consejero delegado, Miguel Manovel García; vocales, Adriana Ulibarri Fernández y María Jesús García de la Calle; secretario no consejero, Arturo Cortés de la Cruz. Ulibarri adquirió el Diario de León el pasado día 5 de marzo, a través de la empresa Begar. Cumplidos los trámites administrativos legales de tiempo y forma, tuvo lugar el traspaso de poderes y de representación".

Este comunicado, publicado en el Diario de León en su edición de hoy, da oficialidad al cambio de propiedad en el centenario rotativo leonés. La renovación del consejo, al contrario de lo exteriorizado de forma pública, ha provocado una profunda "preocupación dentro de la plantilla" del diario, según han asegurado hoy mismo algunos de sus redactores. Estos advierten que los "antecedentes no son buenos" destacando la política laboral de "contención" de la que siempre ha hecho gala el empresario de la construcción en sus medios de comunicación (en los que priman las rotaciones de personal, los sueldos 'a la baja' y la eventualidad laboral).

<http://lahoraleonesa.blogspot.com/2007/04/jos-luis-ulibarri-ya-es-oficialmente.html>

JOSÉ LUIS ULIBARRI, ¿NEGOCIOS BAJO SOSPECHA?

José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar, podría haber obtenido dos adjudicaciones de Caja España (de seguridad y limpieza) que se realizaron por concurso gracias a sus influencias, siempre según denunció el grupo de comunicación Promecal. Se trata de sendos contratos adjudicados a las compañías Athena Seguridad y Seralia, ambas pertenecientes al grupo del empresario leonés.

En este caso, y según relata el mencionado grupo empresarial, el consejo de administración de la entidad de ahorro adjudicó hace apenas tres meses la seguridad por 2,7 millones y la limpieza de las sedes por 4,1 millones a las compañías de Ulibarri.

La adjudicación vino precedida por un informe que encargó la entidad financiera a una consultora. Curiosamente, en este texto se aconsejaba a otra empresa como responsable de la seguridad, la que venía realizando la labor hasta este momento.

Se trataba del Grupo Eulen, cuya oferta era 100.000 euros superior, pero tenía a su favor varios factores. Para empezar había desarrollado de forma satisfactoria ya esta función. Para seguir, cumplía el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que la Caja tiene sedes, imprescindible por ley.

La compañía del empresario leonés, en cambio, no las tiene, por lo que, siempre según la versión del citado grupo de comunicación, se ha visto obligada a subcontratar dicho servicio a otra compañía. Otro tanto ha sucedido con la adjudicación que se ha llevado la compañía Seralia, también perteneciente al grupo Begar, que limpiará la mayoría de sedes de Caja España. Este no es el primer caso en el que una adjudicación al grupo de Ulibarri ha llegado hasta los medios de comunicación por su relación de amistad con el adjudicatario o los fallos en la gestión.

En lo referente a las adjudicaciones de seguridad y limpieza de Caja España, el rotativo del grupo editorial Promecal señala directamente a su íntima relación de amistad con el concejal no adscrito José María Rodríguez de Francisco, que hasta la próxima asamblea de la entidad financiera continúa siendo miembro de su Consejo de Administración.

Otra de las adjudicaciones que señala el citado grupo es la última que ha obtenido el empresario leonés. Se trata de la del proyecto y la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal por un total de 5,4 millones de euros, lo que produce extrañeza dado que la oferta presentada por Begar era en este caso la más cara. De hecho, superaba en un total de 300.000 euros la oferta de la siguiente concursante, Acciona, y en casi 900.000 a la más barata, en este caso Indeza.

La decisión de dar al grupo de Ulibarri la adjudicación estaba basada en criterios estéticos, pero también de funcionalidad, calidad de los materiales y del proyecto, según explica el citado grupo.

Otra adjudicación bajo sospecha, según el grupo Promecal, es la de la Casa de Colón. En esta caso concurrían tres empresas en total, pero Ulibarri consiguió ser el que realizase las obras porque el Consistorio decidió que el punto que más debía valorarse a la hora de calificar los proyectos presentados era "la fecha de entrega". La adjudicación estaba dotada con 1,5 millones de euros y se da la circunstancia de que no llegó a finalizarla a tiempo.

En lugar de imponerle la pertinente sanción por incumplimiento de la fecha prevista, en este caso la compañía de Ulibarri resultó beneficiada con el encargo de la ampliación de actividades prevista en el pliego de condiciones del concurso. Es decir, que incumplió las condiciones y se llevó una ampliación del mismo proyecto por valor de 934.397 euros, según los medios del grupo Promecal.

El presidente del Grupo Begar también aprovechó su red de amistades para introducirse en el mundo de los medios de comunicación por medio de la plataforma Retecal. Junto a Hidrocantábrico y Caja España, Ulibarri creó la plataforma y su gestión al frente de la misma la condujo a una lenta agonía. Aún así, se le señala como el único ganador del hundimiento, ya que mientras sus socios luchaban por salir bien parados, el empresario leonés resultó agraciado con una serie de licencias de Frecuencia Modulada, cargando la parte proporcional a los socios de Retecal. Los continuos enfrentamientos con Caja España e Hidrocantábricos obligaron a vender el ente, y Ulibarri aprovechó para adquirir en propiedad una tele a precio "de saldo", según Promecal.

La rehabilitación de este complejo de 706 viviendas también ha suscitado las críticas. El proyecto, adjudicado a la compañía de Ulibarri por un montante total de 4,5 millones de euros fue comenzada en octubre de 2004 y preveía un plazo de ejecución máximo de 25 meses. Además de la disconformidad de los vecinos de Burgos, las críticas vienen dadas por el hecho de que no las va a terminar a tiempo de cumplir el plazo.

También en Valencia parece tener amigos el polémico empresario. Y entre ellos, se destaca su relación con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y con el empresario de la comunicación, Antonio Martín Beaumont, con el que ha agrupado en la sociedad Mediamed Comunicación Digital, seis de los adjudicatarios de licencias de TDT en esta comunidad. Dicha empresa no tiene ninguna Televisión Digital Terrestre de manera directa, pero sí a través de sus firmas asociadas.

http://www.limpieza.com/noticias_n/noticias.asp?noticias=2532

ULIBARRI: LAS ADJUDICACIONES AL GRUPO BEGAR QUE ESCANDALIZAN. DE SOCIO A ADJUDICATARIO. DE SOCIO REFERENTE EN CAJA ESPAÑA CON RETECAL A ADJUDICATARIO DE SERVICIOS

Las influencias del empresario leonés José Luis Ulibarri, presidente del Grupo Begar, le han permitido obtener dos contratos millonarios en Caja España por un importe superior a los 6,8 millones al recaer en sus sociedades los contratos de seguridad y el servicio de limpieza.

Amparado históricamente por el tráfuga de la UPL y miembro del consejo de administración de Caja España, José María Rodríguez de Francisco, el presidente de Begar ha pasado de ser socio de referencia de la entidad financiera en la empresa Retecal a ser uno de los principales adjudicatarios de sus servicios externos.

La desastrosa gestión de Ulibarri al frente de Retecal, que llevó a sus socios Hidrocantábrico y Caja España a una situación económica insostenible al borde de la quiebra, ha sido recompensada con dos contratos que posiblemente en unos meses no se podrían haber rubricado al perder el tráfuga de la UPL su hegemonía en la entidad con la entrada del nuevo presidente.

El penúltimo capítulo de la caja vuelve a tener a José Luis Ulibarri como protagonista. Hace apenas tres meses, y ya con el nombre de Santos Llamas como candidato de consenso para presidir Caja España, el consejo de administración adjudicó a la empresa Athena Seguridad (2,7 millones) y Seralia (4,1 millones de euros), ambas de Ulibarri, los contratos de seguridad y servicio de limpieza.

Sin embargo, la adjudicación del contrato de seguridad vino precedida por un informe de una consultora que aconsejaba al Grupo Eulen, empresa que hasta este año venía realizando los servicios, como primera opción para la renovación del mismo. Eulen presentó una oferta económica superior (100.000 euros), pero contaba a su favor que había desarrollado de forma positiva el trabajo en años anteriores y cumplía el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que Caja España tuviese sedes para depositar en sus cajas fuertes las llaves de las oficinas de la entidad financiera. Athena Seguridad carece de delegaciones en un buen número de provincias en las que desarrolla su actividad Caja España por lo que ha tenido que subcontratar el servicio.

Y en buena medida ha ocurrido igual con el servicio de limpieza que ha recaído mayoritariamente en la empresa Seralia, sociedad propiedad de José Luis Ulibarri.

También en Valladolid. Las estrechas y públicas relaciones de amistad entre el presidente de Begar y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, también han permitido a este leonés obtener frutos empresariales. El último: la adjudicación del proyecto y la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal por 5,4 millones, a pesar de ser la oferta más cara de las cuatro presentadas.

Pero anteriormente a esta adjudicación, el Grupo Begar tuvo que ejecutar las obras de rehabilitación de la Casa de Colón. La sociedad que preside Ulibarri fue una de las tres empresas que concurrió a la construcción del nuevo edificio. Para el fallo de la licitación, el Consistorio consideró en el pliego de condiciones como punto principal "la fecha de entrega", aspecto éste que permitió al Grupo Begar obtener la obra, pero que posteriormente no cumplió, ya que no llegó en fecha. Pese a ello ingresó 1,5 millones de euros.

Sin embargo, los favores en la ejecución de la rehabilitación de la Casa de Colón no concluyeron con la no sanción por parte del equipo de Gobierno. Begar nuevamente resultó beneficiada al recibir el encargo de rehabilitar la antigua Casa de Colón (934.397 euros) gracias a la ampliación de las actividades previstas en el pliego de condiciones del concurso que había ganado. Fue una decisión del propio León de la Riva, al aprovechar la proximidad entre las dos obras para, con un solo concurso, conceder en la práctica la ejecución de ambas a la misma empresa; cómo no, Begar, la compañía de José Luis Ulibarri.

Madrid. Las alianzas de Ulibarri en Madrid se centran en la figura del ex concejal de Vivienda del PP del Ayuntamiento Sigrifido Herráez, que abandonó el Consistorio de la capital para fichar una semana más tarde como vicepresidente en la constructora Rayet. Sorprendentemente, Rayet está ejecutando los dos proyectos más emblemáticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal meses antes de su salida del equipo de Gobierno. Pero ahí no terminan las casualidades. La esposa del ex edil logró la adjudicación de las obras y la gestión del nuevo hospital de

Vallecas y en el Consorcio que resultó agraciado en la licitación aparece, curiosamente, como principal socio de ésta Ulibarri, ocupando además uno de los puestos directivos más importantes del mismo.

Valencia. Por su parte, en Valencia su alianza con el empresario de la comunicación y ex de Nuevas Generaciones Antonio Martín Beaumont le ha permitido conseguir agrupar en la sociedad Mediamed Comunicación Digital a seis de las adjudicaciones de licencias de Televisión Digital Terrestre de la Comunidad Valenciana, convirtiéndose así indirectamente, y por la puerta de atrás, en uno de los empresarios mediáticos con mayor peso de esta región. Sin embargo, sus intereses también están en otras regiones del Levante y este diario pronto hablará también de Murcia.

Confidenciales y otros. Ulibarri ha creado una red de desprestigio a través de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y políticos que denuncian sus particulares actuaciones. Otro ejemplo de estos procedimientos es Joaquín Sánchez Torné, actual director de un rotativo en la ciudad de Burgos propiedad del empresario leonés José Luis Ulibarri.

De vacaciones estivales en el yate de “mi amigo” José Luis Ulibarri

El regidor vallisoletano presume de amistad con José Luis Ulibarri. Tal es esa relación que el alcalde no duda en compartir con el constructor jornadas festivas a bordo del yate que el empresario posee. Esa estrecha vinculación también es constatable en las numerosas “consultas” que no duda en realizar a José Luis Ulibarri en cuestiones que afectan a muchas de sus decisiones públicas. Así, entre sus grandes preocupaciones por mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos, León de la Riva no dudó en ser uno de los pocos alcaldes de Castilla y León en solicitar una licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) para su municipio.

Al desconocer el funcionamiento del medio, el alcalde no dudó en invitar a su amigo José Luis Ulibarri en uno de sus múltiples encuentros de mesa y mantel a que le elaborase un informe a ‘su medida’ para que el regidor supiese qué pasos debería acometer para gestionar o adjudicar una televisión local.

De esta manera, el primer edil podrá tener a su disposición dos cadenas de ‘Televisión De la Riva Total’ municipales (TDT), una la de su amigo José Luis Ulibarri y la otra la que gestionaría directamente el alcalde de Valladolid. Los favores al Grupo Begar no se centran exclusivamente en las adjudicaciones de obra hechas casi a la medida, sino que también están presentes, día a día, en el canal de televisión de José Luis Ulibarri, pues bien sabe que en Valladolid es el político que manda.

La aventura de José Luis Ulibarri junto a Hidrocantábrico y Caja España en Retecal fue la plataforma desde la que este empresario dio su particular salto a los medios de comunicación. La necesidad de crear una empresa regional de telecomunicaciones y la obligatoriedad implícita de crear una televisión bajo su tutela fue el camino aprovechado por el presidente de Begar para erigir su imperio mediático a bajo costo. Su desastrosa gestión al frente de Retecal llevó a sus socios a una situación económica insostenible que hizo imposible la continuidad en esta empresa del sector de las telecomunicaciones.

Esta situación, sin embargo, no fue óbice para que Ulibarri continuara beneficiándose de sus alianzas y de ese modo seguir diseñando una televisión a su medida bajo el amparo de la gran matriz. Mientras Retecal continuaba su lenta agonía, José Luis Ulibarri aprovechó el apoyo institucional y el reparto de licencias de Frecuencias Modulada en el que resultó favorecido para continuar haciéndose un hueco en los medios de comunicación de Castilla y León.

Mientras sus socios buscaban una salida a la indefendible situación de Retecal, Ulibarri diseñaba, financiaba y estructuraba su empresa audiovisual a través de Retecal, cargando la parte alícuota de los gastos a sus compañeros de aventura. Los enfrentamientos con Caja España y con Hidrocantábricos terminaron por hacer inviable la explotación de la empresa de telecomunicaciones de Castilla y León que finalmente tuvo que ser absorbida por una compañía líder en el sector como ONO y de ese modo poder garantizar su viabilidad. Durante este proceso de venta, el presidente de Televisión Castilla y León aprovechó no para continuar con el negocio de las telecomunicaciones, sino para apropiarse a precio de saldo de la televisión que él mismo había gestado en el seno de la ahora transferida Retecal.

Diario de Burgos

CASO GÜRTEL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

LOS CONTRATOS EN MADRID SALPICAN A UN ALTO CARGO DE NÚÑEZ FEIJÓO

José Ramón Lete Lasa, secretario general para el Deporte en la Xunta, firmó al menos dos contratos con Diseño Asimétrico, una de las empresas de la trama Gürtel en la comunidad de Madrid, donde Lete desempeñó sucesivamente la Subdirección y la Dirección General de Promoción Deportiva, dependiente de la Consejería de Cultura y Deportes que presidía Alberto López Viejo, a quien Pablo Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular de Galicia y segundo cabecilla de la trama, identifica como "el muñidor de toda la operativa" de la corrupción en Madrid.

Dentro de sus atribuciones de promocionar el deporte, la citada dirección general madrileña organizó en 2006 un homenaje al montañero César Pérez de Tudela en el que gastó 11.813 euros que fueron pagados a Asimétrico Diseño. Los conceptos se refieren al montaje del escenario donde se celebró el acto. Otra factura de la misma empresa y por importe de 3.300 euros, en 2007, cubrió gastos del Segundo Memorial Jesús Gil. Las dos facturas fueron conformadas por Lete "como un mero trámite", según han precisado fuentes próximas al mismo.

Las contrataciones en la Consejería de Deportes, según las mismas fuentes, eran decididas por el titular del departamento, López Viejo, o el viceconsejero, Javier Hernández Martínez. A mayores, López Viejo, se encargaba de organizar los actos en los que participaba Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, y, según consta en el sumario, obligaba a sus compañeros de Gobierno a contratar con las empresas de Francisco Correa, que facturaron a la comunidad tres millones de euros, troceados en contratos (358) que no superan los 12.000 euros para poder adjudicarlos a dedo. A López Viejo se le atribuye la percepción de 536.000 euros en sobornos.

José Ramón Lete tomó posesión como secretario general para el Deporte en mayo pasado. En la anterior Xunta del Partido Popular, entre 2003 y 2005, fue director general de Deportes y, en Madrid, subdirector general de Promoción Deportiva, y luego, desde el año 2007, director general del mismo departamento. reiteró que no tiene nada que ver con la trama Gürtel y que se limitó, como centenares de funcionarios, a dar conformidad a unas facturas que pagaban servicios contratados por sus superiores y contaban con el visto bueno de la Intervención.

www.elpais.es 18.10.09

CEMENTERA DIRIGIDA POR UN IMPUTADO

José Martínez Núñez, el empresario leonés dueño de Teconsa y de un amplio grupo de empresas de sectores diversos -incluido el de la prensa, pero ninguna que se dedique a instalar el sonido y las pantallas de vídeo, como le fue adjudicado en Valencia con motivo de la visita del Papa- solía hasta hace poco visitar las obras que realizaba su empresa en Galicia desde el aire, a bordo de helicóptero, debido a la dispersión de las mismas por la geografía de toda la comunidad.

Aquí, a su vez, se situó en otros negocios -empresas cuyas son titulares, por ejemplo, de hoteles en Santiago, Lugo y Ourense- y ha fichado a algunos directivos para su grupo. El caso más descolante es el del madrileño Fulgencio García Cuéllar, que fue consejero delegado del Banco Pastor entre 2002 y 2005. Gracias a su programa de actuación, el banco fue saneado y, al concluir esa tarea, en 2005, fue captado por Martínez Núñez para el primer nivel de dirección de su grupo.

El empresario colocó en Galicia a otro personaje que está resultando más polémico. José Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, fue puesto al frente de la cementera Gallega de Molienda de Clinker, como presidente y consejero delegado de la misma. La empresa es una de las filiales del Grupo Martínez Núñez, domiciliada en Ourense pero con la fábrica en Coiros (A Coruña). Comercializa los cementos La Estrella. Balín cesó en sus cargos en la cementera el pasado mes de julio, a raíz de conocerse su implicación en la trama Gürtel, en la que finalmente figura como imputado por sus relaciones con uno de los cabecillas, Pablo Crespo, y por aparecer como administrador de tres sociedades de la red.

www.elpais.es 18.10.09

UNA EMPRESA IMPLICADA EN EL GÜRTEL ABANDONA SUS OBRAS PÚBLICAS

La suspensión de pagos presentada por Teconsa, una constructora enredada en la trama Gürtel, ha paralizado media docena de obras públicas en la comunidad, adjudicadas por un precio conjunto de más de 15 millones de euros. Teconsa es una de las mayores firmas adjudicatarias de infraestructuras en Galicia desde tiempos de Fraga. Y saltó a los titulares cuando el dueño, José Martínez Núñez, encargó presuntamente a unos sicarios el asesinato de Xosé Cuiña, entonces conselleiro de Obras Públicas. El empresario leonés mantenía buenas relaciones con Fraga, pero la Xunta siguió contratándole obras también con el bipartito. La mayoría de las obras que le fueron adjudicadas entre los años 2008 y 2009, por el Gobierno gallego y otras administraciones, sólo están ejecutadas en un 10% y un 20%.

En 1999, un año antes del rocambolesco episodio del intento de asesinato del delfín de Fraga, que al final no pudo ser demostrado, uno de los principales implicados en la trama Gürtel, Pablo Crespo, era recomendado por Cuiña a Correa, que se lo llevó a Madrid. Hasta ese momento y desde 1994, Pablo Crespo hizo las cuentas del PP gallego y fue el encargado de organizar las campañas y los mítines. Nunca hacía declaraciones públicas y para muchos pasaba por ser un trabajador discreto y eficaz. Pero en la ría de Arousa, donde se produjo su bautizo político, hay ex alcaldes que recuerdan sus amenazas y sus mentiras.

En Santiago, siempre aparecía dos metros por detrás del presidente de la Xunta y del conselleiro de Obras Públicas. Era el chico de los "recados", por alguno definido como "la criada del partido".

www.elpais.es 18.10.09

UNA FIRMA IMPLICADA EN LA RED GÜRTEL DEJA SIN ACABAR OBRAS POR 15 MILLONES

La suspensión de pagos por Teconsa, empresa constructora con graves implicaciones en la trama Gürtel, ha dejado colgadas media docena de obras públicas en Galicia, las adjudicadas y empezadas en 2008 y 2009 con un precio global que superó los 15 millones de euros. La presencia de Teconsa en Galicia viene de lejos y está salpicada de episodios sonados, como el presunto encargo a unos sicarios, por parte del dueño de la empresa, José Martínez Núñez, del asesinato de Xosé Cuiña, a la sazón conselleiro de Obras Públicas, que finalmente se quedó en nada.

Las relaciones de Manuel Fraga con el empresario leonés siempre fueron amigables, pero no cabe cargar únicamente sobre esas relaciones la amplia huella de la empresa en Galicia. En 2007, por ejemplo, Teconsa contrató en la comunidad obras públicas por 33,8 millones. Ahora, el proceso concursal de la empresa, señalado en septiembre pasado, sancionó la gravedad de su situación, coincidiendo con las primeras referencias de su implicación en el Red Gürtel. En algunas de las obras que ejecutaba en Galicia, sin embargo, ya se trabajaba al ralentí desde antes de verano.

Entre las obras adjudicadas en 2008 y 2009, sólo una está casi acabada y otra ni ha comenzado, ambas en Narón; de otras está ejecutado sólo el 10% o el 20%. Es el caso del polideportivo que Teconsa construía en el polígono de Navia para el Ayuntamiento de Vigo dentro del programa del Plan E. Fue la opción más fuerte de la Tenencia de Alcaldía de Vigo (BNG) en la cuota de gasto que le correspondió en el reparto con el PSOE. Por su precio, 4,2 millones, era la obra más importante de la empresa en Galicia, y tenía que estar acabada en diciembre próximo. Pero la constructora sólo ha certificado el 20%, aunque no todo le ha sido pagado.

El Ayuntamiento -con tranquilidad porque en los casos de fuerza mayor puede prorrogarse la fecha de fin de obra, según la convocatoria del Plan E, que financia la Administración central- se mantiene a la espera de que el administrador concursal autorice la cesión de la obra a otra empresa alternativa, y en esos trámites andan las administraciones afectadas.

Para la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Teconsa estaba trabajando en la carretera Ponte do Porto-Laxe, adjudicada en 2008 por 2,9 millones, y la travesía de Seixo, en Marín, adjudicada este año por 791.000 euros. La primera está ejecutada en un 20% y la otra, en un 10%. La consellería ha roto el contrato con la constructora de mutuo acuerdo y tras incumplir ésta, reiteradamente, los plazos acordados. Ahora está en trámite de dar audiencia a las siguientes empresas que participaron en el concurso de adjudicación para conocer su interés en proseguir las obras paradas. "No habrá adjudicación directa", subraya la consellería.

Adjudicaciones de la Xunta a Teconsa son también la construcción del complejo lúdico deportivo de A Parda, en Pontevedra, por 2,3 millones. La obra, adjudicada en 2008, tendría que estar acabada en diciembre, pero no se mueve desde julio. La rehabilitación del monasterio de Monfero, adjudicada en la misma fecha por 1,5 millones por la Consellería de Industria, también está parada. Ni este departamento ni la Dirección Xeral de Deportes, de la que depende el complejo de A Parda, han facilitado datos sobre la salida que prevén para ambas obras.

Además, Teconsa ha dejado una obra casi acabada y otra sin empezar en Narón. La primera, la perimetral del polígono de A Gándara, adjudicada por 1,2 millones de euros, está prácticamente acabada. "Sólo quedan unos muretes y los enganches a la red eléctrica", dice el alcalde, Xoán Gato. La otra, un paso inferior en la vía de FEVE adjudicado por 550.000 euros, no llegó a empezar y el Ayuntamiento tramita la rescisión del contrato.

El Ministerio de Fomento adjudicó a Teconsa, el año pasado, la adecuación de las travesías de Melón, Cea, Sobradelo y Xinzo por casi un millón de euros. Pero el encargo más importante de la Administración central fue la adjudicación, en 2007, de la nueva terminal del aeropuerto de Santiago, que ganó la UTE Teconsa, Isolux Corsán y Copcisa por 125,8 millones. Ahora Fomento ya ha ejecutado una de las cláusulas del pliego de condiciones y ha dejado fuera a Teconsa, cuya participación en la UTE ya ha sido directamente asumida por Isolux.

www.elpais.es 18.10.09

PABLO CRESPO : EL HOMBRE DE LOS "PAQUETITOS"

Pablo Crespo, 'segundo' de Francisco Correa, gobernó durante cinco años la 'cocina' del PP gallego parapetado tras las figuras de Manuel Fraga y Xosé Cuiña

"No soy un político, soy un técnico", repetía, con una media sonrisa, cuando un periodista le pedía una declaración. Pablo Crespo Sabarís (Pontevedra, 1960) justificaba así su empeño en permanecer en la sombra durante el lustro, entre 1994 y 1999, que estuvo en la cúspide del PP gallego dirigido por Manuel Fraga y el entonces todopoderoso Xosé Cuiña. Al hombre que ahora tiene 1.240.000 entradas con sólo teclear su nombre en Google no se le recuerda entrevista alguna ni declaraciones públicas. Ni tampoco, pese a ser el tercero del partido, tras Fraga y Cuiña, una intervención política. Ni siquiera un mitin en la campaña de las elecciones gallegas de 1997, en la que era el *número cinco* por Pontevedra y en la que tanto facturaron las empresas de la trama Gürtel que ahora codirigía. En los años dorados del fraguismo, Crespo aparecía como un escudero silencioso, siempre un par de metros detrás del presidente y su delfín, un hombre casi sin rostro.

Lo suyo era llevar los libros contables y organizar campañas y grandes actos, no ocuparse de la ideología, y menos de dar mitines. Ni uno. "Fue un gerente con amplias funciones en el partido", explica un ex político que se sentaba con Crespo en la ejecutiva del PP gallego. Pero eran labores siempre en la *cocina*.

"Tenía cero autonomía y responsabilidad política", asegura otro dirigente jubilado. "Más que un intendente, era como la criada del partido, el que hacía los recados, iba a buscar un paquetito aquí, a llevar otro allá. Pero no pintaba nada" en el plano político, señala uno de los también ahora retirados responsables del PP en el sur de Galicia. "Nosotros nos autofinanciábamos, no teníamos ni una deuda en el partido y no recurrimos nunca a él para nada", se apresura a añadir. Los libros con cuentas presuntamente irregulares del PP gallego, que Crespo guardaba en la caja fuerte de un banco en Pontevedra, dispararon estos días las llamadas entre compañeros de filas, con preguntas del tipo "oye, ¿y tú de todo esto tienes algo?".

Los que compartían responsabilidades en el PP gallego reconocen que cuando en 1994 Cuiña lo introdujo como su mano derecha, tanto en el partido como de asesor en Obras Públicas, a aquel treintañero sin experiencia política que dirigía una caja de ahorros en Vilagarcía se le acogió sin sorpresa por ser el hijo de un histórico muy apreciado, Manuel Crespo Alfaya. "Nadie lo conocía, pero llegó con un aval de primera división", destaca un ex dirigente. No hay nadie en el PP que aún hoy no exprese afecto por el ya fallecido y muy respetado Crespo Alfaya, delegado de Fraga cuando era ministro de la dictadura y mano derecha en Pontevedra del joven Mariano Rajoy, primero presidente de la diputación y luego vicepresidente de la Xunta (1986-1987). Crespo Alfaya ayudó también mucho a Cuiña cuando pasó de alcalde de Lalín a sustituir a Rajoy en la Diputación, por lo que a nadie le extrañaba que luego le

devolviese el favor colocando a su retoño. "Era de esas estrategias de fichaje de Cuiña que no entendía nadie, aunque en este caso debería un favor al padre", apunta otro ex miembro de la cúpula conservadora.

Crespo había tenido su bautismo político en Vilagarcía, adonde llegó en 1993 para dirigir una sucursal de Caixa Galicia. Tres años después, fue elegido presidente local del PP. Los populares habían perdido la mayoría absoluta en el ayuntamiento gracias a los manejos del secretario general de la Cámara de Comercio, y a la postre narcotraficante, Pablo Vioque, ya desvinculado del PP, en el que había sido un destacado dirigente local años atrás. Vioque se hizo con la llave para arrebatarle la alcaldía a la derecha y dársela al PSOE, en las elecciones de 1991.

Eran los años del apogeo del contrabando y el narcotráfico. Con el apoyo de Cuiña, Crespo comenzó el asalto al poder por la Cámara de Comercio. Por mandato expreso de Fraga, Vioque fue apartado fulminantemente de la Cámara en julio de 1995, tras la entrada y registro de la sede por parte de personal de la Dirección Xeral de Comercio.

Eliminado Vioque, Crespo inició su cruzada contra las viejas huestes del PP en Vilagarcía para hacerse con el control, no sólo de su ejecutiva, sino también del puerto y de Fexdega. Siempre con el respaldo de Cuiña, se salió con la suya, aunque en dos años la militancia pasó de 1.200 afiliados a 60. Colocó a un hombre de paja en el partido y en la presidencia de la Autoridad Portuaria, Manuel Bouzas, también director de banco y que provenía del PSOE.

Para apartar del puerto al ex alcalde José Luis Rivera Mallo, *Pablito*, como le llamaban, desató una campaña de ataques personales que le valieron una condena por calumnias. Hoy nadie quiere hablar públicamente de su paso por Vilagarcía. Sólo Rivera se expresa sin tapujos: "Fue un adicto a la mentira, a la confabulación y a la traición, pero no voy a hacer leña del árbol caído".

De su etapa arousana también se recuerda su campaña a favor de la instalación de los depósitos químicos de Ferrazo, ahora declarados ilegales. Algunos alcaldes de la ría admiten que fueron presionados por él para que apoyaran el proyecto. "Sólo unos pocos no cedimos a unas maniobras que sólo podían entenderse por intereses económicos", comenta un alcalde. "Me dijo 'te vas a acordar', y claro que me acuerdo. Cuando sale esposado en la tele".

Mientras fraguaba su carrera en Vilagarcía, Crespo ya estaba en nómina de la consellería de Cuiña como asesor desde 1994. Lo dejó dos años más tarde, cuando irrumpió como secretario de Organización del PP, cargo que compaginó luego con el de consejero de Portos de Galicia, con una interrupción de un año cuando ocupó un escaño de diputado. Nadie le recuerda en una reunión del ente, del que fue cesado por la conselleira socialista María José Caride al final de 2005.

En Santiago, Crespo se esforzó por no llamar la atención. Su protagonismo fue nulo durante los ocho meses en los que ejerció como diputado autonómico, entre noviembre de 1997 y julio de 1998. "No puedo, no tengo tiempo", se excusaba con sus compañeros de escaño. Prefería dedicarlo a la *Nécora*, la antigua sede del PP gallego en la acera de enfrente del Parlamento. "Tenía una capacidad de trabajo enorme, en la línea de Fraga y Cuiña", asegura otro ex dirigente. Pero eran labores alejadas de las de un secretario de Organización. "Ni siquiera le enviaban a apagar fuegos".

El hoy uno de los principales protagonistas de la trama Gürtel huía de los micros, pero no faltaba a una cita del PP gallego, a las que siempre acudía "con extrema puntualidad" aunque sin abrir la boca. "Tenía un comportamiento extraordinario, impecable y cumplidor", cuenta un ex dirigente del grupo parlamentario. Se marchó a Madrid cuando Fraga decapitó el cuiñismo, en 1999, y Cuiña lo recomendó - "es oro molido"- a Francisco Correa, cerebro de la red Gürtel. En el PP gallego muchos aseguran tener dificultades para reconocer en aquel hombre sin genio ni figura a uno de los cerebros de la trama. Un ex eurodiputado cuenta que coincidía mucho con Crespo en aviones de Madrid a Bruselas. "Siempre lo veía viajar en *business*, lo recogían en el aeropuerto coches de lujo y siempre me preguntaba a qué se dedicaría para tener semejante tren de vida".

www.elpais.es 18.10.09

NADIE CONOCE AHORA A PABLO CRESPO

De repente, nadie en el PP gallego conoce a Pablo Crespo, la mano que meció sus cuentas y campañas electorales durante un lustro, entre 1994 y 1999, siempre bajo el mando del entonces todopoderoso Xosé Cuiña. La amnesia en el partido se extiende de la actual dirección, que preside Alberto Núñez Feijóo desde enero de 2006, a los barones provinciales aliados a finales de los años noventa en el llamado sector de la boina, el ala rural del PP que monopolizaba el poder orgánico dentro de la formación conservadora.

El actual presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán ¿que en 2001 encargó una encuesta para el partido a la mujer de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama?, dice que "no hay caso", y a la vez aplaude la mano dura contra los imputados de Madrid y Valencia. En Ourense, a José Luis Baltar, hombre de confianza del ya fallecido Cuiña, el jefe de Crespo durante aquella época, tampoco le suenan empresas como Orange Market y Special Events.

Mientras, el sumario judicial revela la existencia de una caja de seguridad en un banco de Pontevedra, registrada a nombre de Crespo y que refleja supuestamente la contabilidad en dinero negro del PP gallego, ingresos cuya procedencia no se detalla e infinidad de pruebas de que buena parte de la trama Gürtel se fraguó en Galicia hace ahora 15 años. El propio Crespo apunta a la financiación irregular en una conversación grabada que mantuvo con su abogado el pasado 24 de febrero en la cárcel y en la que le pregunta por la prescripción de este tipo de delitos.

Sus compañeros de escaño durante el año que permaneció en el Parlamento gallego también han perdido la memoria.

La muerte de Xosé Cuiña, el secretario general y consejero de Obras Públicas de Fraga hasta 2003 ¿cuando fue apartado del Gobierno por vender desde sus empresas trajes de agua a la Xunta en plena crisis del petrolero Prestige?, traza la frontera entre el nuevo y el viejo PP. Cuiña, el hombre que fichó como número tres del partido a Crespo ¿director por aquel entonces de una sucursal bancaria en Vilagarcía de Arousa, sin apenas pasado político y con un perfil muy bajo?, todavía intentó plantar batalla años más tarde en el congreso de la sucesión de 2006. Perdió frente a Núñez Feijóo, que por entonces ya le había sustituido como vicepresidente primero del Gobierno gallego, responsable de las infraestructuras y favorito en las plantas nobles de Génova 13, sede nacional del PP.

Y Fraga... Fraga, presidente del partido durante 17 años, ha dicho ahora desde el Senado que en cuanto conoció de las andanzas de Crespo lo puso en la calle.

Esa decisión la adoptó en 1999, a instancias del secretario general del PP gallego, Xesús Palmou. Tuvo bastante que ver una declaración jurada que firmó el propio Crespo reconociendo una supuesta deuda del partido ¿sin facturas ni presupuesto que avalasen los gastos ? de 50 millones de pesetas con Special Events. Fraga dio orden de cortar cualquier lazo con la red de sociedades de la trama y el secretario de organización fue relevado del cargo. Pero Crespo pronto buscó acomodo en Special Events, la firma con la que tanto había contratado años atrás. En el sumario consta que fue el mismo Cuiña quien le recomendó. "Llévate a Crespo que es oro pulido", cuenta Correa que le dijo.

En la sede popular de Santiago algunos ex trabajadores tienen frescas las constantes llamadas del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, y sus repetidas presiones después del año 2000 para que se volvieran a encomendar trabajos desde el partido y la Xunta a Special Events. La única consejería que accedió, la de Agricultura, encargó una campaña de promoción de la carne en plena crisis de las vacas locas, por 1,5 millones de euros. Estaba presidida por Juan Miguel Diz Guedes, otro histórico del PP e íntimo de Cuiña. Diz Guedes ha cambiado de siglas para presentarse por un partido independiente a la alcaldía de Tui, un ayuntamiento mediano de Pontevedra.

Si sus antiguos socios internos reniegan de Crespo e insisten en que nunca lo trataron, al PP de Feijóo esas "historias de hace diez años" le suenan a chino. El propio presidente aseguró el jueves que sólo dará explicaciones sobre Gürtel si aparece algo posterior a 2006. Lo de atrás, dijo, tendrán que aclararlo "anteriores responsables" del partido. Entre ellos, es de suponer, el propio Fraga, que lo nombró vicepresidente. Y, cada vez que tiene ocasión ¿sucede casi a diario?, Feijóo airea que cuando sucedió "todo aquello" (la trama que financiaba los actos electorales del partido en los 90) él ni siquiera militaba en el PP (se afilió en 2001).

Sus allegados insisten en que la financiación ilegal le queda lejos "no sólo en el tiempo, también por sus protagonistas", la mayoría enemigos internos que se opusieron a su ascenso en la organización. Hay incluso quien se sorprende de lo comprensiva que está siendo la prensa con las prácticas del sector de la boina, muy probablemente porque su máximo exponente, Xosé Cuiña, falleció en diciembre de 2007.

Feijóo, convertido en barón del PP nacional desde que recuperó la Xunta con una victoria que salvó el tipo a Mariano Rajoy, trata de evitar cada mañana que la corrupción lo salpique. Y no sólo la de Galicia. Cuando los titulares del escándalo en Valencia se hicieron insostenibles, el presidente gallego pidió "que cada palo aguante su vela". Mientras los candidatos a liderar el partido en el futuro ¿incluido Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y el propio Camps? se abrasan, uno tras otro, al calor de las imputaciones judiciales de sus cargos, Feijóo responde sólo sobre Galicia. Afirma que no es nadie para dar ejemplo pero deja entrever que él sería más contundente con ciertos comportamientos.

El presidente repite a menudo que su cabeza está en la Xunta y en cómo salir de la crisis, pero algunos de sus colaboradores empiezan a mirar sin disimulo a Madrid. No piensan en el corto plazo, porque, según un dirigente de su confianza, "Alberto siempre será leal a Mariano, en quien ve a un amigo que lo está pasando mal". Otra cosa es que Rajoy no esté. El día que eso suceda, Feijóo aspira a presentarse como el político impoluto que no se dejó manchar por Gürtel.

www.elpais.es 12.10.09

FEIJÓO Y LOUZÁN APLAUDEN EL CESE DE LOS IMPUTADOS EN EL 'CASO GÜRTEL'

No es precisamente una de sus aliadas en el partido, pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salió públicamente a aplaudir la decisión de Esperanza Aguirre de expulsar del grupo parlamentario a los tres diputados, todos de su máxima confianza, imputados por el juez en la *trama Gürtel*. "Lo mejor", dijo Feijóo en una entrevista en la Cadena SER, "es que mientras no se aclaren estas cosas, esas personas tengan una baja en las responsabilidades de un partido que no está de acuerdo en que haya gente que utiliza la política para mejorar su situación económica".

El mensaje dirigido a Madrid busca otros destinatarios en Valencia y en la sede del PP nacional en la calle Génova. Feijóo, uno de los barones regionales que más influye en Rajoy, siempre ha sido partidario de cortar cabezas y de adoptar medidas ejemplarizantes para borrar cualquier signo de complicidad con la corrupción y taponar la sangría de credibilidad que amenaza al partido. Para evitar verse salpicado por la trama corrupta, el propio Feijóo desveló, que uno de los cerebros de la red de Correa, Pablo Crespo, presentó su renuncia como vocal de Portos de Galicia en 2003, justo después de que el actual presidente de la Xunta asumiera la Consellería de Política Territorial. "Dimitió a los pocos días de llegar yo y no volvió a participar en el consejo de administración", insistió. Es una verdad a medias. Lo cierto es que la carta con su renuncia no fue tenida en cuenta hasta tres años después con la llegada del bipartito a la Xunta. Fuentes cercanas a Feijóo aseguran que Crespo no participó en ninguna reunión de este organismo y ponen a disposición las actas del consejo de administración.

El líder del PSdeG, Manuel Vázquez, acusó, no obstante, al jefe del Ejecutivo de mentir. Vázquez volvió a reclamar que la fiscalía abra una investigación de oficio y los juzgados una pieza separada para estudiar las ramificaciones de Gürtel en Galicia. De hecho, los socialistas ya han presentado una batería de preguntas en las diputaciones de Pontevedra y Ourense para que expliquen si contrataron con alguna de las sociedades de Correa y Crespo.

La ofensiva del PSOE no inquietó al presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, quien dijo sentirse "tranquilo" porque, según explicó, hay "cero posibilidades" de que su institución o el partido se vea afectada por este caso de corrupción masiva que sacude al PP. Poco después de escuchar a su jefe de filas, Louzán, se apuntó a su discurso sobre las responsabilidades depuradas en Madrid. "Me parece lo más razonable porque se mantiene la imagen de que el PP es un partido honesto", valoró la decisión de Aguirre.

La doctrina política que Feijóo y Louzán abrazan ahora, acorralados por la presión de la opinión pública, está lejos de la que uno y otro han aplicado en Galicia estos últimos años. La dirección regional del PP y también la de Pontevedra siempre han reclamado esperar al último pronunciamiento judicial antes de adoptar medidas disciplinarias. Sucedió en el caso del alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, ratificado como candidato en las últimas elecciones donde encabezó la lista más votada, pese a estar imputado por cinco graves delitos relacionados con el trato desde el ayuntamiento a sus propias

inmobiliarias. Cuando la oposición pidió su cese, Louzán primero y Feijóo apelaron a "la presunción de inocencia". Entretanto, Fernández Rocha sigue acumulando reveses judiciales.

Como el teniente alcalde de Gondomar, Carlos Silva, condenado por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Mientras los tribunales resuelve su recurso, Louzán lo ha consolado con un sueldo por dedicación exclusiva en la Diputación pontevedresa de 60.000 euros al año. El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, que sigue en su puesto, también está imputado por un juez, que persigue un doble delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La sentencia firme en la sala de lo social contra la directora general de Trabajo, Ana María Díaz López, por despido improcedente, tampoco mereció de momento ninguna respuesta del jefe del Ejecutivo, que alega que es fruto de un error.

www.elpais.es 10.10.09

LA GÜRTEL INTERVINO EN LAS GALLEGAS DE 2001

El lápiz de memoria intervenido por la Policía al contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo, incluye entre otros documentos un informe económico de ingresos y gastos de las elecciones gallegas de 2001, las últimas que Manuel Fraga ganó por mayoría absoluta. El vínculo entre las empresas de la red corrupta y el Partido Popular, dos años después de que Pablo Crespo abandonase la secretaría de Organización del PP gallego, echa por tierra la afirmación del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que la relación de los conservadores gallegos con la trama murió en 1999.

Una tesis en la que intentó abundar el presidente gallego en la rueda de prensa posterior al semanal Consello de la Xunta. "Lo único que sé es que el señor que está implicado en este asunto [Pablo Crespo] fue apartado del PP de Galicia en 1999. Si lo pudiéramos volver a apartar lo haríamos, pero ya está apartado", insistió sin explicar por qué lo mantuvo como su representante en el Consejo de Administración de Portos de Galicia entre 2003 y 2005.

Según Feijóo, "el tema está claro: hay una persona que perdió la confianza del partido hace diez años, fue apartado y ahora está siendo juzgado. Por una serie de actuaciones que hizo hace más de diez años o más". El presidente gallego aseguró que, "de momento", lo que se conoce del sumario "es exactamente lo mismo" que ya sabía "al inicio de la campaña electoral" de las elecciones gallegas de marzo, a pesar de que ahora la Policía ha hallado evidencias de irregularidades contables en el partido que él preside. Y justificó su negativa a investigar con el argumento de que sólo pueden hacerlo los jueces, que son quienes tienen en su poder los apuntes contables de las elecciones a las que ha acudido el Partido Popular.

Los documentos relativos a las elecciones de 2001 no son los únicos que han aparecido en el sumario del caso Gürtel relacionados con Galicia y posteriores a la salida de Crespo de la dirección del PP. También consta, por ejemplo, el contrato adjudicado a la trama en 2001 por la Xunta de Manuel Fraga para favorecer el consumo de carne de vacuno.

Una vez más, Feijóo se escudó en su supuesta bisoñez para negar toda responsabilidad y apuntar a su antecesor en el cargo, hoy senador en representación del Parlamento de Galicia. Su único compromiso, subrayó, es desde que tomó posesión como presidente del partido, en el año 2006: "De los anteriores años hay responsables del partido que asumirán su responsabilidad".

El propio jefe de la trama, Francisco Correa, relató a la fiscal su vinculación con el PP gallego. "Yo fui a ver a don Manuel para hacer nosotros las campañas electorales de Galicia y conozco a Pablo Crespo porque era la mano derecha de Fraga y de Pepe Cuiña (...) e iniciamos una relación excelente".

Obligado a responder, durante media hora, a multitud de preguntas sobre la trama, Feijóo se esforzó en restarle importancia. "Me preocupa mucho más el precio de la leche en Galicia que el caso Gürtel y su relación con el PP de Galicia", declaró.

Y en línea con la argumentación de Rajoy y de Camps, el presidente gallego lo fió todo al resultado electoral. "Yo sólo creo en la opinión de los electores, de los ciudadanos cuando dan su voto. Y todo indica que hay un partido que está bajando y otro que está subiendo. Y el que está bajando no está

dispuesto a que esto ocurra", concluyó, insinuando la supuesta relación del PSOE con el vendaval que amenaza al PP.

Eso sí, Feijóo evitó garantizar que no habrá más implicados del PP gallego en la trama y rechazó poner las manos en el fuego por el presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, que supuestamente adjudicó contratos desde la Diputación provincial a una empresa de la red de Correos. "Él acaba de decir que nada tiene que ver", respondió cuando fue preguntado por los periodistas.

(www.publico.es, 09/10/09)

FEIJÓO AFIRMA QUE SÓLO RESPONDE POR LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS DEL PP GALLEGO

Mientras los dirigentes nacionales del PP envían declaraciones grabadas y convocan ruedas de prensa sin preguntas - Mariano Rajoy, no ha contestado a los periodistas en la calle Génova desde el 13 de abril- su líder en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ve obligado a responder incluso desde la sede del Gobierno a espinosas cuestiones relacionadas con el caso Gürtel.

Como ejemplo, . La trama de financiación ilegal que salpica al PP monopolizó su comparecencia tras el Consello de la Xunta. Aunque advirtió de que no era "ni el momento ni el lugar", Feijóo se presentó como "el primer interesado" en solventar las dudas. Tuvo que contestar once preguntas consecutivas, en una hora de comparecencia, sobre las andanzas de Correos, El Bigotes, la actuación de los dirigentes populares en Valencia y Madrid, pero también sobre las posibles ramificaciones de la trama en Galicia. Y, éstas últimas le suenan lejanas no sólo en el tiempo, también por sus protagonistas, al presidente del PP. "Cosas que pasaron hace diez años", repitió una y otra vez, a la prensa. Cuando se refirió a Pablo Crespo, el ex secretario de organización del PP de Galicia hasta 1999, ahora encarcelado, y que desde prisión ha admitido la financiación ilegal del PP gallego en aquella época, Feijóo insistió en que "el partido lo apartó en su día y que lo apartaría una segunda vez si fuera posible".

No se quedó en eso. Feijóo optó por desmarcarse de todo lo que pasaba en la formación conservadora hasta su llegada a la presidencia. Si en las últimas semanas advirtió de que ni siquiera militaba en el PP a finales de los 90, cuando la red de Correos empezó a acumular contratos millonarios en Galicia, señaló en rojo la fecha desde la que está dispuesto a asumir responsabilidades. Y ésta arranca en enero de 2006 cuando las bases lo proclamaron formalmente sucesor de Fraga. De todo lo anterior, deberán responder sus antecesores, anunció, cuando los periodistas le preguntaron por escándalos en Galicia que podrían ver la luz a medida que se vaya conociendo el sumario.

"Yo me comprometo con lo que hizo el partido desde que tomé posesión como presidente, en los años anteriores, como es natural hay responsables del partido que asumirán esa responsabilidad". Feijóo se desentiende así de lo que pasaba en el PP, incluso cuando él era vicepresidente de la Xunta y mano derecha de Fraga en el Gobierno. Así que la siguiente cuestión aludió a uno de los hombres fuertes del partido, el presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, quien contrató en 2001 una encuesta para el PP provincial que hizo María del Carmen Rodríguez Quijano, mujer de Francisco Correa.

¿Pone la mano en el fuego por Louzán? "Vamos a ver lo que hay, creo que la exposición del señor Louzán es clarísima, ha dado la cara y ha dicho que nada tiene que ver". En realidad, Louzán se ha limitado a decir que "no hay caso" y a recordar que sus cuentas están auditadas por el Consello de Contas, un argumento que también utiliza el PP de Valencia. En su larga comparecencia, Feijóo evitó juzgar el comportamiento de su partido en otras comunidades abogó varias veces por dejar trabajar a la Justicia, y por que "quienes se aprovecharon de la política o de algún partido político" asuman las consecuencias. Sí, exigió, sin citar su nombre al líder del PSdeG, Manuel Vázquez, que haga públicos nuevos datos sobre Gürtel, "si es que tiene esa información privilegiada".

Otros dirigentes del PP gallego se multiplicaron para negar cualquier vinculación con Gürtel. El líder local de Pontevedra, Telmo Martín, señalado por los socialistas al haber adjudicado una urbanización a una constructora valenciana que supuestamente pagó comisiones a la trama, compareció indignado para proclamar: "Ni el PP de Galicia ni yo mismo hemos sido nombrados en el sumario". En parecidos términos se expresó el líder del PP de Ourense, José Luis Baltar: "Nosotros no tuvimos trato con esa gente".

(www.elpais.com, 09/10/09)

CORREA ENTREGÓ A BÁRCENAS 131.570 EUROS POR LAS ELECCIONES GALLEGAS

El levantamiento parcial del secreto del sumario del caso Gürtel refleja que la organización dirigida por Francisco Correa realizó entregas de dinero entre 1997 y el 2002 al ex tesorero del PP Luis Bárcenas vinculadas con las elecciones gallegas. Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso La Voz, la trama Gürtel entregó un total de 131.570 euros a Bárcenas, en aquella época gerente del PP nacional, en tres pagos en los años 1997, 1999 y 2002. Los apuntes de esas entregas al entonces número dos de la tesorería del PP se encuentran en la cuenta "Caja X PC Caja Madrid" bajo el encabezamiento "Cobro elecciones gallegas" y cuyos movimientos se detallan en el sumario.

El primero, que lleva fecha del 13 de enero de 1997, figura como "Ent.P.Correa (Fra. L. Bárcenas)" por valor de 1.900.000 pesetas. El segundo, del 22 de julio de 1999, bajo el concepto de "retirada por P.C. (L.Bar.c.?)", es de 15.000.000 pesetas. El tercer pago, del 13 de marzo del 2002, aparece como "Sobre L.?B." por un montante de 30.000 euros.

Antes, el 15 de junio de 1998, y siempre bajo el encabezamiento "Cobro elecciones gallegas", hay otra entrada, en este caso "Ent. L.Bar.c. a PC (Caja de Seguridad)", que da cuenta de un cobro por parte de la trama corrupta de 1.000.000 de pesetas con la anotación en el campo de observaciones de "sobre sin contar". Es decir, que Bárcenas entregó a Correa un sobre con un millón de pesetas en efectivo de procedencia desconocida y que pasó a engrosar la contabilidad B de la trama.

La conclusión que consta en el sumario sobre estos apuntes es taxativa: "De ello se infiere que la persona que responde a las siglas L.?B. recibió dinero por importe de 1.900.000 pesetas (11.419 euros), 1.500.000 pesetas (90.151 euros) y 30.000 euros, y a su vez aportó fondos a la organización que van a una caja de seguridad que posteriormente nutre la caja B de Serrano, con la anotación en un sobre sin contar. Dichas operaciones se refieren a la campaña electoral en Galicia en el año 1998 [sic] y ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos".

www.lavozdegalicia.es, 09/10/09)

EL BIGOTES RECLAMÓ POR CARTA A RAJOY 150.000 EUROS DE DEUDA POR ACTOS ORGANIZADOS PARA EL PPDEG

Entre la documentación aportada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales figura una carta que Álvaro Pérez, el Bigotes, uno de los imputados, dirigió a Mariano Rajoy y a otros dirigentes del PP para reclamarle el pago de una deuda del año 1999 por diversos actos de la campaña de las elecciones municipales en Galicia organizados por empresas de la red corrupta de Francisco Correa. En la carta, fechada en diciembre del 2003, Álvarez asegura que tanto el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, como su segundo en esa época, Luis Bárcenas, y Javier Arenas estaban al corriente de la deuda.

La explicación a esa reclamación de pago se encuentra en el hecho de que cuando Xesús Palmou llegó a la secretaría general del PPdeG, en 1999, no solo ordenó que no se contratara ningún evento más con las empresas de Correa, sino que se negó a asumir las deudas con esas empresas correspondientes a los años en que Pablo Crespo era secretario de Organización del PP de Galicia.

Palmou fue quien sugirió al entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, que destituyera a Crespo y tras cumplirse esa medida, el ex secretario de Organización pasó a trabajar directamente a las órdenes de Francisco Correa como responsable de varias de sus empresas.

La deuda que el Bigotes reclamaba a Rajoy ascendía a 150.000 euros y estaba relacionada con los actos que la empresa Special Events organizó para el PPdeG en la campaña de las elecciones municipales de 1999. "El motivo de la presente no es otro que solicitar tu intervención en un asunto que para nuestra compañía es grave y en el que hemos sido maltratados por la dirección general del partido en Galicia", señalaba Álvaro Pérez en su misiva. Además de a Rajoy, Lapuerta y Arenas, la red de Correa presionó también a Fraga para intentar cobrar la deuda, pero ni el ex presidente ni Xesús Palmou cedieron a las presiones.

www.lavozdegalicia.es, 09/10/09)

FEIJÓO ASEGURA QUE NO SUPO DE LA PRESENCIA DE CRESPO EN UNA EMPRESA DE SU CONSELLERÍA

Frente al intento de Feijóo de desmarcarse de la presunta financiación ilegal del PP de Galicia, el PSOE ató el cabo de Portos de Galicia. Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de Organización del PP gallego, figuró como vocal de Portos de Galicia hasta que fue destituido por el bipartito en 2005. Y el ente portuario dependía directamente de la Consellería de Política Territorial, de la que era responsable Alberto Núñez Feijóo. Pero el presidente de la Xunta no tardó en proclamar que desconocía el cargo que ejercía Crespo en Portos cuando él era conselleiro.

"En relación con el tema de Portos, que yo sepa [Crespo] ni siquiera aparecía por ahí, ni yo sabía por supuesto que estaba nombrado", afirmó Feijóo en Bruselas, al ser preguntado por si se había planteado destituirlo cuando asumió la consellería. El presidente del PP señaló que las posibles irregularidades en la financiación del PP gallego son cuestiones de "hace 10 años". Ningún miembro de la actual ejecutiva del partido estaba implicado, resaltó. "La renovación del Partido Popular iniciada en 2006 fue lo suficientemente grande como para mantener una tranquilidad absoluta en relación con este asunto", zanjó Feijóo. Según el presidente, el sumario del caso Gürtel no aporta novedades: "Las revelaciones lo único que acreditan es lo que ya sabemos".

Por lo que se refiere a la actuación de Manuel Fraga, que en aquel momento era presidente de la Xunta, Feijóo resaltó que el propio senador "acaba de decir claramente que cuando tuvo algún contacto, algún conocimiento directo o indirecto de alguna cuestión que no le encajaba, automáticamente destituyó esa persona".

El tiempo transcurrido también fue el argumento principal del portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda. En el seno del partido reina una "absoluta tranquilidad", señaló Miranda, porque ningún miembro de la dirección actual tiene "relación con este tipo de cosas ni con estas personas". Feijóo resumió así las revelaciones del caso que figuran en el sumario: "Había una persona que llevó las cuentas del partido entre el 96 y el 99, y los papeles de esas cuentas se los llevó en una caja fuerte y esa caja fuerte está intervenida por las autoridades judiciales que están investigando precisamente las cuestiones que hizo esa persona".

La renovación llevada a cabo desde 2006 en el PP de Galicia significa que "las personas implicadas en presuntos casos de corrupción son personas que no están hoy con cargos en el partido", insistió. "Lo que ocurrió hace 10 años, 12 años, 13 años en un partido es evidente que tiene su repercusión, pero actualizar lo que ocurrió hace 13 años es simplemente descontextualizar un debate", añadió, para concluir: "En este momento, implicar al Partido Popular de Galicia en este asunto me parece enredar mucho el tema".

Por lo que se refiere al PP nacional, el presidente de la Xunta reclamó "actuar en consecuencia" cuando "hay alguna responsabilidad" y "dejar que la justicia investigue a fondo este asunto y nos diga todo lo que nos tiene que decir". "Somos un partido democrático y aceptamos por supuesto las investigaciones judiciales. Otra cosa son las filtraciones judiciales, pero eso no es responsabilidad del PP sino que es responsabilidad directa del Gobierno socialista", acusó.

El presidente del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, contraatacó "¿Qué puedo contestar? ¿A qué contesto?", respondía a las preguntas de los periodistas. "No tengo constancia de nada" que pueda implicar al PP en la provincia o a la Diputación que él preside en la trama corrupta. "No hay caso", sostuvo, aunque sí abundó en las acusaciones a los socialistas, al afirmar que el PSOE "es un gran artista a la hora de intentar embarrar".

El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, mientras, centró la diana en Feijóo, de quien rechazó su argumento principal. "No llegó ante al PP, era parte del entramado", le acusó, después de recordar que ya en 1991 era alto cargo de la Xunta de Fraga. "Feijóo y Crespo coincidieron en el anterior Gobierno del PP, en Política Territorial", dijo en relación con la vocalía de Portos de Galicia. "Ya está bien de mentir".

El líder de los socialistas gallegos exigió a Feijóo que "dé la cara" y explique la vinculación de su partido con el caso, y avisó de que si no lo hace, su partido intentará "abrir otras vías" para llegar al fondo del asunto. "Si Feijóo no toma la iniciativa tendrá que ser la justicia la que abra una separata en el caso gallego", indicó

El portavoz del BNG, Guillermo Vázquez, también exigió explicaciones a Feijóo sobre lo que definió como "trama corrupta". Vázquez fue más lejos y sostuvo que Feijóo no puede despachar este asunto diciendo que él no estaba al frente del partido en ese periodo. "Nuestro país merece una explicación del señor Núñez Feijoo", declaró. Vázquez censuró la política de silencio de los líderes populares ante esta situación, porque "a uno sólo le lleva a pensar, francamente, que están de acuerdo con lo que pasa". "Si uno no está de acuerdo adopta algún tipo de medida y si espera a que pase la tormenta, induce a pensar que está de acuerdo con lo estaba pasando", razonó el portavoz nacionalista.

(www.elpais.com, 08/10/09)

FRAGA: "EN CUANTO SUPE ALGO, CESÉ INMEDIATAMENTE A PABLO CRESPO"

El PP de Galicia había reclamado silencio sobre Gürtel. no había programado ni un acto y el propio presidente de la Xunta, de viaje en Bruselas, negó que conociera a Pablo Crespo, el número dos de la trama, a pesar de que éste fue vocal en un organismo de la Consejería que presidió Alberto Núñez Feijóo entre 2003 y 2005.

El silencio oficial lo rompió, otra vez más, el presidente fundador. Un día después de que se conociera la conversación en la que Crespo dejaba entrever a su abogado una trama de financiación ilegal del PP gallego a finales de los noventa, Manuel Fraga negó tener conocimiento alguno de esas prácticas. A preguntas de los periodistas en el Senado, el veterano senador presumió de haber sido él quien echó a Crespo de la Secretaría de Organización del partido, en cuanto supo algo. "A la persona que ha mencionado, la he cesado inmediatamente", y eso, añadió, "que había sido propuesto por un gran hombre de Galicia como fue el señor Cuiña. El señor Crespo tendría todo el conocimiento, yo no, y en cuanto supe algo lo eché", insistió Fraga.

(www.elpais.com, 08/10/09)

ALERTA EN GALICIA: "EL LÍO QUE SE PUEDE MONTAR SERÁ MORROCOTUDO"

Solo 24 horas después de que Manuel Fraga sacase pecho en la ejecutiva estatal del PP destacando los problemas de los colegas valencianos, la sombra de la duda se cernió sobre su gestión. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas desde la cárcel por el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, uno de los principales implicados en el caso Gürtel, incluyen una alusión directa a las cuentas de la formación que gestionó entre 1996 y 1999, cuando Fraga presidía la Xunta. Y en ellas advierte a su abogado de la existencia de "una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba". "Eso va traer cola cuando se levante el secreto de sumario", vaticina.

El PP gallego se había mantenido al margen de la presunta financiación irregular del partido. Ello había llevado al actual hombre fuerte en esa comunidad, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a soltarle a su homólogo valenciano, Francisco Camps, un "que cada palo aguante su vela", que ahora deberá aplicarse a sí mismo. Y es que las revelaciones de Crespo a su abogado, José Antonio López Rubal, abren la puerta a todo tipo de suspicacias.

El imputado explica al letrado, el 22 de febrero de este año, que la policía le ha intervenido en una caja fuerte que tiene en Pontevedra la "documentación económica pura" del PP gallego en esos cuatro ejercicios y le indica que no cree que estos entrañen un "problema jurídico muy grave, salvo el de 1999".

Crespo pregunta a López Rubal cuándo prescriben "este tipo de cosas", y este le previene de que si es un "problema de financiación irregular" pueden conducir a un "delito electoral". "Como mucho, 10 años", le explica. El exdirigente del PP recuerda, aliviado, que si la prensa se entera esa semana –la víspera de las últimas elecciones autonómicas gallegas– "el lío que se podría montar sería morrocotudo".

Dos días antes, Crespo habló de esta documentación con su esposa, Consuelo Margarita Vázquez, para explicarle que, en su día, le entregó una copia de las cuentas a Fraga para que este supiera que había tenido un "secretario de organización decente y ordenado". "Para que vaya haciendo comentarios por ahí el viejo de que no sé qué y que no sé cuánto. A ver lo que hace ahora, a ver qué comentario hace ahora", se lamenta ante su compañera sentimental en referencia a los comentarios negativos que Fraga pueda hacer sobre él.

El tema vuelve a salir en otra conversación del detenido con sus abogados, fechada el pasado 6 de marzo, en la que les dice irónicamente que en las cuentas de la caja fuerte los investigados hallarán “cosas espectaculares”. “Ahí encontrarán mil y pico millones de pesetas de la época y no sé qué. Y verán ingresos, y bueno, yo ni siquiera me acuerdo de eso, porque además todo estaba con seudónimos”, concluye.

(www.elperiodico.com, 07/10/09)

CRESPO APUNTA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DEL PP GALLEGO

Fue el secretario de Organización del PP gallego a finales de los años noventa, cuando el todopoderoso Xosé Cuiña ejercía como número dos de Fraga. Pablo Crespo se ocupaba de la fontanería, organizaba las campañas y romerías multitudinarias de los populares. También llevaba las cuentas del partido. Todo lo dejó anotado en una caja de seguridad de un banco en Pontevedra. Cuando 10 años después tuvo noticias de que la policía acudía a desprecintarla, estando ya él en la cárcel, Crespo expresó su preocupación a su socio, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a su abogado.

Sucedió el pasado 24 de febrero. La conversación que figura en el sumario, cuyo secreto levantó el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, apunta a una posible financiación ilegal del PP gallego. En el locutorio de Soto del Real, Crespo admite que la contabilidad del PP está en la caja y que ésta contiene una relación de ingresos sin explicitar quién los hacía. Crespo pregunta directamente a su abogado por las consecuencias legales de sus actividades. Este es un extracto de la conversación:

Crespo. No creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo de 1999. ¿Cuándo prescriben este tipo de cosas?

Abogado. Depende de lo que hablemos. Si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho 10 años, pero yo creo que menos.

Crespo. Le dice a Francisco Correa: como mucho 10 años. Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...

Abogado. Seguro, seguro. Aunque hiciese 20 años, EL PAÍS lo sacaría igual.

Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana [...], el lío que se puede montar es morrocotudo.

(www.elpais.com, 07/10/09)

CRESPO REVELA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DEL PP GALLEGO EN LOS 90

Una conversación mantenida por Pablo Crespo con su abogado, que figura en la parte del sumario cuyo secreto levantó el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, apunta a una posible financiación ilegal del PP de Galicia. El ex secretario de Organización de los populares gallegos reconoce en ella que había gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido entre 1996 y 1999, que estaban depositadas en una caja de seguridad de Pontevedra, donde guardaba toda la información económica de su gestión, y de la que se incautó la policía.

Así lo dice en una comunicación con su letrado José Antonio López Rubal grabada por orden judicial en el locutorio de la cárcel de Soto del Real el pasado 24 de febrero. Crespo informa a su letrado de que en esa documentación había una “relación de ingresos y gastos sin especificar quién ingresaba”, le muestra su preocupación por las irregularidades y le dice que el asunto va a “traer cola” cuando se levante el secreto sumarial.

Crespo considera que las cuentas del ejercicio de 1999 pueden ser un “problema jurídico muy grave” y le pregunta, muy inquieto, cuándo prescriben “este tipo de cosas”, a lo que su abogado responde que si se trata de “financiación irregular” que sea constitutiva de un delito electoral son “como mucho diez años”. A continuación, el número dos de la trama dirigida por Francisco Correa asegura que si publica esa información un diario madrileño estando vigente el secreto del sumario y esa misma semana, a poco días de las elecciones gallegas del 1 de marzo, “el lío que se puede montar es morrocotudo”.

En esa misma conversación, Crespo ordena a su abogado la "ejecución" de fondos en Suiza, sin especificar los detalles de la operación, aunque le advierte que "hay que hacerlo con calma porque una cosa desproporcionada salta las alarmas allí". En otro momento, López Rubal le comenta que si el caso llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid "hay un magistrado que les ayuda" y que cuentan con abogados que "se mueven bien" en la Audiencia Nacional.

Cuatro días antes, Crespo mantuvo una conversación con su mujer, en la que le cuenta que en su día entregó a Manuel Fraga una copia de las cuentas del partido para que supiera que había sido un secretario de Organización "decente y ordenado". "Para que vaya haciendo comentarios por ahí el viejo de que no sé qué y no sé cuánto... a ver lo que hace ahora", afirma el que fue hombre de confianza del fallecido Xosé Cuiña. Una vez celebradas las elecciones gallegas, Crespo se jacta en otra conversación con su abogado de que el caso Gürtel no había perjudicado al PP.

Los gastos sin justificar a los que alude Crespo ascienden a 584.580 euros, según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que consta en el sumario. De los 6,1 millones de euros a que ascendieron los gastos totales del PP gallego entre abril de 1996 y septiembre de 1999, más de la mitad, algo más de 3,2 millones, se pagaron en dinero B, de los que solo hay recibos por valor de 2,6 millones. El informe está elaborado a partir de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco de Santander en la calle de la Peregrina, de Pontevedra, cuyo titular era Crespo, y que fueron requisados por la policía el pasado 19 de febrero.

En la misma caja de seguridad había una carta enviada por Álvaro Pérez, el Bigotes, a Mariano Rajoy el 18 de diciembre del 2003, tres meses después de que fuera nombrado secretario general, en la que le reclamaba el pago de los compromisos pendientes de la campaña de las municipales de 1999. En ella, le recuerda que Arenas y Luis Bárcenas estaban informados del asunto.

(www.lavozdegalicia.es, 07/10/09)

FEIJÓO: "EL 'CASO GÜRTEL' SON CUESTIONES DE HACE 10 AÑOS"

La ramificación gallega del caso Gürtel, posibles irregularidades en la financiación del PP de la comunidad, son, para Alberto Núñez Feijóo, "cuestiones de hace 10 años". "No solamente es pasado", afirmó en Bruselas, "sino que ningún miembro del comité ejecutivo del PP formaba parte hace 10 años de esa situación". El presidente de la Xunta añadió, además, que le "parece muy bien que el responsable de organización del PP hace 10 años dé cuentas ante la justicia".

El PSdeG, por su parte, exigió de los populares que "abran ventanas" y reclamó "explicaciones" a Carlos Negreira, Rafael Louzán y Telmo Martín, todos del PP y que, según la socialista Mar Barcón, "dieron dinero público a empresas de la trama". Los nacionalistas del BNG también solicitaron "explicaciones" de Feijóo "a la sociedad gallega, en vez de él pedírselas a Camps".

(www.elpais.com, 07/10/09)

'FONTANERO' EN BUSCA DE DINERO FÁCIL

No hubo acto político entre 1996 y 1999 en el PP gallego que no organizase Special Events, la empresa implicada en la presunta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Su monopolio era tal que el resto de agencias ni peleaban por las campañas de los populares gallegos. Corrían buenos tiempos para el *sector de la boina*, el ala rural del partido, que proporcionaba a Manuel Fraga las romerías multitudinarias que tanto le gustaban. Su máximo exponente, Xosé Cuiña, el sempiterno delfín -ya fallecido-, ocupaba la secretaría general del PP y presidía la consejería más inversora del Gobierno: Obras Públicas. Y, para los asuntos corrientes, Cuiña había aupado a *número tres* del PP (secretario de organización) a Pablo Crespo, un dirigente de perfil bajo con experiencia en los números como director de banco en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Si Cuiña programaba un baño de masas para don Manuel, Pablo Crespo se encargaba de cerrar el trato. Siempre a través de Special Events. Si el alcalde de un pequeño ayuntamiento se tambaleaba en las encuestas, el secretario de organización asfaltaba carreteras para ganarse a los vecinos. Aunque luego olvidase pagar la factura, como recordaban dos constructores pontevedreses.

A Crespo apenas se le conocieron declaraciones públicas. Los enemigos de Cuiña, el sector urbano del PP, no olvidan sin embargo una afrenta a finales de 1997 que refleja la incruenta batalla interna. El secretario de organización, ya con escaño autonómico, aprovechó la celebración de un congreso para relegar a los últimos bancos a dos ministros de Aznar: Mariano Rajoy y José Manuel Romay, enfrentados al sector galleguista. En primera fila posaban sonrientes Cuiña y su equipo. El episodio molestó mucho a La Moncloa y sirvió a la prensa para explicar la caída de Crespo un año más tarde. Pero su eclipse, a principios de 1999, tuvo más que ver con la gestión y contratos a empresas (singularmente Special Events) que firmó en nombre del PP, según fuentes del partido.

Tras la caída de Cuiña, el nuevo secretario general, Xesús Palmou, exigió a Fraga la destitución del secretario de organización. Y Crespo buscó acomodo en la sociedad con la que tanto había tratado. Special Events le ofreció un cargo directivo en Madrid y el eterno *fontanero* siguió organizando actos y campañas del PP en todo el país, a excepción de Galicia, donde se le había cortado el grifo. Fue tal el ninguneo que ni siquiera la presión desde la sede nacional del PP surtió efecto: y entre 1999 y 2004 la sociedad no facturó un euro al PP gallego (aunque sí firmó una campaña por 1,5 millones con la Consejería de Agricultura).

Las informaciones sobre el accionariado de Special Events y su ubicación en un paraíso fiscal obligaron a Fraga a comprometerse en 2005 a no tratar más con la empresa. Pero Pablo Crespo hacía un lustro que volaba por libre lejos de Santiago. A través de ocho sociedades distintas ha negociado contratos con Administraciones públicas gobernadas por el PP, como la Generalitat valenciana o la Comunidad de Madrid.

En octubre no perdió ocasión de saldar viejas cuentas en el juzgado. Acudió como testigo a una vista por una deuda que el PP de Pontevedra contrajo con una pequeña agencia de publicidad cuando él era gerente provincial. Crespo testificó a favor de la empresa y el PP fue condenado.

Nada más conocerse su detención, los populares gallegos anunciaron el viernes que el ex secretario de organización ni siquiera es ya afiliado. El fin de su carrera empresarial no pilló por sorpresa a quienes lo conocieron en Pontevedra. Algunos ex compañeros recordaban su propensión a elegir socios comprometidos en busca de dinero fácil.

www.elpais.es 06.10.09

UNA CONVERSACIÓN GRABADA EN LA CÁRCEL APUNTA A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP GALLEGO

Tras la Comunidad Valenciana y Castilla y León, las redes de la trama Gürtel llegan a Galicia. Una conversación mantenida entre uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, y su abogado, y que figura en la parte del sumario hecha pública hoy por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, apunta a una posible financiación ilegal del PP de Galicia.

La conversación entre Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex que fuera número tres de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña, se produjo el pasado 24 de febrero en los siguientes términos:

Pablo Crespo. Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte. Cuando viniste la última vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras.

José Antonio. Seguramente.

Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?

José Antonio. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral [inaudible], como mucho diez años, pero yo creo que es menos.

Pablo Crespo. Le dice a Francisco Correa "como mucho diez años". Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...

José Antonio. Seguro, seguro. Aunque hiciese veinte años de esto, EL PAÍS lo sacaría igual.

Pablo Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. Si estando el secreto del sumario, si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo.

José Antonio. Lo sacan igual, porque ya me lo han hecho con otras cosas parecidas.

(www.elpais.com, 06/10/09)

EL PP GALLEGO PAGÓ EN DINERO NEGRO 3,2 MILLONES DE EUROS

El Partido Popular de Galicia pagó 3.224.826 euros en dinero negro, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, a diferentes proveedores que le organizaron todo tipo de eventos. Así consta en un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía, donde **también se recogen múltiples pruebas que demuestran la financiación ilegal del PP** en la Comunidad Valenciana y en Madrid.

El presidente del PP gallego en aquella época era Manuel Fraga y como número tres del partido en su calidad de secretario de Organización figuraba Pablo Crespo, ahora en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la trama *Gürtel*. La cúpula la completaba el secretario general, José Cuiña, fallecido en 2007 e implicado en múltiples escándalos durante su trayectoria política.

Las conclusiones de la Policía se basan en el análisis de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco Santander en la calle Peregrina de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo. **El registro en la entidad se realizó el pasado 19 de febrero**, por orden judicial, cuando el caso de corrupción ya había estallado y Crespo se encontraba en prisión.

Dos grupos de dinero B

En los documentos se detallaban los gastos totales del PP de Galicia en ese periodo de tres años y medio, que ascendieron a 6,1 millones de euros. De ellos, más de la mitad se pagaron en negro.

En algunos casos, el PP no tiene ni una nota de recibí del pago realizado

La Brigada de Blanqueo explica en su informe que las cantidades abonadas en dinero B se dividen en dos grupos: "Uno que corresponde a pagos realizados donde **existe un soporte documental del mismo mediante notas de recibí, recibos, etc**, que **ascienden a 2.640.246 euros**, y otro que se refiere a pagos realizados donde no existe un soporte documental del mismo, cuyo montante asciende a **584.580 euros**".

En los documentos escondidos en la caja de seguridad de la entidad bancaria figuraba una relación parcial de acreedores que habían organizado actos del PP gallego, pero de los que el partido no tenía ni un recibí. Es más, Crespo menciona expresamente en sus papeles "que está intentando localizar los justificantes de dichas empresas y por dichos importes". Las empresas y los importes son los siguientes: FCS (126.000 euros), A-Uno Asociados (120.000 euros) y Special Events (114.000 euros).

La Policía recuerda que dos de esas empresas, Special Events y FCS, forman parte del conglomerado empresarial montado por Francisco Correa, jefe de la *trama Gürtel*. En el informe no se realiza ningún comentario sobre la tercera sociedad, A-Uno Asociados. En el Registro Mercantil Central figura una empresa con dicha denominación, constituida en 1997 y dedicada a la publicidad.

El partido abonaba más de la mitad de sus gastos en dinero B

Junto al nombre de la empresa y el importe, en el listado de Pablo Crespo también consta el "concepto" genérico del evento por el que pagó el PP. En varias ocasiones se especifica que fueron actos de las elecciones autonómicas de 1997, las terceras que ganó Fraga.

"Facturación dual"

Tras analizar los documentos, la Policía es contundente en sus conclusiones: **"Este método de facturación pone de manifiesto la existencia de un sistema de facturación dual**, una parte es visible y por tanto fiscalizable, y otra es invisible y en consecuencia ajena a los circuitos financieros reales". Además, los investigadores de la Brigada de Blanqueo denuncian que esta forma de actuar "dota de opacidad a la forma de financiación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".

El PP no ha asumido aún ninguna responsabilidad por la financiación ilegal destapada por la Policía.

www.publico.es 04.10.09

EL PP GALLEGO, CON FRAGA A LA CABEZA, PAGÓ MILLONES DE EUROS EN NEGRO A LA TRAMA GÜRTEL

El Partido Popular gallego pagó 3.224.826 euros en *dinero negro*, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, a los proveedores que le organizaron todo tipo de eventos, según revela un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, que concluye que existen indicios de una presunta financiación ilegal del PP, según recoge *Público*.

El presidente de los *populares* gallegos durante aquellos años era Manuel Fraga, que tenía como secretario de Organización del partido a Pablo Crespo, hoy en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la *trama Gürtel*, y como secretario general a José Cuiña, fallecido en 2007 e implicado en múltiples escándalos durante su trayectoria política.

Las conclusiones de la Policía se basan en el análisis de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco Santander en la calle Peregrina de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo. El registro en la entidad se realizó el pasado 19 de febrero, por orden judicial, cuando el caso de corrupción ya había estallado y Crespo se encontraba en prisión. En los documentos en poder de la Policía se detallaban los gastos totales del PP de Galicia entre los años 1996 y 1999, que ascendieron a 6,1 millones de euros. De ellos, más de la mitad se pagaron en negro.

La Brigada de Blanqueo explica en su informe que las cantidades abonadas en dinero B se dividen en dos grupos: "uno que corresponde a pagos realizados donde existe un soporte documental del mismo mediante notas de recibí, recibos, etc, que ascienden a 2.640.246 euros, y otro que se refiere a pagos realizados donde no existe un soporte documental del mismo, cuyo montante asciende a 584.580 euros".

En los documentos escondidos en la caja de seguridad de la entidad bancaria figuraba una relación de empresas que habían organizado los actos del PP gallego, pero de los que el partido no tenía ni un recibí. En uno de los papeles encontrados, Crespo escribe "que está intentando localizar los justificantes de dichas empresas y los importes correspondientes. Según la Policía, son los siguientes: FCS (126.000 euros), A-Uno Asociados (120.000 euros) y Special Events (114.000 euros).

Los investigadores concluyen que dos de esas empresas, Special Events y FCS, forman parte del entramado empresarial de Francisco Correa, el cabecilla de *Gürtel*. En el informe no se realiza ningún comentario sobre la tercera sociedad, A-Uno Asociados. En el Registro Mercantil Central figura una empresa con dicha denominación, constituida en 1997 y dedicada a la publicidad.

www.elplural.com 04.10.09

CASO GÜRTEL LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M

La página perteneciente al informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept, muestra cómo la empresa facturó desde su inicio (15 de octubre de 2003) a distintas Administraciones del PP. En el listado figura el contrato otorgado por el Ministerio de Presidencia.

Easy Concept, una de las empresas del núcleo duro de la *trama Gürtel*, trabajó para el Ministerio de Presidencia en marzo de 2004, cuando el entonces titular del departamento y vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, estaba ya en funciones tras la victoria electoral de Zapatero. Según ha sabido *Público*, a Easy Concept, entonces denominada Down Town Consulting, se le adjudicó a dedo el montaje de los estrados para las televisiones en el funeral de Estado por las víctimas del 11-M, celebrado el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. La agencia Efe anunció la fecha del funeral el 16 marzo.

Por ese encargo, la compañía cobró **11.647,15 euros**. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept incluido en el *sumario Gürtel*. Como en la mayoría de las ocasiones, también aquí se trató de un contrato menor, que no requiere concurrencia pública ni más justificación contable que las facturas.

Al empeorar las cosas para el PP con la apertura de una parte del sumario, Arenas, secretario general del PP hasta septiembre de 2003 y líder del partido en Andalucía, ha reaccionado prometiendo querellas contra cualquiera que lo vincule a la red corrupta. "No tengo absolutamente nada que ver", contestó rotundo el martes pasado. "No aceptamos ni media lección de ética", se jactó a renglón seguido.

Fuentes próximas a Arenas en la dirección estatal del PP aseguraron que nadie de su antiguo equipo ministerial **recuerda aquel contrato**. "Como eran unas tarimas para cámaras y fotógrafos es muy posible que contratase la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia", dijo una portavoz.

A la pregunta de por qué la elección recayó sobre Easy Concept, la misma fuente respondió así: "Correa no es un desconocido ni Álvaro [Pérez]. Quien fuera [que hiciese el encargo] dijo: Oye, llamad a Álvaro o a Correa. **No es nada extraño. Y son 11.000 euros**".

Pero la clave no es aquí el importe sino la fecha. En marzo de 2004, Easy Concept ni siquiera había cumplido medio año de vida. La empresa se constituyó el 15 de octubre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. La cercanía entre la constitución de Easy Concept y la encomienda del Ministerio de Presidencia para un acto de tal relevancia denota la familiaridad con que el grupo de **Correa se movía en las aguas del PP**. En el momento en que la sociedad recibió el encargo de Presidencia tenía como administradora única a Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el caso.

Empeñado desde febrero en marcar distancias con la trama y en presentar a su partido como la víctima de una conspiración y, en todo caso, de unos cuantos desaprensivos, Arenas anunció la semana pasada el inicio de acciones judiciales contra el secretario de comunicación del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Vázquez había exigido a Arenas explicaciones **sobre su relación con los miembros de la red**.

La dirección del PP andaluz pretende también querellarse contra el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, por "ensuciar" el nombre de Arenas. En este caso, la amenaza llegó después de que Zarrías recordase que Arenas había sido secretario general del PP. ¿Cuándo? "En los tiempos en que estos señores campaban por sus respetos y extorsionaban, chantajeaban y se llevaban el dinero a espaldas y de paso regaban a múltiples dirigentes del PP", dijo Zarrías.

El informe de la Agencia Tributaria que consigna el pago del Ministerio de Presidencia a Easy Concept muestra el **amplio abanico de trabajos con Administraciones del PP que declaró a Hacienda**. La Comunidad de Madrid, la Generalitat, varios organismos autónomos y ayuntamientos figuran en el listado.

Las cartas del archivo de "embolados"

El PP andaluz se ha prodigado en anuncios de querellas tras difundirse el informe policial de la UDEF que destapa la existencia de unas comprometedoras cartas incautadas a la trama y que se se archivaban en una carpeta con la leyenda "embolados". Las firma Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Y la más relevante de todas, por el rango de su destinatario, es la enviada a Mariano Rajoy el 18 de diciembre de 2003. En ella, el delegado de la red corrupta en Valencia exigía a Rajoy el pago de la deuda pendiente por la campaña de las elecciones gallegas de 1999. A lo largo del texto, Pérez recordaba a Rajoy que Javier Arenas estaba al tanto del problema. 'El Bigotes' ya había cursado a Arenas una carta en junio de ese año. En ella, lamentaba tener que contactar de nuevo con él por el asunto de la deuda.

www.publico.es 12.10.09

LA MALA SOMBRA DEL 'CASO GÜRTEL'

El dogma de la dirección del PP que predica que la trama Gurtel es un tumor aislado y sin riesgo de metástasis se ha revelado como una doctrina fútil. Este tipo de escándalo se asemeja más al efecto de una piedra arrojada a un estanque: del golpe brotan círculos concéntricos que se multiplican y estiran hasta remover toda el agua. Aunque en público no se admita, la onda expansiva de Gürtel ha tocado de lleno el estado de ánimo de los dirigentes andaluces del PP, que andaban por las nubes después del multitudinario mitin de Dos Hermanas (Sevilla) del 27 de septiembre. Allí donde van, el caso les persigue. No hay manera de colar un mensaje y la actitud es a la defensiva: espantar las moscas anunciado querellas en cascada.

Se lamentan los populares -en voz baja, desde luego- de lo poco que ha durado el llamado *espíritu de Dos Hermanas*, expresión acuñada por el propio Javier Arenas para transmitir al siempre expectante elector del PP que ganar en Andalucía es posible, y que Antonio Sanz, secretario general, define en su *blog* con un lenguaje más grandilocuente, acorde al tamaño que se le ha conferido a la hazaña. "Es un paso decisivo hacia la victoria", glosa. Incluso ha sido creada una red social para mantener el vigor del espíritu, al que Gürtel ha practicado un certero exorcismo. "Después de un esfuerzo tan grande, se ha venido abajo", se queja un diputado, que el jueves estaba más atento a cómo blandía su guadaña Esperanza Aguirre (presidenta de Madrid) sobre la cabeza de los imputados que a lo que se cocía rutinariamente en el pleno.

La convicción de que el *caso Gürtel* no explotará en Andalucía como en la Comunidad valenciana porque apenas hay incidencia -sólo ramificaciones sueltas de las empresas investigadas en Alhaurín el Grande (Málaga), Jerez (Cádiz) o Granada- no es suficiente para disipar el trastorno de la militancia y de los cargos medios. "Cuanto más remota es la relación con la dirección nacional del partido, mayor es el desconcierto de la gente, se abre una oscuridad infinita", señala un dirigente, que explica la poca presencia en Andalucía de la red corrupta en que el PP no gobierna en la Junta. Otro cargo advierte de que aún están por conocer dos terceras partes del sumario y hay espacio para nuevos respingos.

Arenas ha pedido a los suyos que mantengan la calma (lo hizo el miércoles en una reunión con el grupo parlamentario), que estén preparados para las arremetidas del PSOE y no se ofusquen. Pero la desazón ante el espectáculo es inevitable. Al terminar la sesión matinal del pleno de esta semana, los diputados del PP se arremolinaron junto al salón de plenos y compusieron un círculo, tal vez inconscientemente, como el de las caravanas de vaqueros cuando atacaban los indios. El propio líder vivió en sus carnes el martes lo que supone que un asunto así se convierta en tu sombra. En un acto en la Universidad de Sevilla, y con los estudiantes completamente entregados, cuatro de las seis preguntas que hicieron los periodistas fueron sobre corrupción. Arenas no tuvo más remedio que proclamar: "No tengo nada que ver con el *caso Gürtel*", ante el gesto aturdido de los chavales. Lo mismo le ocurrió en días sucesivos, y en Marbella, donde intentó combatir la sensación de acoso con diatribas hacia el PSOE. "Ni media lección de ética", aseveró.

Porque ya sea con sobrentendidos y trabalenguas -como propone (y practica) el presidente de la Junta, José Antonio Griñán-, o de forma estridentemente colorista, como hizo el secretario de Estado Gaspar Zarrías -"el próximo congreso lo harán en Alcalá-Meco", dijo-, los socialistas no van a dejar escapar la oportunidad de desgastar todo lo que puedan a Javier Arenas y devolverle la avalancha de acusaciones de corrupción que ha echado, y sigue echando, sobre su marca.

El primer flanco del dirigente popular por el que ha penetrado la artillería del PSOE es su etapa como secretario general del PP de 1999 a 2003. En esa época la red Gürtel ya había echado a andar y en las conversaciones de los acusados salen a relucir regalos y agasajos. Arenas, además, era amigo de pádel

de Luis Bárcenas (ex tesorero) y Jesús Sepúlveda (antiguo alcalde del madrileño Pozuelo), ambos imputados, y hay un par de cartas entre los muñidores del caso que le mencionan. Tales hechos ni le involucran ni le ligan a nada, pero su mera alusión es una mina enterrada que espera a que alguien la pise.

La segunda línea que sigue el PSOE para resaltar el momento de embarazo que pasa Javier Arenas, también vicesecretario de Política Territorial del PP nacional, es su estrecha relación con uno de los protagonistas: Francisco Camps (presidente de la Generalitat valenciana). A través de él, el líder andaluz dirigió la estrategia de apoyo de los barones territoriales a Mariano Rajoy en el congreso de Valencia para frenar a las belicosas huestes de Esperanza Aguirre. Según decían sus allegados: "Camps es de Arenas y no al revés, le mira de abajo arriba". Ahora Camps, en palabras del círculo del andaluz, es un hombre de "quinta fila" y sin brillantez ninguna al que es "fácil embaucar" y convencer de que es un "verdadero monstruo".

Para el PP andaluz el mazazo del *caso Gürtel* se resume así: tras el verano había conseguido olvidar el mal sabor de boca que dejaron las elecciones europeas, en las que se vio con claridad que la victoria de Arenas estaba mucho más allá que a la vuelta de la esquina. El ensalzado *espíritu de Dos Hermanas* insufló a los militantes ánimo y confianza. Sin embargo, ha durado lo que la alegría en la casa del pobre: el huracán Gürtel se lo ha tragado

www.elpais.es 11.10.09

PIDEN EXPLICACIONES AL ALCALDE DE GRANADA POR EL VIAJE DE RAJOY CONTRATADO A EMPRESA DE CORREA

Después de los últimos datos conocidos que vinculan a algunos sectores del PP andaluz con la trama del caso Gürtel, los socialistas granadinos han pedido al alcalde de Granada, José Torres Hurtado -foto- y al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que den explicaciones sobre los hechos. El PP granadino está vinculado, supuestamente, con Special Events, empresa que organizó un acto político del PP y en el Ayuntamiento y otro del Hotel Rallye. Supuestamente, la empresa recibió el triple de lo que reflejan las facturas

Desde el PSOE granadino han pedido explicaciones a los populares nada más conocerse los hechos. La secretaria de Organización de los socialistas granadinos, Mercedes González ha considerado que el levantamiento de parte del sumario del caso Gürtel "ha dejado claro que las empresas implicadas en la trama han trabajado para el PP de la provincia". De esta forma, calificó de "grave y preocupante" en cuanto que se está investigando una supuesta financiación ilegal de este partido.

González ha considerado "sorprendentes" las declaraciones del vicepresidente ejecutivo del PP, Antonio Ayllón, quien aseguró que las visitas de Rajoy a Granada fueron organizadas desde Madrid. El PP granadino, por tanto, se limitó "únicamente a llenar de gente ambos actos". La dirigente socialista recordó además la presencia de otras empresas "amigas del PP en Granada como Intralia", que "están cometiendo irregularidades", señaló. Mercedes González se preguntó si estas entidades se sumarán también a la trama Gürtel. Sea cual sea el resultado, el PSOE ha insistido para que el alcalde y el presidente provincial del PP granadino "den explicaciones a los ciudadanos".

Rajoy visitó Granada a principios de 2005 con motivo de la campaña de apoyo a la Constitución Europea. El líder del PP paseó por algunas calles de Granada antes de entrar al acto del hotel *Rallye*. Después del evento Rajoy hizo un acto de partido dentro del salón de plenos del Ayuntamiento granadino. El presupuesto original de *Special Events* era de 3.460 euros, pero la empresa de *El Bigotes* terminó cobrando mucho más. Después de las cuatro modificaciones de las facturas, al despacho de Luis Bárcenas llegó una factura por valor de 13.834 euros con fecha 17 de febrero de 2005.

www.elplural.com 09.10.09

EL CASO GÜRTEL EXTIENDE SUS BIGOTES HASTA MÁLAGA Y GRANADA

Cada vez que se tira un poco de la manta que envuelve el *caso Gürtel* salen a la luz más sospechas sobre la extensa mancha de corrupción en el entorno del Partido Popular. En Andalucía se ha desvelado que Special Events, la empresa de Álvaro Pérez *El Bigotes*, facturó mas de 13.000 euros por una visita de un par de horas de Rajoy a Granada.

También se ha dado a conocer que TECONSA y PROINSA del grupo Martínez Núñez, implicadas en la trama *Gürtel*, realizaron donaciones muy generosas en Alhaurín el Grande donde tienen intereses urbanísticos

El Bigotes también hizo negocios en Granada. Allí obtuvo un beneficio de más de 10.000 euros por organizar dos de actos del presidente del PP, Mariano Rajoy, durante la campaña de apoyo al referéndum de la Constitución Europea. Las facturas que se presentaron a Bárcenas sobre estos actos fueron modificadas hasta cuatro veces, aumentando la cuantía de los eventos con conceptos como "viaje de prospección" o "coordinación del acto".

Rajoy visitó Granada a principios de 2005 con motivo de la campaña de apoyo a la Constitución Europea. El líder del PP paseó por algunas calles de Granada antes de entrar al acto del hotel *Rallye*. Después del evento Rajoy hizo un acto de partido dentro del salón de plenos del Ayuntamiento granadino.

El presupuesto original de *Special Events* era de 3.460 euros, pero la empresa de *El Bigotes* terminó cobrando mucho más. Después de las cuatro modificaciones de las facturas, al despacho de Luis Bárcenas llegó una factura por valor de 13.834 euros con fecha 17 de febrero de 2005.

En declaraciones a la Cadena SER, el vicepresidente ejecutivo del PP, Antonio Ayllón, afirmó que los eventos organizados por *Special Events* fueron gestionados desde Madrid. "Desde el PP de Granada nos limitamos únicamente a llenar de gente ambos actos", afirmó.

Otra de las contrataciones que el Ayuntamiento de Granada hizo a alguna de las empresas de Álvaro Pérez fue la de el stand de Fitur. Esta vez se eligió a *Down Tonw Consulting*, empresa que *El Bigotes* comparte con Francisco Correa y que se llevó la adjudicación por 59.400 euros. El equipo de Gobierno del PP insiste en defender su legalidad

Por otra parte en Málaga, el PSOE ha puesto en conocimiento de los tribunales las donaciones en torno a la construcción de la biblioteca de la Fundación Brenan en el municipio alhaurino, de 300.000 euros, así como el patrocinio del equipo de baloncesto local, de otros 18.000. Ambas fueron llevadas a cabo por las empresas del grupo Martínez Núñez TECONSA y PROINSA, implicadas en la trama *Gürtel*.

El secretario de Organización del PSOE malagueño, Francisco Conejo, ha dicho que su partido quiere "saber si existe vinculación entre estas empresas salpicadas por la trama *Gürtel*, y el *modus operandi* que está investigando en el Caso Troya, por el que existían donaciones al municipio de Alhaurín sin aparente contraprestación alguna pero que luego estaban vinculadas a la concesión de licencias urbanísticas y favores de esta índole".

En marzo de 2005 Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande y que está en libertad bajo fianza imputado de corrupción urbanística por el Caso Troya, firmó el decreto municipal 459/2005 por el que PROINSA se comprometía a costear los gastos de redacción, elaboración, maqueta y vídeo promocional y presentación de la biblioteca de la Fundación Brenan, valorados por él mismo en 300.000 euros. Sin embargo, según Conejo, "dos meses antes, en FITUR ya se había presentado públicamente dicho proyecto", ha afirmado el dirigente socialista.

TECONSA y PROINSA, son propietarias y promotoras del complejo de ocio y residencial "La Mota", que planea desarrollar 2.500 viviendas y un campo de golf en una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados, y para el que aún está pendiente el informe de viabilidad de recursos hídricos, ya que incrementarían la población del municipio alhaurino, de 20.000 habitantes, en otros 8.000.

Conejo ha destacado que "de nuevo, la sombra de la corrupción planea por Málaga de la mano del Partido Popular en relación a la trama *Gürtel*. Primero fue el concejal de Estepona, Ricardo Galeote, y ahora en el municipio de Alhaurín el Grande con su alcalde bajo sospecha".

Por eso, "queremos luz y taquígrafos en todas las donaciones que se han producido en este municipio, que va desde dinero en efectivo a vehículos, motocicletas, e incluso calles y plazas de la localidad.", ha subrayado.

www.elplural.com 08.10.09

EL PSOE EXIGE A ARENAS EXPLICACIONES SOBRE SU SUPUESTA RELACIÓN CON EL CASO 'GÜRTEL'

Los socialistas andaluces han pedido al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, "explicaciones inmediatas" sobre su supuesta relación con miembros de la trama 'Gürtel'. Así lo ha afirmado el secretario de Comunicación del PSOE-A, Miguel Ángel Vázquez, con respecto a una información divulgada por la *Cadena Ser* en la que en 2003 Álvaro Pérez, "El Bigotes", pedía al entonces secretario general del PP, Mariano Rajoy, el pago de "dinero B" por actos en Galicia y donde le comunicaba también que Arenas estaba al corriente del asunto. Vázquez consideró que Arenas "no puede mirar hacia otro lado y escurrir el bulto", después de que su nombre aparezca en informes policiales que le implican en una supuesta relación con miembros de esta trama.

El secretario de Comunicación indicó que, de una u otra forma, se está demostrando que los principales dirigentes del PP tenían conocimientos de los hechos que estaban ocurriendo e "hilo directo" con los responsables de la trama. Por ello Vázquez pidió una explicación pública "urgente" y que no se opte por la vía del "silencio cómplice y de buscar coartadas o cabezas de turco". "Tampoco valen las teorías conspiratorias, sino explicaciones claras sobre un asunto de extraordinaria gravedad", agregó.

Ante estas declaraciones el PP se ha puesto manos a la obra, pero no para dar estas explicaciones. Javier Arenas ha advertido de que presentará una querrela criminal a quien intente "involucrarle en algo", relacionado con la trama de corrupción dentro de su partido. Arenas ya ha dado el orden de movilizar al equipo jurídico del PP contra las declaraciones de Vázquez.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha asegurado hoy que el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, no está involucrado en "absolutamente nada" que tenga con ver con el caso Gürtel, que investiga una trama empresarial en el entorno de esta formación. En este sentido Sanz se ha limitado a afirmar que "absolutamente todas" las cuentas de su partido "son A" y que están supervisadas por el Tribunal de Cuentas. "Yo me remito a esos informes del Tribunal de Cuentas", ha dicho el dirigente popular, quien ha reiterado que en su partido "solo hay una cuenta y esa cuenta es la A", algo que está "supervisado" por el Tribunal de Cuentas, como el resto de partidos.

www.elplural.com 28.09.09

GÜRTEL DEJA SECUELAS EN MÁLAGA

Begar, empresa del constructor José Luis Uribarri imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la operación Gürtel, ha dejado en la estacada toda una promoción de viviendas de promoción oficial, al presentar un expediente de concurso de acreedores en Junio pasado. El concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Málaga afirma que no tenía "ni idea" de la relación de esta empresa con la trama corrupta. Begar tiene un pasivo de 297 millones de euros y ha dejado sin concluir un total de 92 viviendas de protección oficial en Málaga. Está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y de falsedad.

Uribarri que además de constructor es propietario de una amplísima red de televisiones locales y regionales así como de otros medios de carácter conservador implantado fuertemente en Castilla y León, comunidad gobernada por los populares. se halla imputado en la operación *Gürtel*, que investiga una presunta trama de corrupción ligada al PP por medio de contrataciones en administraciones públicas de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Ayuntamiento de la capital malagueña gobernado por el popular Francisco de la Torre, adjudicó a Begar Construcciones una promoción de VPO y el Instituto Municipal de la Vivienda le adjudicó las obras de 280 VPO de Soliva por importe de 22,5 millones de euros así como en el Puerto de la Torre".

El concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, ha querido salir al paso de este conflicto afirmando que que no tenía "ni idea" de la relación de esta empresa con el citado caso, algo muy difícil de entender ya que es de sobra conocido por los medios de comunicación esta situación. La relación contractual del ayuntamiento de la capital con Begar es justificada por Maldonado como "normal", pues cumplía todas las condiciones que exige la ley de contratos del Estado.

www.elplural.com 06.08.09

LA EX ALCALDESA DE JEREZ IGNORÓ DOS INFORMES SOBRE LAS ADJUDICACIONES

La ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La también parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa.

La interventora municipal emitió el 8 de enero de 2004 dos documentos en los que hizo constar que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de estas dos advertencias escritas en las que la interventora municipal detallaba las cantidades a pagar a las empresas adjudicatarias, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia.

De hecho, sólo una semana después de los informes de intervención la dirigente popular firmó la adjudicación de los contratos "mediante procedimiento negociado sin publicidad" a las empresas investigadas por Garzón. El 15 de enero rubricó la primera orden de contratación. García Pelayo declaró "válida la licitación" y adjudicó un contrato a la empresa Special Events por valor de 162.806,37 euros. Días más tarde, el 19 de enero, selló con los representantes de Down Town, Isabel Jordán y Javier Nombela, ambos imputados en la trama de corrupción, la relación contractual para eventos relacionados con Fitur por la cantidad de 40.000 euros.

El expediente completo sobre la gestión municipal en los contratos de Fitur en 2004 está ya en poder de la Audiencia Nacional. La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), la trasladó a la sede judicial vía fax y por mensajería. Según fuentes de la presidencia de la corporación jerezana, fue personal del Ayuntamiento el que contactó a primera hora de la mañana de con la secretaria del juzgado de Garzón para enviar toda la documentación.

Siguiendo las instrucciones de la interlocutora, personal municipal transmitió el expediente de manera inmediata a Madrid. A partir de entonces, hubo varias llamadas en las que la secretaria del juzgado requirió la documentación y respondió a diversas dudas de asesores municipales, que, por ejemplo, desconocían si podían facilitar el expediente al Partido Popular una vez remitido a la Audiencia.

Mientras se hacían estas gestiones, la concejal del PP y sus compañeros de filas en la corporación decidieron encerrarse en el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí permanecieron más de tres horas reclamando la totalidad del expediente.

A las 14.30 acabó la protesta. Los concejales del PP tuvieron acceso a los 19 documentos relacionados con las empresas a las que García Pelayo adjudicó los contratos en 2004.

(www.publico.es, 27/02/09)

EL PP CONTRATÓ A DEDO EN JEREZ A EMPRESAS QUE INVESTIGA GARZÓN

La trama de corrupción vinculada a instituciones gobernadas por el PP que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene más ramificaciones en Andalucía. En concreto, salpica también al Ayuntamiento de Jerez cuando estaba gobernado por la popular María José García Pelayo.

La dirigente popular adjudicó a dedo en enero de 2004 los contratos de servicios para la participación de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las empresas Special Events y Down Town Consulting (actualmente denominada Easy Concept), vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

García Pelayo firmó las adjudicaciones por procedimiento de urgencia y sin publicidad por valor de 202.172 euros. En los contratos rubricados por la dirigente popular están estampadas las firmas de

Pablo Crespo, consejero delegado y representante de la empresa Special Events, S.L.; así como de Isabel Jordán y de Javier Nombela, ambos en representación de la firma Down Town Consulting, S.L.

Los tres firmantes están implicados en la trama. Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, ya ha ingresado en prisión. Jordán está imputada por Garzón, al igual que Nombela, vocal del PP en la Junta de Distrito de Moncloa y destituido por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón.

La adjudicación se produjo incurriendo en varias irregularidades. García Pelayo ignoró un informe, del 8 de enero de 2004, de la interventora municipal en el que se advertía de que el Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) era el órgano competente para la adjudicación de los trabajos.

Sin embargo, la ex regidora adjudicó las obras una semana después, el 15 de enero, por resolución de presidencia. De hecho, no se dio cuenta al Consejo Rector hasta el 24 de marzo, dos meses después de que finalizara la feria.

Hay más irregularidades. García Pelayo, en calidad de presidenta del IPDC, recurrió a un procedimiento excepcional y urgente para la tramitación de los expedientes, con arreglo a un artículo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La popular se acogió a esa urgencia evitando así el concurso público y la publicidad de las adjudicaciones a pesar de que la organización de Fitur es un evento perfectamente previsible para un ayuntamiento.

En cualquier caso, este procedimiento exige a la Administración negociar al menos con tres empresas distintas para adjudicar el servicio. Un requisito que tampoco se cumplió. En la documentación sólo se hace constar la existencia de las empresas adjudicatarias de los contratos.

Desde el PP se afirmó que las relaciones del IPDC con las empresas de la trama "siempre fueron técnicas" y que García Pelayo "respetó la legislación vigente". Los populares anuncian que presentarán "de inmediato" las acciones civiles o penales que correspondan.

Este nuevo caso destapado en Jerez no es el primero que se registra en Andalucía. De hecho, los ayuntamientos de Granada y Estepona también contrataron servicios con las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón.

Las ramificaciones

- LA EMPRESA PASADENA VIAJES, CONTROLADA POR FRANCISCO CORREA, FACTURÓ 53.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA ENTRE FEBRERO DE 2000 Y JUNIO DE 2003, CUANDO GOBERNÓ EL PP.

- LA ESPOSA DE CORREA, CARMEN RODRÍGUEZ, TRABAJÓ DURANTE DOS MESES COMO JEFA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO.

- LA CONSTRUCTORA BEGAR, DEL TAMBIÉN IMPUTADO JOSÉ LUIS ULIBARRI, TIENE PROMOCIONES DE VPO EN MÁLAGA

(www.elpais.com, 26/02/09)